



ANALES DEL CONCEJO

DE BOGOTÁ, D.C.

PROYECTOS DE ACUERDO

AÑO II N°. 4002 DIRECTORA: LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO JUL. 30 DEL AÑO 2025

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

PROYECTO DE ACUERDO NO 692 DE 2025 PRIMER DEBATE. "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS FRENTE DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ "....	38664
PROYECTO DE ACUERDO NO 693 DE 2025 PRIMER DEBATE. "POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y EXHIBICIÓN DEL CAR AUDIO Y TUNING COMO EXPRESIÓN CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL DISTRITO CAPITAL ".....	38691
PROYECTO DE ACUERDO NO 694 DE 2025 PRIMER DEBATE. "POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP- EN HORARIO EXTENDIDO, EN EL MARCO DE EVENTOS PRIVADOS DE AGLOMERACIÓN EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. ".....	38702
PROYECTO DE ACUERDO NO 695 DE 2025 PRIMER DEBATE. "POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLÍAN Y FORTALECEN LOS INCENTIVOS PARA LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS DISTRITALES Y LOCALES DE JUVENTUD EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ".....	38713
PROYECTO DE ACUERDO NO 696 DE 2025 PRIMER DEBATE. "POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES CONJUNTAS CON EL COMERCIO LOCAL BARRIAL O PEQUEÑO COMERCIO COMO MEDIDA PARA PREVENIR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO EN BOGOTÁ ".....	38726
PROYECTO DE ACUERDO NO 697 DE 2025 PRIMER DEBATE. "POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, CULTURA Y SABERES INDÍGENAS EN EL CURRÍCULO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ ".....	38740
PROYECTO DE ACUERDO NO 698 DE 2025 PRIMER DEBATE. "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA RED DEL CUIDADO COLECTIVO DE MUJERES INDÍGENAS VINCULADAS A LAS MANZANAS DE CUIDADO EN EL DISTRITO CAPITAL ".....	38753
PROYECTO DE ACUERDO NO 699 DE 2025 PRIMER DEBATE. "POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYE EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UNA COMISARÍA DE FAMILIA ESPECIALIZADA PARA LOS ASUNTOS INDÍGENAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ".....	38776
PROYECTO DE ACUERDO NO 700 DE 2025 PRIMER DEBATE. "PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE CREA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS SAGRADOS" EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ".....	38784
PROYECTO DE ACUERDO NO 701 DE 2025 PRIMER DEBATE. " POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL ETNIA AL PARQUE EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ ".....	38794
PROYECTO DE ACUERDO NO 702 DE 2025 PRIMER DEBATE. " POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN ALIVIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES AFECTADOS POR RETRASOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ".....	38801
PROYECTO DE ACUERDO NO 703 DE 2025 PRIMER DEBATE. " POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DISTRITAL DE VIOLENCIA POLICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ".....	

PROYECTO DE ACUERDO NO 692 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS FRENTE DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

Establecer medidas que permitan la organización y fortalecimiento de los frentes de seguridad de la ciudad de Bogotá.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones jurídicas:

Del orden Constitucional:

- Artículo 2 – Constitución Política de Colombia: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
- Artículo 11 – Constitución Política de Colombia: El Derecho a la vida es inviolable
- Artículo 13 –Constitución Política de Colombia: Las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica
- Artículo 22 – Constitución Política de Colombia: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento;
- Artículo 23 – Constitución Política de Colombia: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.
- Artículo 40 – Constitución Política de Colombia: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

- Artículo 58 – Constitución Política de Colombia: garantizará la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
- Artículo 95 - Constitución Política de Colombia: respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; obrar conforme al principio de solidaridad social; respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas; defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; entre otros.

Bloque de constitucionalidad:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre considera que *“Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros (...) Todo individuo tiene Derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona”*.
- La Convención Americana de Derechos Humanos - Pacto de San José – los países partes *“se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”*
- Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para” indica que *“toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (...) toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y contará con total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio contra sus derechos”*

Que la participación e intervención de la ciudadanía, en articulación con las autoridades locales, distritales y nacionales, es fundamental para la correcta convivencia y adecuado comportamiento de los diferentes actores sociales.

De orden Nacional:

- Que la Ley 062 de 1993 expresa que; toda persona tiene derecho a recibir inmediata protección contra cualquier manifestación delictiva o contravencional y el deber de cooperar con las autoridades; que el Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana tiene como funciones:

Recomendar las políticas del Estado en materia de seguridad de la comunidad, estableciendo planes y responsabilidades entre las diferentes entidades comprometidas.

Adoptar y disponer medidas tendientes a satisfacer las necesidades de la Policía Nacional, para el eficaz cumplimiento de su misión.

Establecer y adoptar mecanismos de revisión interna, tendientes a evaluar, controlar y mejorar la prestación del servicio.

Coordinar y hacer seguimiento del desarrollo de las diferentes acciones interinstitucionales, en función de las políticas establecidas en materias de policía y seguridad ciudadana.

Regular de manera equilibrada la doble función que desarrolla la Policía en los aspectos de prevención y control de delitos y contravenciones, así como formular recomendaciones relacionadas con el servicio de Policía y la seguridad general.

Recomendar políticas y normas técnicas que garanticen el manejo transparente, eficiente y oportuno de la información de que dispone, de acuerdo con las normas legales.

Solicitar y atender los informes que presente el Director General de la Policía Nacional, formulando recomendaciones sobre los mismos.

Velar porque la Institución Policial, como organización de naturaleza civil, cumpla su fin primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, asegurando que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Expedir su reglamento y ejercer las demás funciones que por su naturaleza le correspondan.

- Que el Decreto 2203 de 1993 determina como funciones de la Policía Nacional:

Proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizando el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Prestar el auxilio que requiera la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativas.

Ejercer, de manera permanente, las funciones de Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Educar a la comunidad en el respeto a la autoridad y la ley, mediante la orientación y divulgación permanente y oportuna en lo referente a los derechos, garantías y deberes de las personas, contenidos en la Constitución Política, en los pactos, tratados y convenciones internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Colombia.

Prevenir la comisión de hechos punibles, utilizando los medios autorizados por la ley, con el fin de asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Fortalecer las relaciones entre el ciudadano y la institución, estableciendo mecanismos efectivos, que permitan la expresión y atención del servicio de policía y seguridad ciudadana.

Atender y proteger al menor en sus derechos fundamentales, consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Establecer, mantener y fortalecer las condiciones necesarias, para que el servicio de policía sea oportuno y efectivo en las ciudades y en los campos, utilizando los medios adecuados para el mantenimiento del orden público interno en todo el territorio nacional.

Organizar, cumplir y hacer cumplir las funciones de Policía Cívica, contenidas en la ley, haciendo uso de los mecanismos necesarios para que esta actividad cumpla la misión de acercamiento a la comunidad.

Colaborar y coordinar con las autoridades judiciales y penitenciarias, lo relacionado con el cumplimiento de penas y medidas de seguridad, de conformidad con las normas que regulan la materia.

Vigilar y proteger los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y ornato público, en los ámbitos urbano y rural, de conformidad con lo establecido en las normas pertinentes.

Las demás que le determine la ley.

- Art. 135 Resolución No. 00912 de 2009 - Reglamento del Servicio de Policía: Sistema de Participación Ciudadana como la organización inteligente de procesos, procedimientos, y formas de participación ciudadana en asuntos propios de la misión institucional desarrollada en ciudades, poblados y campos, conducente a facilitar la construcción de consensos, aunar esfuerzos e intervenir en la solución de problemas de seguridad y convivencia ciudadana, bajo el liderazgo del comandante de la estación o subestación de policía, con aportes desde la pluralidad dentro del marco de la Constitución y las leyes.
- Directiva No. 014/USPOI del 12 de octubre de 1995: los Frentes de Seguridad Local son organizaciones comunitarias de cuadra, sector o barrio, lideradas por la Policía Nacional, para el desarrollo de programas cívicos, culturales, deportivos, ecológicos, educativos, de salud y recuperación del espacio público, para prevenir y contrarrestar las diferentes modalidades

delincuenciales y contravencionales, que afectan la pacífica convivencia ciudadana.

- Instructivo No. 213/DIROP-ASECI del 20 de Junio de 2002 estableció que: *Los señores Comandantes de Departamento y Metropolitanas dispondrán que el personal asignado a la Policía Comunitaria, encargados del manejo de “LOS FRENTES DE SEGURIDAD Y ESCUELAS DE SEGURIDAD CIUDADANA”, reúnan las exigencias plasmadas en el perfil establecido para la especialidad, logrando las políticas del Mando Institucional. Sabiendo de la situación que afronta actualmente el país, es necesario buscar espacios para que la comunidad se vincule participativamente en la protección de la tranquilidad y seguridad en sus áreas de trabajo, residencia o ciudades, pero siempre bajo la tutela y orientación de la Policía Nacional, cumpliendo así con la misión constitucional.*

Capacitar a los integrantes de la Policía Comunitaria para que sean verdaderos líderes de la comunidad, conozcan los pormenores de la especialidad y las herramientas que tienen para lograr los objetivos trazados.

Realizar evaluación periódica de las tareas propuestas y resultados obtenidos en la cual debe participar la comunidad componente de cada FRENTE DE SEGURIDAD Y ESCUELAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Crear estímulos adecuados para lograr que la comunidad e integrantes de la Policía Comunitaria, se unan en busca de la seguridad y convivencia pacífica.

Incentivar a los integrantes de LOS FRENTES DE SEGURIDAD Y ESCUELAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, para que se comprometan en el proceso de la búsqueda de la sensación de seguridad y a la Policía Comunitaria para que no los abandone en el desarrollo de sus tareas cívicas tendientes al logro de las metas propuestas.

Del interés y compromiso de cada integrante de la institución, depende la proyección de la imagen institucional y la consolidación de la tranquilidad que tanto reclama la comunidad.

La motivación debe jugar un papel importante de manera que permita despertar el interés de cada policial, por vincular y mantener a la ciudadanía en este proceso de los FRENTES DE SEGURIDAD Y ESCUELAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.

- Que la Política de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa Nacional (2022-2026) plantea que; *“la desconfianza ciudadana afecta la gobernanza de la seguridad y la justicia, porque su efectividad depende en gran medida de la colaboración de la sociedad con las autoridades, así como de la validación en su gestión en lo atinente a la efectividad y la contundencia para contrarrestar los delitos, la criminalidad y la impunidad.”*

Del orden Distrital:

- Artículo 2 - Acuerdo Distrital 321 de 2008: *En cada UPZ, se constituirá una Junta Zonal de*

Seguridad y Convivencia Ciudadana, dirigida por el respectivo Alcalde Local, quien debe garantizar la adecuada convocatoria de la comunidad, disponer de los medios necesarios para la realización periódica de los encuentros y velar por la asistencia de los servidores públicos que deban atender los requerimientos ciudadanos. Los Comandantes de Estaciones de Policía en cada una de las localidades deben asistir a estas juntas y sólo podrán delegar su participación en oficiales de la institución. Sin embargo, cuando las circunstancias lo ameriten y así lo solicite el Alcalde Local, su asistencia será indelegable.

PARÁGRAFO. La Secretaría de Gobierno Distrital deberá prestar apoyo logístico a las Alcaldías Locales, para el correcto funcionamiento de las Juntas Zonales.

- *Artículo 2 - Acuerdo Distrital 321 de 2008: Las Juntas Zonales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tendrán las siguientes funciones:*

- 1. Ser órgano de prevención de las autoridades y los habitantes de las Unidades de Planeamiento Zonal sobre los temas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.*
- 2. Recepcionar las informaciones y sugerencias que en materia de seguridad presenten los participantes a las Juntas Zonales.*
- 3. Trasladar a la autoridad competente, la información recibida sobre hechos que puedan afectar la seguridad o la convivencia ciudadana.*
- 4. Tramitar las quejas y reclamos de los asistentes a las juntas, ante las autoridades competentes, en materia de seguridad y convivencia ciudadana.*
- 5. Promover y acompañar el adecuado funcionamiento de los frentes de seguridad.*
- 6. Velar por la eficiente y oportuna prestación del servicio de policía.*
- 7. Promover la participación del sector privado en la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (Acuerdo 233 de 2006).*
- 8. Promover la celebración de acuerdos entre las diferentes entidades gubernamentales y la comunidad para la solución de problemas que afecten la seguridad o la convivencia ciudadana. Estos acuerdos señalarán claramente los compromisos adquiridos por el sector público y el sector privado, y se denominarán pactos locales de convivencia y seguridad ciudadana que tendrán por parte de la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana un seguimiento permanente a los compromisos suscritos.*

- *El Decreto 657 de 2011, “Por el cual se adopta la Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana y se armonizan los procedimientos y mecanismos para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana –PICS- del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” contempla:*

Artículo 51.- Participación ciudadana: Es el derecho al ejercicio pleno del poder de las personas que en condición de sujetos sociales y políticos, y de manera individual o colectiva transforman e inciden en la esfera pública en función del bien general y el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, mediante procesos de diálogo, deliberación y concertación entre actores

sociales e institucionales, para materializar las políticas públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad, diversidad, incidencia.

Con el propósito de que las intervenciones generadas a través de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana –PICS- sean más pertinentes y generen mayor sentido de pertenencia y corresponsabilidad, se generaran escenarios de participación ciudadana para la identificación de los problemas de convivencia y seguridad de las localidades y la ciudad, en los que se hagan compromisos entre los administrados y sus autoridades para la construcción de la Convivencia y la Seguridad Ciudadanas.

- Acuerdo Distrital no. 927 de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo, Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

Artículo 24. *Enfoque de lucha contra la criminalidad. El Distrito Capital destinará recursos para el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia que se encuentran fuera de servicio, dotación, estructura física y aumento de personal para el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), con el fin de aumentar su capacidad operativa, de anticipación y respuesta a eventos críticos, delincuenciales y emergencias. Asimismo, el Distrito estudiará y revisará la posibilidad de rentar y alquilar servicios de videovigilancia, que incluyan analítica de datos y uso de herramientas de inteligencia artificial, para fortalecer al Sistema.*

Adicionalmente se hará una evaluación de las capacidades instaladas de Comando y Control local con el fin de proponer e implementar un plan de fortalecimiento tecnológico que contribuya al fortalecimiento del modelo integrado de gestión de la convivencia y seguridad en los territorios y las redes colaborativas de seguridad dentro de las que se incluyen los frentes de seguridad local.

Por otro lado, en función de afectar estructuras criminales se deberán diseñar e implementar acciones encaminadas a mitigar el mercado de estructuras criminales de hurto

- Acuerdo Distrital 637 de 2016, Por medio del cual se crea la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como un:

“organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los sectores administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la seguridad ciudadana y su

presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración y coordinación de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C.”

Artículo 5 - Funciones básicas de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Además de las atribuciones generales establecidas para las Secretarías en el artículo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia tendrá las siguientes funciones básicas, algunas son:

- a. *Liderar, orientar y coordinar la formulación, la adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad*
- b. *Apoyar técnicamente a las Alcaldías Locales en la formulación y adopción de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, convivencia y acceso a la justicia de acuerdo con los lineamientos definidos por el Alcalde Mayor.*
- c. *Evaluar y revisar periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y acceso a la justicia trazadas por la Alcaldía Mayor y ejecutadas por las entidades y organismos distritales y las Alcaldías Locales.*
- d. *Fomentar la participación ciudadana para el seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que adelante la Secretaría de Seguridad.*

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En la ciudad de Bogotá, D.C., los retos en materia de seguridad y convivencia ciudadana son numerosos y complejos. La insostenible situación de inseguridad y la falta de cultura de prevención ha desmejorado la calidad de vida de los bogotanos, a la vez que aumenta la necesidad de entender y abordar las causas subyacentes de la criminalidad. Los diversos actores de la sociedad que se ven afectados por los flagelos de la inseguridad comprenden desde residentes, comerciantes y turistas hasta empresas e instituciones entre otros que experimentan de manera indirecta las consecuencias de la violencia endémica de la capital del país.

La proliferación de los factores que desmejoran la seguridad y el sano relacionamiento de la comunidad no solo refleja una falta de cohesión entre las instituciones y la población, sino también redundante en la ausencia de herramientas que promuevan una participación ciudadana en favor de fortalecer el sentido de pertenencia con los entornos de convivencia. Según la encuesta de percepción realizada por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios.

- FENALCO el 64% de los comerciantes se sienten inseguros ejerciendo su actividad económica en la ciudad. El resultado de esta encuesta también arrojó que el 57% de las personas consultadas

también se sienten inseguras en su lugar de residencia.¹ Lo que refleja un decrecimiento en la confianza de los trabajadores en sus espacios de convivencia. En el mismo sentido, la Cámara de Comercio de Bogotá - CCB en su encuesta anual tendiente a establecer la percepción de inseguridad que tienen en general los habitantes de la ciudad encontró que, el 77% de los Bogotanos experimentan una sensación de inseguridad². El miedo tiene costos importantes para la calidad de vida de la ciudadanía. La continua exposición de las personas a problemas de inseguridad genera descontento general, no solo en la ciudadanía, sino también en el sector productivo. Cuando las relaciones entre ciudadanos están mediadas por la desconfianza y el miedo, se reducen notablemente las oportunidades de cooperación y, con ello, un debilitamiento de la participación ciudadana como elemento fundamental de la democracia.

Los resultados desfavorables obtenidos en ambas encuestas son apenas una muestra de la falta de inclusión de herramientas en función de promover la participación ciudadana tendiente a mejorar la convivencia y la seguridad. Es probable que futuros resultados lleguen a conclusiones similares, esto si tomamos en consideración las cifras estadísticas de la inseguridad en Bogotá. La Policía Nacional- Dirección de Investigación Criminal e Interpol – DIJIN por medio del Observatorio del Delito Publicó cifras estadísticas y mapas de concentración del delito alarmante en relación a la situación de seguridad en Bogotá. Durante el periodo comparativo del 01 enero al 31 mayo de los años 2023 y 2024, se reportaron 441 casos de homicidios, reflejando un aumento del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En cuanto a las cifras de los delitos que afectan el patrimonio económico de los Bogotanos, los hurtos a establecimientos de comercio registraron un total de 4.035 casos, evidenciando una problemática significativa en la seguridad de los locales comerciales. Al igual, y no menos alarmante se presentaron 56.557 casos de hurto a personas en los primeros cinco meses del 2024. Este último dato revela un aumento preocupante del 2% de los casos. Finalmente el Ministerio de Defensa publicó los resultados de los delitos de impacto en Bogotá para el cierre 2023 generados con el apoyo del Sistema Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional - SIEDCO en los cuales delitos como el homicidio cerraron con un incremento del 5% con 1.017 casos de homicidio contra 1.068, el hurto a personas concluyeron con un incremento de 10.007 casos más que el total presentado para el año 2022 y el hurto a automotores cierra con un total 3.856 casos representando un incremento del 3%.³

La participación ciudadana es fundamental para prevenir el delito por varias razones, los residentes de una comunidad son quienes mejor conocen su entorno. Su participación puede proporcionar

¹ El Tiempo. (2023). Fenalco: 64% de los comerciantes en Bogotá se sienten inseguros. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/bogota/fenalco-64-de-los-comerciantes-en-bogota-se-sienten-inseguros-760989>

² El Tiempo. (2022). Inseguridad en Bogotá: ¿realidad o percepción? Recuperado de <https://www.eltiempo.com/bogota/inseguridad-en-bogota-realidad-o-percepcion-715434>

³ El Tiempo. (2023). Los cinco delitos que más afectaron Bogotá Recuperado de <https://www.eltiempo.com/bogota/los-cinco-delitos-que-mas-afectaron-la-seguridad-2023-845713>

información valiosa sobre las condiciones locales, los problemas de seguridad específicos y las áreas donde se necesita intervención, de esta forma involucrar a la comunidad en la prevención del delito es necesario, cuando los residentes se comprometen en el cuidado de sus entornos pueden llegar a una mayor vigilancia y cooperación entre las instituciones como la Policía, lo que dificulta que los delincuentes operen impunemente. Es por ello que se debe destacar la importancia de los Frentes de Seguridad en Bogotá, los cuales se consolidan como una estrategia orientada a coordinar a las organizaciones comunitarias para que coadyuven con las entidades competentes en las diferentes actividades y labores que permitan garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en el territorio. En específico, sus objetivos son:

- *“Fomentar la participación conjunta de las personas y las instituciones del Estado para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana.*
- *Fortalecer el espíritu de solidaridad e integración entre las personas.*
- *Concientizar y comprometer a las personas con su propia seguridad y convivencia.*
- *Identificar y mejorar las debilidades en materia de seguridad que presentan los sectores y su entorno.*
- *Crear canales de comunicación que faciliten la participación de la ciudadanía y las instituciones con el fin de contrarrestar las causas y factores originadores, facilitadores, estructurales y socioculturales de los delitos y conflictos ciudadanos.*
- *Crear convenios con entidades públicas y privadas con el fin de buscar apoyo a la seguridad ciudadana.*
- *Incrementar el suministro de información anticipativa para la prevención del delito y los comportamientos contrarios a la convivencia.*
- *Contrarrestar los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia que se presentan en el sector.”⁴*

Este sistema, no es nuevo ni mucho menos reciente en la ciudad, de hecho, los frentes de seguridad *“se han convertido en los últimos años en un mecanismo ampliamente adoptado por las comunidades de los barrios de la ciudad de Bogotá para abordar las problemáticas de seguridad, sobre todo en las localidades y sectores con los más altos índices de actividades delictivas y de percepción de inseguridad.”⁵* De tal forma, al igual que la inseguridad afecta de manera transversal a los ciudadanos, indiferente de su formación, nivel educativo, preferencias o actividad económica, los frentes de seguridad guardan la premisa de unir a la ciudadanía con el objetivo de contrarrestar los focos de inseguridad y sus efectos secundarios.

⁴ Policía Nacional de Colombia. ¿Qué son los frentes de seguridad? Recuperado de <https://www.policia.gov.co/contenido/frentes-seguridad>

⁵ Pares. (2023). Los Frentes de Seguridad en Bogotá de 2020 a 2022: de la política pública a la implementación. Recuperado de <https://www.pares.com.co/post/los-frentes-de-seguridad-en-bogota-de-2020-a-2022-de-la-politica-publica-a-la-implementacion>

Según respuesta a derecho de petición del 4 de enero de 2024,⁶ la Policía Metropolitana de Bogotá acreditó la existencia de 1592 frentes de seguridad activos en la ciudad de Bogotá, los cuales se encuentran distribuidos, por localidad, de la siguiente manera:

UNIDAD	FSL ACTIVOS
USAQUÉN	130
CHAPINERO	50
SANTA FE	60
SAN CRISTÓBAL	50
USME	45
TUNJUELITO	63
BOSA	75
KENNEDY	155
FONTIBÓN	111
ENGATIVÁ	108
SUBA	83
BARRIOS UNIDOS	71
TEUSAQUILLO	65
MÁRTIRES	51
ANTONIO NARIÑO	66
PUENTE ARANDA	79
CANDELARIA	35
RAFAEL URIBE	55
CIUDAD BOLÍVAR	240
TOTAL	1592

Estas cifras, permiten evidenciar una importante acogida por parte de los ciudadanos para integrar los frentes de seguridad con el fin de trabajar de la mano con la institucionalidad para afrontar la actual crisis de seguridad que permea a la ciudad de Bogotá. No obstante, para lograr un resultado efectivo de esta estrategia de participación ciudadana y buscar la disminución de los delitos en las diferentes localidades de la ciudad, es necesario la formalización de acciones territoriales con las instituciones y de apoyo tecnológico que permitan una mayor eficiencia.

Según Márquez (2020), luego de una investigación sobre los frentes de seguridad, logró constatar una serie de dificultades en la correcta ejecución de este programa:

“no fue posible identificar los objetivos y metas del programa por lo que dentro de la actualización que se realice deben ser incluidas en el programa marco los objetivos de fin y propósito del programa los cuales deben funcionar para establecer las metas específicas a ser programadas en los territorios específicos y así establecer los indicadores mediante los cuales se hará una medición constante. Una de las identificaciones claras que encontramos dentro de la investigación es que los objetivos del programa nunca fueron claras y las metas o no se encuentran establecidas o no existe acceso para revisarlas. La

⁶ Policía Metropolitana de Bogotá (2024). Respuesta a derecho de petición.

falta de metas e indicadores ha generado que no se pueda hacer un seguimiento efectivo del programa y determinar si el mismo ha sido o no exitoso”⁷(p. 46.)

Por lo tanto, resulta indispensable establecer una normatividad precisa sobre los alcances que tienen los frentes de seguridad y hasta qué punto pueden colaborar con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y otras instituciones. Asimismo, se debe propender por una elaboración articulada de objetivos, metas e indicadores específicos medibles y, sobre todo, realistas, los cuales permitirán obtener y evaluar datos concretos de los resultados que arrojen las actividades desarrolladas respecto de una disminución de los índices de inseguridad a nivel distrital como también a la disminución de la percepción de inseguridad en la ciudadanía habitante de la ciudad, qué tal como quedó evidenciado en la encuesta de percepción ciudadana realizada por Bogotá cómo vamos para el año 2023, el índice de seguridad y convivencia desmejoró en un 64,2%.⁸

De la misma forma, es imperioso que la administración distrital, liderada por la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, no solo promueva la formalización de nuevos frentes de seguridad, sino también fortalezca los frentes existentes mediante capacitaciones de acuerdo con los roles establecidos al interior de la organización comunitaria, actividades de acompañamiento y proporcione elementos necesarios como pitos, radios, linternas, alarmas, uniformes, que faciliten una articulación inmediata con las autoridades. Esto garantizará una respuesta eficaz y oportuna tanto para la prevención de delitos como para la pronta detención y judicialización de delincuentes una vez culminado el hecho delictivo.

En síntesis, el presente proyecto de acuerdo pretende establecer medidas y lineamientos que debe adoptar la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en pro del fortalecimiento de los frentes de seguridad. Como se evidencia, se trata de un programa significativo, pero su implementación adecuada demanda un respaldo normativo e institucional sólido.

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Este Proyecto de Acuerdo pretende cumplir y tener conexidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente, con el objetivo No. 16: “Paz, Justicia e Instituciones sólidas” en el que se busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, donde los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia suponen una amenaza; siendo así, es elemental que se construyan mecanismos que permitan fortalecer las actividades de las organizaciones comunitarias que tengan como finalidad colaborar con las autoridades correspondientes para la disminución de las tasas de criminalidad y violencia en el Distrito Capital.

⁷ Márquez Pérez, J. (2020). Los frentes de seguridad local en Chapinero: un programa con potencial de implementación desaprovechado. Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/50553/Trabajo%20de%20Grado%20Juliana%20Ma%CC%81rquez%20Pe%CC%81rez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁸ Encuesta de percepción ciudadana 2023, Bogotá cómo vamos. Pág. 43. Recuperado de https://bogotacomovamos.org/wp-content/uploads/2023/11/Encuesta-Percepcion-Ciudadana-2023_c.pdf

Tal como se mencionó en la justificación del presente proyecto de acuerdo, existen 1592 frentes de seguridad formalmente constituidos. Esto implica no solo la necesidad de realizar un mayor número de acompañamientos, sino también un esfuerzo adicional por parte de la administración distrital para implementar medidas específicas que contribuyan a su fortalecimiento.

En consecuencia, al priorizar este Proyecto de Acuerdo, se busca no solo fortalecer los frentes de seguridad como instancias de participación que contribuyen a la convivencia y seguridad de los territorios, sino también llevar a cabo una construcción institucional. Esta construcción tiene como objetivo fomentar el fortalecimiento de las instituciones y la salvaguarda de la vida, considerándola como el catalizador fundamental de otros derechos que todos los ciudadanos merecen.

La desincentivación de acciones o manifestaciones violentas respalda la paz y la justicia, creando entornos pacíficos propicios para la participación ciudadana en el Distrito Capital. En esencia, al fortalecer los frentes de seguridad, se promueve un tejido social sólido que no solo contribuye a la seguridad, sino que también sienta las bases para el ejercicio pleno de los derechos de todos los ciudadanos.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo Distrital (PDD) de Bogotá “*Bogotá Camina Segura*” para el periodo 2024-2027 establece en el objetivo no. 1 “*Bogotá avanza en seguridad*” específicamente en el Programa 1. “*Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza*”, la promoción del diálogo social y la cultura ciudadana para fomentar la convivencia pacífica y recuperar la confianza entre la ciudadanía y las autoridades.

Para alcanzar este objetivo y materializar dicho programa, la administración distrital plantea estrategias que buscan gestionar la irregularidad y transformar las circunstancias que generan desconfianza entre las personas e instituciones. En este sentido, se busca potenciar la capacidad de la ciudadanía para influir en la construcción de su propio desarrollo y el de su entorno. En consecuencia, el plan prevé que “*se establecerán metas de crecimiento y de resultados de las Redes de Cuidado, Redes de Apoyo y los Frentes de Seguridad, así como la capacitación permanente de los ciudadanos que se unan. Finalmente, se busca fortalecer estrategias y acciones interinstitucionales orientadas a mejorar las conflictividades sociales y brindar condiciones necesarias para ejercer libremente los derechos y promover la sana convivencia y el diálogo social.*”⁹

Adicionalmente, en el Artículo 24. *Enfoque de lucha contra la criminalidad*, se fija la obligación de llevar a cabo una evaluación de las capacidades existentes en el Comando y Control local. El objetivo es proponer e implementar un plan de fortalecimiento tecnológico que contribuya al

⁹ El Plan de Desarrollo Distrital (PDD) de Bogotá “Bogotá Camina Segura” 2024-2027. <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-local/plan-de-desarrollo-bogota-2024-2027>

modelo integrado de gestión de la convivencia y seguridad en los territorios. **Esto incluye las redes colaborativas de seguridad, como los frentes de seguridad locales.**

Por lo tanto, el fortalecimiento de los frentes de seguridad se propone como una estrategia clave para incentivar la creación de organizaciones comunitarias que colaboren con las entidades en la garantía de la seguridad y convivencia pacífica en el territorio. La participación activa de la comunidad en estas temáticas, y su formalización, serán estrategias fundamentales que contribuyan en la gestión de la irregularidad y la transformación de la percepción ciudadana, no solo en los índices de inseguridad, sino también en la consolidación del desarrollo propio que tiene cada ciudadano en su entorno, localidad y barrio.

Según Pares (2023), a pesar de que la administración distrital no menciona de manera directa a los frentes de seguridad en el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ) de Bogotá, en este último se identifican algunos elementos que podrían facilitar la articulación de la política pública distrital con los frentes de seguridad. Entre estos elementos se destacan:

“Primero, se reitera la necesidad de la participación ciudadana en las acciones que se lleven a cabo en los territorios por parte de las instituciones y las autoridades. Se plantean los Planes Territoriales de Convivencia y Seguridad, que serían instrumentos para identificar zonas prioritarias y adelantar la articulación con las comunidades a la hora de generar intervenciones; para esto también se crea la figura de Grupos de ciudadanos comprometidos con la seguridad y la convivencia en la ciudad. También se menciona el programa Policía de Vecindario, que buscaría un mayor acercamiento entre la Policía Nacional y la ciudadanía, incorporando a esta última en actividades de planeación, ejecución y evaluación en materia de seguridad, basado en el MNVCC y con un enfoque preventivo”.¹⁰

Así las cosas, en el presente proyecto de acuerdo, se propone formalizar, potenciar y dotar a los frentes de seguridad de herramientas para prevenir y reaccionar a actividades delictivas, lo cual puede contribuir significativamente al cumplimiento de las metas trazadas en el PDD.

VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Para efectos de la construcción del presente proyecto de acuerdo, se acompañó a la comunidad en el proceso de estructuración e inauguración de diferentes frentes de seguridad. Asimismo, se acompañaron las diferentes reuniones convocadas por los miembros de las organizaciones comunitarias ya formalizadas. En estos espacios, la ciudadanía manifestó la necesidad de contar con

¹⁰ Pares. (2023). Los Frentes de Seguridad en Bogotá de 2020 a 2022: de la política pública a la implementación. Recuperado de <https://www.pares.com.co/post/los-frentes-de-seguridad-en-bogot%C3%A1-de-2020-a-2022-de-la-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-a-la-implementaci%C3%B3n>

los elementos necesarios para contribuir eficazmente en la disminución de la inseguridad al interior de sus territorios, a saber:

1. Pitos y silbatos
2. Radios y demás elementos de comunicación
3. Linternas
4. Dispositivos de alarma
5. Cámaras de seguridad
6. Kits de primeros auxilios
7. Botones de pánico

Además, se ha expresado la necesidad de contar con una política pública que fortalezca las actividades de los frentes de seguridad y promueva su articulación con las diferentes entidades que tienen como misión promover y garantizar la seguridad, tanto a nivel distrital, como nacional. En consecuencia, como resultado de estos diálogos con la ciudadanía, surge la iniciativa aquí propuesta para que, desde el concejo de Bogotá, se fomente el reconocimiento de los frentes de seguridad como organizaciones formales, fortalecidas, potenciadas y dotadas, que permitan contribuir activa y eficazmente en la disminución de los elevados niveles de inseguridad que azotan a la capital del país.

VII. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1° del artículo 12:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.”

De igual forma, el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 confiere al alcalde Mayor la atribución de “Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos”. De esta manera, el presente Proyecto de Acuerdo establece un marco general, dejando a cargo del gobierno distrital, en el ejercicio de su capacidad reglamentaria, desarrollar y poner en práctica lo dispuesto en esta iniciativa normativa.

VIII. IMPACTO FISCAL

El presente proyecto no genera ningún impacto fiscal adicional, solo traza una ruta adicional dentro del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2024-2027 y el Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, la cual puede llevarse a cabo con el presupuesto actual.

PROYECTO DE ACUERDO NO 692 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS FRENTE DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 1 y 7 del artículo 12, del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1: Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto establecer un conjunto de medidas tendientes a organizar y fortalecer los frentes ciudadanos de seguridad en la ciudad de Bogotá D.C.

Artículo 2: Registro de los Frentes de Seguridad: La Administración distrital, creará el Registro Oficial de Frentes de Seguridad (ROFS) activos en Bogotá, D.C., el cual será elaborado y administrado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Parágrafo primero: Todos los frentes de seguridad existentes en la ciudad deberán inscribirse en este registro, proporcionando información detallada sobre su ubicación, número de integrantes, coordinadores designados, barrios y localidad en la que operan.

Parágrafo segundo: El proceso de registro de los frentes de seguridad no generará costo alguno.

Artículo 3: Dotación Tecnológica de los Frentes de Seguridad. Los Frentes de Seguridad debidamente constituidos de acuerdo con la normatividad vigente e inscritos en el ROFS, podrán recibir dotación tecnológica por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. La dotación tecnológica podrá incluir radios de comunicación, teléfonos móviles, linternas, cámaras de seguridad, alarmas u otros dispositivos que contribuyan al fortalecimiento de las actividades de vigilancia y la prevención y disuasión del delito.

Artículo 4: Requisitos. Para recibir la oferta pública del distrito, atención institucional, dotación tecnológica, capacitación de seguridad y convivencia y demás medidas de fortalecimiento que estime pertinente la Administración Distrital, los frentes de seguridad deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- 1- Ser un frente de seguridad debidamente constituido bajo los parámetros de las Policía

Metropolitana de Bogotá (MEBOG).

- 2- Estar debidamente inscritos en el Registro Oficial de Frentes de Seguridad (ROFS) de las Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).
- 3- Contar con la participación de mínimo 20 personas residentes o trabajadores del perímetro que comprende el frente de seguridad.
- 4- Tener un grupo de Whatsapp, con participación del cuadrante o personal de la policía comunitaria de la estación de policía de la respectiva localidad.

Artículo 5: Capacitaciones en Seguridad para los Frentes de Seguridad y fortalecimiento de las actividades territoriales. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia organizará y facilitará jornadas de capacitación dirigidas a los integrantes de los Frentes de Seguridad. Estas capacitaciones abordarán aspectos relacionados con la prevención del delito, identificación de riesgos, sensibilización en cultura ciudadana, conocimiento de líneas de emergencias, entre otros.

Adicionalmente, se podrán desarrollar actividades lúdico-pedagógicas dirigidas a la ciudadanía con el propósito de promover la cooperación de la comunidad con las autoridades, la prevención del delito y la autorregulación y cultura ciudadana.

Parágrafo único: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para el cumplimiento de este artículo, propenderá por realizar convenios interadministrativos con otras entidades distritales cuyo objeto o misionalidad se encuentre relacionado a la prevención del delito y violencias cualquiera que sea su denominación.

Artículo 6: Evaluación y Seguimiento: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia llevará a cabo una evaluación periódica del desempeño de los Frentes de Seguridad registrados, con el fin de verificar su eficacia y realizar los ajustes necesarios para su mejoramiento continuo. Adicionalmente, se establecerán indicadores de rendimiento para medir el impacto de los Frentes de Seguridad en la reducción de los índices de criminalidad y la percepción de seguridad en el distrito capital.

Artículo 7. Articulación Oportuna: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) propenderá por dotar los CAI de la ciudad, con celulares inteligentes que permitan la inclusión de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) en los grupos de WhatsApp, creados por los frentes de seguridad, y la reacción oportuna de las autoridades a los diferentes llamados de emergencia.

Artículo 8. Reglamentación e implementación. La Administración reglamentará e iniciará la implementación de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 9. Informe. La Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia remitirá al Concejo de Bogotá un informe anual sobre la implementación del presente acuerdo.

Artículo 10. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación.

Publíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá, D.C., a los _____ días del mes de _____ del año 2025

H.C JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

Partido Centro Democrático

H.C. JESÚS DAVID ARAQUE

Partido Nuevo Liberalismo

PROYECTO DE ACUERDO NO 693 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y EXHIBICIÓN DEL CAR AUDIO Y TUNING COMO EXPRESIÓN CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL DISTRITO CAPITAL"****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer medidas para la promoción, reconocimiento y fomento del tuning como una manifestación cultural que impulsa la economía en el Distrito Capital.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. (...)

- 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;

Bloque de Constitucionalidad:**Declaración Universal de Derechos Humanos:**

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a (...) la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. (...).

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

*Artículo 6. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y **cultural** constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.*

Artículo 15.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;(...)

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

De orden legal:

Ley General de Cultura - Ley 1185 de 2008 (por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.)

Artículo 1: *Modifíquese el artículo 4° de la Ley 397 de 1997 el cual quedará, así: (...)*

a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.

Para el logro de los objetivos de que trata el inciso anterior, los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las comunidades, grupos sociales y poblacionales incorporados a estos, deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo y asignarán los recursos para la salvaguardia, conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural; (...)

De orden Distrital:

Acuerdo Distrital 257 de 2006. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Artículo 74. Misión del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. *El Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo tiene la misión de crear y promover condiciones que conduzcan a incrementar la capacidad de producción de bienes y servicios en Bogotá, de modo que se garantice un soporte material de las actividades económicas y laborales que permitan procesos productivos, de desarrollo de la iniciativa y de inclusión económica que hagan efectivos los derechos de las personas y viables el avance social y material del Distrito Capital y sus poblaciones, en el marco de la dinámica ciudad región.*

Artículo 90. Misión del Sector Cultura, Recreación y Deporte. *El Sector Cultura, Recreación y Deporte tiene como misión garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos a la cultura, a la recreación y al deporte de los habitantes del Distrito Capital, así como fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo.*

Para los correspondientes efectos se entenderá la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan el conglomerado humano que habita en el Distrito Capital y a sus distintos sectores y comunidades y que engloba además de las artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y bajo el reconocimiento de que la cultura es por su propia naturaleza, dinámica y cambiante.

Artículo 94. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. *La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera, que tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella adscritas y vinculadas y la sociedad civil. (...).*

f. Impulsar la formación y gestión de actividades y programas artísticos, culturales, deportivos y de alto rendimiento, acorde con los planes sectoriales y con el plan de desarrollo económico y social y de obras públicas del Distrito Capital. (...)

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

SINOPSIS HISTÓRICA DEL TUNING

El término “tuning” proviene del inglés “to tune”, que significa “afinar” o “ajustar”. Según la Real Academia Española, en su tercera acepción, “tunear” se refiere a “adaptar algo, especialmente un vehículo, a los gustos o intereses personales”. En el ámbito automotriz, el tuning implica la modificación de vehículos en aspectos mecánicos, estéticos y sonoros para reflejar la personalidad y preferencias de su propietario.

Aunque no existe una fecha exacta que marque el inicio del tuning, se reconoce que esta práctica comenzó a ganar popularidad en Estados Unidos después de la Gran Depresión de los años 30. Tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron movimientos como el “Hot Rod” y el “Custom”, donde los jóvenes estadounidenses personalizaban sus vehículos para destacar y expresar su individualidad. Paralelamente, en barrios latinos y afroamericanos de Los Ángeles, nació el estilo “Lowrider”, caracterizado por suspensiones bajas y ruedas pequeñas que permitían que los autos se desplazaran a baja velocidad, reflejando una estética única.

Escena tradicional de la cultura *lowrider*.Vehículo con estilo *Hot rod*®

Fuente: <https://autosblogmexico.com/respuestas/lowrider-moda-o-cultura-ta2094>,
https://www.tuningblog.eu/es/kategorien/tipps_tuev-de

En Europa, durante las décadas de 1960 y 1970, países como Alemania vieron un auge en la modificación de vehículos, inicialmente enfocada en competencias automovilísticas y posteriormente extendida a vehículos de uso cotidiano. En Asia, especialmente en Japón, el tuning se vinculó estrechamente al “drifting”, aprovechando la presencia de grandes fabricantes como Toyota, Nissan y Honda, que facilitaban mejoras en rendimiento y diseño.

Coches estilo *Import*. Honda *civic eg y ek*.*Drift* por las montañas de Japón, época de los 90

Fuente: <https://autosblogmexico.com/respuestas/lowrider-moda-o-cultura-ta2094>,
https://www.tuningblog.eu/es/kategorien/tipps_tuev-de

En Colombia, aunque hay poca documentación sobre los inicios del tuning, se reconoce que esta cultura tomó impulso a principios de los años 2000, influenciada por la saga cinematográfica “Rápidos y Furiosos”, que destacó los autos modificados. Ciudades como Bogotá y Cali fueron pioneras en adoptar esta tendencia, con entusiastas que, independientemente de la marca o modelo de sus vehículos, comenzaron a realizar modificaciones inspiradas en estilos internacionales. Este movimiento se expandió rápidamente a otras ciudades principales del país.

El tuning ha evolucionado hasta convertirse en una expresión artística y un sector económico en crecimiento. No solo implica la personalización de vehículos en términos de carrocería, iluminación y sonido, sino que también ha dado lugar a un mercado de repuestos y servicios especializados. En la actualidad, esta práctica es reconocida como un movimiento cultural que fomenta la creatividad y la innovación tecnológica en el sector automotriz.

A continuación, se abordarán tres dimensiones clave del tuning en Colombia:

1. Dimensión Cultural

El tuning es una manifestación cultural que refleja la identidad y creatividad de quienes lo practican. Para muchos aficionados, modificar un vehículo es una forma de expresión personal, donde cada detalle —desde la pintura hasta la mecánica— representa una visión única del propietario. En este sentido, el tuning trasciende la simple modificación de automóviles para convertirse en una subcultura con un lenguaje propio y un sentido de comunidad.

En eventos y exhibiciones de tuning, se reúnen personas de diversas edades y contextos sociales, lo que convierte a esta práctica en un punto de encuentro intergeneracional. En Colombia, eventos como el “Campeonato Nacional de Car Audio y Tuning”¹¹ han ganado reconocimiento nacional e internacional, evidenciando que el tuning es más que una afición: es una manifestación artística y una industria en crecimiento. Por ejemplo, en agosto de 2023, Medellín fue sede de este campeonato durante la Feria de las Flores, consolidando su relevancia en el ámbito cultural y económico del país.

Además, el tuning fomenta la disciplina y el aprendizaje técnico. Los aficionados adquieren conocimientos en mecánica, aerodinámica, electricidad y diseño, lo que les permite desarrollar habilidades que pueden traducirse en oportunidades laborales dentro del sector automotriz.

2. Dimensión Económica

El tuning no solo es una actividad recreativa, sino también un sector que impulsa la economía. En Colombia, existen cientos de talleres especializados en personalización de vehículos, los cuales generan empleo y dinamizan la industria de autopartes. La demanda de repuestos, sistemas de sonido, pintura especializada y accesorios ha dado lugar a un mercado sólido que beneficia a fabricantes, importadores y comerciantes.

Adicionalmente, los eventos de tuning en Colombia han demostrado tener un impacto económico significativo en las ciudades donde se realizan, como Medellín y Cali. Aunque no se dispone de estadísticas específicas exclusivamente para eventos de tuning, la contribución general de los eventos de automovilismo y motociclismo a la economía local es notable.

Por ejemplo, en Medellín, eventos de gran magnitud en el sector automotor y motociclistico han generado ingresos considerables. En 2024, la Feria de las 2 Ruedas¹² aportó \$22,6 millones de dólares, consolidándose como uno de los eventos más importantes para el sector.

En Cali, eventos relacionados con la cultura del automovilismo, como el Cali Exposhow Car y ferias de exhibición de autos personalizados¹³, han contribuido a la economía local. La realización de estos eventos impulsa el turismo y la ocupación hotelera, similar al impacto registrado en la Feria de Cali, donde los ingresos turísticos totales ascendieron a \$49.525.390.000.

Si bien estos datos corresponden a eventos de índole automovilística y motociclistica en general, reflejan la capacidad de las ciudades colombianas para albergar exhibiciones de vehículos modificados que generan ingresos por inscripciones, patrocinios, turismo y ventas de productos especializados. Es razonable inferir que los eventos de tuning, al atraer a miles de asistentes y entusiastas del automovilismo, contribuyen de manera similar al crecimiento del turismo temático y al desarrollo económico local en ciudades de todo el país.

¹¹ https://latiquetera.com/evento/campeonato-nacional-de-car-audio-y-tuning-2023?utm_source=chatgpt.com

¹² https://www.radionacional.co/actualidad/economia/90-millones-de-dolares-el-impacto-economico-de-los-grandes-eventos-de-este-ano?utm_source=chatgpt.com

¹³ https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/184317/67-feria-de-cali-cerro-con-cifras-historicas-en-asistencia-participacion-de-artistas-reduccion-de-violencia-e-impacto-economico-en-la-ciudad/?utm_source=chatgpt.com

En este contexto, es fundamental que el Distrito reconozca y apoye el tuning como una actividad económica y cultural legítima, promoviendo su desarrollo a través de políticas que faciliten la formalización de talleres y la realización de eventos.

3. Dimensión Tecnológica

El tuning ha sido un motor de innovación en la industria automotriz. La búsqueda de mejoras en desempeño, aerodinámica y eficiencia energética ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los vehículos. En Colombia, los aficionados al tuning han adoptado sistemas avanzados de inyección electrónica, frenos de alto rendimiento y tecnologías de iluminación LED, contribuyendo a la modernización del parque automotor.

El tuning ha evolucionado más allá de la mera personalización estética o el aumento del rendimiento, incorporando prácticas que promueven la sostenibilidad y la eficiencia energética. Una de estas prácticas es el eco tuning¹⁴, también conocido como ecotuning o eco remapping, que se centra en optimizar la eficiencia del motor para reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones contaminantes. Esta técnica avanzada ajusta parámetros del motor para lograr una combustión más eficiente, beneficiando tanto al medio ambiente como al rendimiento del vehículo.

Además, la tendencia hacia soluciones más sostenibles ha llevado al tuning a evolucionar, incorporando modificaciones que mejoran la eficiencia energética y reducen las emisiones. Esto fusiona el arte del tuning con la responsabilidad ambiental, demostrando que la personalización vehicular puede alinearse con objetivos ecológicos.

En el contexto de los vehículos eléctricos (EVs), los propietarios están adoptando modificaciones estéticas como envolturas personalizadas, body kits y llantas aerodinámicas¹⁵. Estas mejoras no solo realzan la apariencia del vehículo, sino que también contribuyen a la eficiencia energética al optimizar la aerodinámica y reducir la resistencia al viento.

CONCLUSIÓN

El tuning ha evolucionado más allá de una simple práctica de personalización vehicular para convertirse en un fenómeno cultural, económico y tecnológico con un impacto significativo en Colombia. Como se ha expuesto, esta actividad no solo fomenta la creatividad y la identidad de sus seguidores, sino que también genera empleo, impulsa el turismo y promueve el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector automotriz.

Desde una perspectiva económica, los eventos de tuning han demostrado su capacidad para dinamizar el comercio local, atraer visitantes y fortalecer la industria de autopartes y servicios especializados. A nivel tecnológico, la integración de innovaciones en aerodinámica, eficiencia energética y reducción de emisiones refleja el potencial del tuning para alinearse con las tendencias globales de movilidad sostenible.

Dado su impacto multidimensional, es fundamental que el Distrito reconozca y promueva el tuning como una actividad legítima y regulada, asegurando su desarrollo en un marco que fomente la formalización de talleres, la realización de eventos y la adopción de prácticas responsables. Con un enfoque adecuado, el tuning puede consolidarse como un sector que no solo genera oportunidades económicas y culturales, sino que también contribuye a la modernización del parque automotor y al crecimiento sostenible de la ciudad.

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

¹⁴ https://ecupro.es/eco-tuning-optimizacion-eficiente-para-tu-vehiculo/?utm_source=chatgpt.com

¹⁵ https://www.elcarrocolombiano.com/reportajes/guia-y-tendencias-del-tuning-asi-es-el-mundo-de-la-personalizacion-de-carros/?utm_source=chatgpt.com

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

H. Concejal de Bogotá D.C.

Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 693 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y EXHIBICIÓN DEL CAR AUDIO Y TUNING COMO EXPRESIÓN CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL DISTRITO CAPITAL"****EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos para la promoción, fomento y exhibición del Car Audio y Tuning, como expresiones de innovación, personalización vehicular y cultura urbana en el Distrito Capital.

Artículo 2. La Administración Distrital en materia de promoción, fomento y exhibición del Car Audio y Tuning en Bogotá, tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:

- 1. Reconocimiento:** Reconocer y visibilizar la labor de los profesionales, aficionados y empresarios del sector del Car Audio y Tuning en Bogotá, promoviendo su aporte a la innovación y cultura automotriz.
- 2. Zonas de encuentro:** Promover dentro de los eventos del Distrito, como el Festival de Verano, espacios de integración y cultura urbana, que permitan a la comunidad conocer e interactuar con las tendencias del car audio y tuning en un ambiente seguro, regulado y promovido por las autoridades distritales, fomentando así la creatividad, la participación ciudadana y el uso adecuado del espacio público.
- 3. Reactivación económica:** Incentivar la economía local a través de la participación de emprendedores, talleres y comerciantes relacionados con el sector.
- 4. Movilidad sostenible y segura:** Crear conciencia sobre la movilidad sostenible, fomentando el respeto por las normas de tránsito y el adecuado uso de las modificaciones vehiculares dentro del marco legal vigente.

Artículo 3. La Administración Distrital coordinará con las entidades competentes la regulación y autorización de espectáculos públicos artísticos, culturales, recreativos y deportivos relacionados con el Car Audio y Tuning en el Distrito Capital. Se definirá e implementará una estrategia de articulación institucional e intersectorial para facilitar y fomentar la realización de estos eventos en el Distrito Capital, optimizando los trámites y procesos administrativos necesarios.

Artículo 4. Establézcase la celebración del día del Car Audio y Tuning el último domingo del mes julio de cada año.

Artículo 5. La programación y difusión de los eventos artísticos, deportivos y culturales de Car Audio y Tuning se dará a conocer a través de los canales institucionales disponibles, garantizando el acceso a información sobre las actividades y escenarios dispuestos para su realización.

Artículo 6. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su promulgación.

Publíquese y Cúmplase

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

Concejal de Bogotá

Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 694 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP- EN HORARIO EXTENDIDO, EN EL MARCO DE EVENTOS PRIVADOS DE AGLOMERACIÓN EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

1. OBJETO DEL PROYECTO

Este Proyecto de Acuerdo busca que la Administración Distrital cuente con lineamientos que permitan llevar a cabo la prestación del servicio público del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP- en horario extendido, de manera eficiente y segura en el marco de eventos de aglomeración en Bogotá D.C.

2. JUSTIFICACIÓN

Bogotá D.C. se ha convertido en el escenario de grandes artistas nacionales e internacionales, convirtiéndose en uno de los principales epicentros culturales del país gracias a la variada agenda musical, artística y deportiva. La ciudad ha visto crecer festivales de talla internacional como Estéreo Picnic, haciendo de Bogotá un destino turístico alrededor de los eventos que se organizan en la ciudad.

Para la presentación de los diferentes eventos, la ciudad cuenta con escenarios y programaciones de primer nivel:

Movistar Arena, siendo un moderno recinto de eventos y entretenimiento ubicado en la localidad de Teusaquillo, cuenta con una capacidad de hasta 14.000 espectadores y es un importante punto de encuentro para conciertos, espectáculos y eventos culturales en la capital colombiana. Tienen como principal objetivo desarrollar y fortalecer la industria del entretenimiento en Colombia, generando experiencias únicas e inolvidables a través de infraestructura, servicio y talento humano.

El parque metropolitano Simón Bolívar es el más importante de la ciudad por su extensión y estratégica ubicación en el corazón de Bogotá. Cuenta con una serie de escenarios que lo conforman y están disponibles para el disfrute de la ciudadanía. Progresivamente, el parque se ha convertido en eje de la recreación y el deporte en Bogotá, gracias a la programación permanente de actividades musicales y lúdicas; pero también es identificado como un espacio ecológico, que recibe en su interior la visita de aves y especies acuáticas.

El Estadio Nemesio Camacho El Campín, es un escenario deportivo que cumple con altos estándares para albergar eventos de grandes magnitudes, no solo deportivos sino también de entretenimiento. Además de ser la sede de los equipos de fútbol locales, siendo dos de ellos algunos hinchadas de las más grandes del país, Millonarios y Santa Fe; El Campín ha sido testigo de conciertos con artistas de talla internacional, como Guns N' Roses, Bon Jovi, Soda Stereo, Justin Bieber, Foo Fighters y Lady Gaga; cuenta con una capacidad para recibir 39.000 espectadores.

La Media Torta es un teatro al aire libre ubicado en el centro histórico de Bogotá, desde su inauguración en 1938 como un anfiteatro contemporáneo donado por el Consejo Británico. Ideado en 1936 por Jorge Eliécer Gaitán, como un espacio de entretenimiento para los primeros campesinos y migrantes que llegaron a la capital, La Media Torta ha sido parte integral de la vida cultural de la ciudad. Los Tortazos son celebraciones infaltables para las familias bogotanas seguidoras de la música popular y del folclor colombiano, así como los espacios para los jóvenes que siguen géneros musicales como el reggae, ska, hip hop y el rock, entre otros.

Corferias, con más de 70 años de trayectoria y experiencia, ha desempeñado un papel fundamental en el impulso del desarrollo empresarial, industrial y cultural en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. Corferias es el recinto ferial más grande e importante de Bogotá. Inaugurado oficialmente el 8 de junio de 1954, este emblemático complejo fue concebido con el propósito de ofrecer un espacio cómodo y adecuado para la realización de todo tipo de ferias, extendiendo con el tiempo su función a exposiciones y eventos masivos de diversa índole.

Su primer gran hito fue la Feria de Exposición Internacional, que con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en la renombrada Feria Internacional de Bogotá. Dentro de sus instalaciones se encuentra el Hotel Hilton y la Gran Carpa Américas, un versátil espacio multifuncional.

La agenda musical en Bogotá es variada; eventos como Estéreo Picnic, Cordillera, Vive La Sala, entre otros, por ejemplo los organizados por emisoras de radio, hacen que la capital colombiana sea un destino cultural cada vez más consolidado. Los Festivales “Al Parque” han convertido a Bogotá en un referente de grandes eventos del continente. Los más importantes artistas del mundo incluyen a Bogotá como parada de sus giras: Backstreet Boys, Maroon 5, Kiss, Alejandro Sanz y Guns n' Roses, entre otros.

De acuerdo al último ranking publicado por la Asociación Nacional de Congresos y Convenciones – ICCA, de países y ciudades con mayor realización de eventos a nivel mundial, **Bogotá** pasó a convertirse en la primera ciudad del país con mayor número de eventos realizados; en América Latina mejoró su posición del 9 al 6, y en el mundo se ubicó entre las primeras 50 ciudades al ubicarse en el puesto número 47, subiendo 32 lugares en el ranking mundial en solo un año.

LOS EVENTOS DE AGLOMERACIÓN Y SU RECAUDO.

Luego de la pandemia, la reactivación de la industria del entretenimiento en vivo fue indiscutible, se reprogramaron eventos que no se habían podido realizar y algunas personas volvieron a destinar parte de su gasto en experiencias como conciertos.

Confirmación de ello es que, de acuerdo con el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, en Colombia el recaudo anual que lograron los espectáculos de música en vivo en 2019 fue \$23.393 millones, en 2020; en 2021 la cifra llegó a \$6.045 millones, y en 2022 a \$26.425 millones.

Tan solo la capital del país logró más de la mitad del recaudo total de espectáculos de música en vivo del año 2022, \$14.752 millones, siendo los conciertos el segmento líder en espectáculos culturales, superando al teatro y la danza, que en 2022 obtuvieron un recaudo menor a \$3.000 millones.

Estas cifras tienen un comportamiento geográfico particular, tan sólo Bogotá logró más de la mitad del recaudo total, \$14.752 millones, mientras que el resto del país consiguió los \$11.750 millones restantes de 2022.

El estudio Target Group Index Colombia 2022 que realizó Kantar Ibope Media señaló que 62% de los encuestados asegura que asiste a experiencias culturales en Bogotá. Las personas de 25 a 45 años son 85% del total de los usuarios de la plataforma Atrápalo y tienen un gasto promedio de \$1,6 millones (planes nacionales) y \$3 millones (internacionales) en paquetes todo incluido para asistir a eventos como festivales musicales.

Los usuarios entre 25 a 45 años se componen por 60% mujeres y 40% hombres. Y según el análisis de tendencias de Atrápalo.com.co, un ejemplo de los eventos con mayor atractivo fue el Festival Estéreo Picnic 2023 que congregó a 173.000 asistentes entre el 23 y 26 de marzo de 2023. El comportamiento de compra para este evento tuvo 4.500 entradas de venta internacional, y la compra más adquirida fue el combo de tres días, superando la modalidad de asistir dos días o solo uno.

Con toda esta oferta de actividades culturales masivas, además de los retos que, en materia logística, de seguridad y movilidad que implica, Bogotá es una ciudad en transformación, cuya renovación urbana debe ser constante en todos los sectores. Por ejemplo, el sistema de transporte masivo Transmilenio cambió la cara de las principales vías de la capital, se cuentan regularmente con proyectos de nuevos edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales y vivienda, así como la construcción y mejoramiento de parques y bibliotecas. Todo esto ha sido motivo para que en 2006 recibiera el Golden Lion Award, entregado por la Biennale de Venezia por su renovación urbana; o para que el New York Times la nombrara como uno de los 31 destinos por visitar en 2010¹⁶.

Ahora, con datos de la última encuesta de Movilidad, que en 2023 estableció una población de 7'451.690 personas en Bogotá, y que al día se hacen más de doce millones de viajes, es necesario considerar como elemento de análisis en la movilidad los impactos generados por aglomeraciones masivas en puntos específicos de la ciudad; es justo considerar que cualquier desequilibrio de horas o volúmenes en la matriz de viajes de la ciudad puede significar el colapso de uno o varios corredores, sino de toda una zona de la ciudad. **Una ciudad con tantos posibles asistentes a un evento y cuya oferta de entretenimiento es tan variada, merece análisis y decisiones concretas sobre la oferta de transporte público para los viajes adicionales que se generen.**

Parte de las previsiones que desde el Distrito se tienen para anticipar eventualidades por los eventos de aglomeración, se consideran en el Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital, en adelante SUGA. Con el registro de las actividades, y mediante la descripción de algunas de sus condiciones, se analiza la viabilidad de su realización y puede tener cierto control de posibles emergencias.

En este sentido, y con miras a prever y atender la demanda de transporte público por los asistentes y demás personas involucradas con los eventos, se hace necesaria la posibilidad de solicitar al Distrito la extensión de la prestación del servicio de transporte público mediante el SITP. A propósito de esta posibilidad y los impactos que ha tenido no desarrollarla hasta la fecha, últimamente han habido en Bogotá momentos de masiva salida de personas de eventos sin contar con oferta de transporte público para volver a sus casas; todo esto, más allá de la inseguridad, retrasos y descontento ciudadano por tener que volver caminando o en otros medios más

¹⁶ <https://colombia.travel/es/blog/bogota-la-metropoli-de-la-cultura-y-los-negocios> Bogotá la Metrópoli de la cultura y los negocios

caros o informales, demuestra que la ciudad no está pensada en un modelo 24 horas, como se ha venido planteando precisamente desde el Concejo Distrital.

Si bien desde la Alcaldía Mayor de Bogotá extendieron el horario de la operación del Transmilenio y de los buses urbanos del Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público) para garantizar la movilidad de las personas que disfrutaron de los diversos conciertos, algo que no se había hecho en los 29 años del festival, hubo muchos problemas con el servicio e inconformismo de la ciudadanía. De hecho, en el día de cierre, se reportó que más de 17.000 personas evadieron el pago en los dos sistemas de transporte bogotanos, de acuerdo con el balance final que hizo la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz. Precisamente, en el último día del festival gratuito se volvieron a ver la escenas de gente que se le atravesaba a los buses del sistema en protesta por la poca frecuencia del paso de las rutas, que Ortiz atribuyó precisamente a los desórdenes que hubo en las paradas; especialmente el domingo, cuando simultáneamente se jugó el partido de Millonarios contra el Deportivo Pereira, que finalizó a las 10:30 de la noche, justo cuando la operación concluía en Transmilenio por lo que los hinchas del equipo embajador también se metieron en las vías del sistema para detener a los buses que pasaban por el lugar.¹⁷

Con el fin de que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar en la ciudad y no se empañe la imagen de ser el escenario cultural más importante del país, es importante que se considere ampliar el horario, contando con lineamientos para que los organizadores del evento soliciten a la Administración Distrital la posibilidad extender el horario de servicio para las rutas de Transmilenio y SITP que aplique, y así los asistentes a los diferentes eventos cuenten con garantías de movilidad y seguridad en su regreso a las casas.

Para esto, la Administración Distrital, a través de las Entidades competentes diseñará un procedimiento con el fin que los organizadores del evento informen a la Administración sobre el evento que se vaya a llevar a cabo, e incluya en esta solicitud el análisis de la flota, frecuencias y horarios necesarios para atender los viajes de regresos de quienes asistan; igualmente, es necesario considerar en el trámite la contraprestación a ofrecer por el organizador del evento para reconocer el servicio por los operadores que vayan a prestar el servicio.

Si el organizador del evento declara no poder asumir la contraprestación requerida, este podrá ofrecer alternativas al distrito para acordar los términos en que se dará la prestación del servicio según sus capacidades, o declinar su solicitud. Asimismo, La Administración Distrital no estará obligada a prestar el servicio de transporte público del -SITP- en horario extendido, mientras el organizador del evento no haya solicitado, seguido y cumplido el trámite regulado por la Administración, haciendo efectiva la contraprestación o en caso de declinar la solicitud.

Volviendo a la retribución que debería haber por los organizadores del evento para la prestación del servicio del SITP, no hay que olvidar que Bogotá actualmente cuenta con un déficit tarifario con la prestación del servicio de Transmilenio que debe cubrir el Distrito Capital para pagar las tarifas contractualmente definidas con los concesionarios, y que fueron fijadas en condiciones de mercado. Las razones del déficit anual cubierto por el Fondo de Estabilización Tarifaria FET se triplicó desde el año 2019 por (i) la caída drástica en pasajeros que trajo el covid-19 en todos los sistemas de transporte público en el mundo y (ii) la imposibilidad del distrito de reducir la evasión en el pago de la tarifa al usuario.

¹⁷ <https://www.infobae.com/colombia/2024/11/12/en-el-cierre-de-rock-al-parque-hubo-mas-de-17000-colados-en-transmilenio-y-sitp/>

El Distrito sabe perfectamente que, si se afectan económicamente los derechos contractuales de los concesionarios, Transmilenio se verá indefectiblemente enfrentado a una avalancha de controversias arbitrales costosas para el Distrito, los concesionarios, los financiadores y las aseguradoras por igual.

Es por esto que se deben buscar soluciones justas para todas las partes, con el fin de no solo garantizar el servicio de transporte público cuando hayan eventos de aglomeración en la ciudad, sino que sus organizadores trabajen de la mano con el Distrito por medio de una contraprestación, la cual podrá ser asumida en términos monetarios o en especie; toda vez que desde el Distrito se deben asumir los costos asociados a la operación del servicio y que van más allá de la tarifa comercial que se le cobra a los usuarios; además de las implicaciones contractuales por los sobrecostos para los operadores.

3. ANTECEDENTES NORMATIVOS – SUSTENTO JURÍDICO

3.1 MARCO CONSTITUCIONAL:

Artículo 2º	Son fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y asegurar la convivencia pacífica, e igualmente señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Artículo 38	Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad
Artículo 209	La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

3.2 LEYES

181 de 1995	En su artículo 3º, determina que para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado velará por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los participantes y espectadores y de las condiciones físicas y sanitarias de los escenarios deportivos; y que el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son factores básicos para la formación integral de la persona.
1493 de 2011	Reconoce, formaliza, fomenta y regula los espectáculos públicos de las artes escénicas; para lo cual en el artículo 18 de la mencionada ley, se ordena a las capitales de Departamento crear la ventanilla única de registro y atención a los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas, como mecanismo para registrar la documentación que acredite los requisitos para obtener los permisos pertinentes y cuya reglamentación corresponde a los respectivos alcaldes municipales y distritales. El artículo 19 ídem, preceptúa que las autoridades municipales y distritales deberán promover y facilitar las condiciones para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en los parques de su respectiva jurisdicción,

	como actividades de recreación activa que permiten el desarrollo sociocultural y la convivencia ciudadana
--	---

3.3. ACUERDOS DISTRITALES

Acuerdo Distrital 424 de 2009	Crea el Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación, y autorización de actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital, como mecanismo que permita a los ciudadanos, registrar de manera rápida y oportuna la documentación necesaria para tramitar los conceptos, permisos o autorizaciones para el desarrollo de actividades de aglomeración de público, y a las entidades competentes la evaluación y emisión de conceptos en línea, de acuerdo con sus competencias, según lo establecido en la normativa vigente.
Acuerdo Distrital 735 de 2019	<i>Por el cual se dictan normas sobre competencias y atribuciones de las Autoridades Distritales de Policía, se modifican los Acuerdos Distritales 79 de 2003, 257 de 2006, 637 de 2016, y se dictan otras disposiciones</i> ", establece en su artículo 4° que el Alcalde Mayor de Bogotá como primera autoridad de policía del Distrito Capital, tiene las siguientes atribuciones, entre otras: "1. <i>Dictar los reglamentos e impartir las órdenes de policía, adoptar las medidas y utilizar los medios de Policía necesarios para mantener el orden público, favorecer la protección del medio ambiente, garantizar la seguridad, convivencia, salubridad y tranquilidad ciudadana, la protección de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución Política, la Ley y los Acuerdos vigentes</i> ".

3.4. DECRETOS NACIONALES Y DISTRITALES

Decreto Nacional 3888 de 2007	Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones.
Decreto Distrital 309 de 2012	Adopta la ventanilla única de atención al usuario, creada por el Acuerdo Distrital 424 de 2009, como la ventanilla única de registro y atención a los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata el artículo 18 de la Ley 1493 de 2011.
Decreto 599 de 2013	competencias de inspección, vigilancia y control sobre las aglomeraciones de público en la ciudad, y podrán ejercer las visitas de control y seguimiento requeridas para garantizar la seguridad humana de los asistentes y participantes en los eventos culturales, recreativos y deportivos
Decreto Distrital 622 de 2016	Establece los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital -SUGA-.
Decreto Ley 2106 de 2019	modificó entre otras disposiciones, el literal f del artículo 3 y los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 1493 de 2011, con el propósito de simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en el sector cultura de la administración pública.
Decreto Nacional 1276	Por el cual se reglamentan y desarrollan los artículos 132 a 136 del Decreto Ley 2106 de 2019, referentes a la simplificación de trámites y requisitos para la

de 2020	realización de espectáculos públicos de las artes escénicas, y se dictan otras disposiciones
Decreto Distrital 470 de 2021	Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 599 de 2013, en lo relacionado con eventos culturales, recreativos y deportivos, y se dictan otras disposiciones.

4. COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 de la constitución Política, el artículo 8°, el numeral 1° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico de Bogotá D.C., el Cabildo Distrital es competente para:

- **Artículo 8. Funciones generales.** El Concejo es la suprema autoridad del Distrito capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.
- **Artículo 12. Atribuciones.** Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:
 - Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
 - Dictar normas de tránsito y transporte.

De conformidad con lo señalado en el artículo 1° del Acuerdo 741 de 2019, modificado por el Acuerdo 837 de 2022, el Concejo de Bogotá, ejerce sus atribuciones como suprema Autoridad del Distrito Capital, de conformidad con la Constitución y la Ley.

De igual manera, conforme lo dispone el artículo 3° ibídem, el Concejo de Bogotá, ejerce las atribuciones, funciones, y competencias, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el estatuto orgánico para Bogotá, las leyes especiales (...).”

5. BIBLIOGRAFÍA

- a) <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-recreacion-y-deporte/escenarios-culturales-de-entretenimiento-y-conciertos-en-bogota> Escenarios culturales y de entretenimiento en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. 21 de agosto de 2024
- b) <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-recreacion-y-deporte/bogota-una-capital-cultural> Las 8 razones por las que Bogotá es una capital cultural (20 de noviembre de 2019)
- c) <https://colombia.travel/es/blog/bogota-la-metropoli-de-la-cultura-y-los-negocios> Bogotá la Metrópoli de la cultura y los negocios

6. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 que dispone:

"Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo".

La presente iniciativa no tiene un impacto fiscal por cuanto no implica la apropiación de recursos adicionales a los sectores y entidades responsables de su implementación.

Firma,

ORIGINAL FIRMADO EN PDF

CRISTINA CALDERÓN RESTREPO

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

JUAN BAENA MERLANO

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

RICARDO CORREA

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

JESUS DAVID ARAQUE

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

JUAN MANUEL DÍAZ

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

PROYECTO DE ACUERDO NO 694 DE 2025**PRIMER DEBATE****EL CONCEJO DE BOGOTÁ**

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política, el artículo 8º, y el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

“POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SITP- EN HORARIO EXTENDIDO, EN EL MARCO DE EVENTOS PRIVADOS DE AGLOMERACIÓN EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO: El presente Acuerdo tiene como objeto dictar lineamientos para la prestación del servicio de transporte público del Sistema Integrado de Transporte público -SITP- en horario extendido, en el marco de eventos privados de aglomeración en Bogotá D.C.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEFINICIONES:

- **EVENTOS PRIVADOS DE AGLOMERACIÓN:** Los eventos privados de aglomeración de los que trata este Acuerdo serán aquellos de iniciativa privada y de cualquier carácter, tales como deportivos, recreativos, comerciales, culturales, y/o cualquier otra definición aplicable, que se realicen en el Distrito Capital.
- **SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO:** Entiéndase como el sistema integrado de transporte público de Bogotá, comprendiendo todos sus componentes: Troncal, Alimentador, Zonal, Urbano, Complementario, Especial, y Cable. En adelante se hará referencia a este como el “SITP”.
- **HORARIO EXTENDIDO:** Se refiere a períodos de prestación del servicio de transporte público por el SITP, en horarios diferentes a los de su programación previa y/o recurrente de sus rutas y/o servicios asociados.

ARTÍCULO TERCERO.- LINEAMIENTOS: La Administración Distrital, para la prestación del servicio de transporte público del -SITP- en horario extendido, en el marco de eventos privados de aglomeración en Bogotá D.C., deberá tener en cuenta y sin limitarse a estos los siguientes lineamientos.

- a. **Trámite administrativo.** La Administración Distrital, mediante las entidades que defina, formulará, regulará y publicará un trámite para la recepción, análisis y respuesta de solicitudes de los organizadores de eventos privados de aglomeración, sobre la necesidad de prestar el servicio de

transporte público del -SITP- en horario extendido, y con miras a satisfacer las necesidades de movilidad de los asistentes y demás personas involucradas con tales eventos.

La Administración Distrital encargará la coordinación de este trámite a una sola entidad, en el marco de sus competencias, garantizando su atención y respuesta de manera centralizada, eficiente y oportuna.

- b. **Solicitud para la prestación del servicio:** La solicitud para la prestación del servicio de transporte público del -SITP- en horario extendido será opcional, y de responsabilidad exclusiva de los organizadores del respectivo evento privado de aglomeración.

La solicitud deberá incluir toda la información y conforme a los plazos que defina la Administración Distrital en la regulación del trámite administrativo, considerando entre otros el Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital - SUGA.

- c. **Prestación del servicio:** La Administración Distrital considerará la posibilidad de la prestación del servicio de transporte público del -SITP- en horario extendido por operadores de transporte privados y/o públicos, así como cualquier otro tipo de asociación.
- d. **Organizadores de los eventos:** Los organizadores de los eventos privados de aglomeración de los que trata este acuerdo serán aquellos de naturaleza privada, y podrán acogerse o no a la solicitud para la prestación del servicio de transporte público del -SITP- en horario extendido.
- e. **Responsabilidades del Distrito:** La Administración Distrital deberá dar trámite y respuesta oportunos a la solicitud para la prestación del servicio de transporte público del -SITP- en horario extendido, incluyendo en la respuesta el concepto sobre las rutas, tipo de flota, frecuencias y horarios que se ajusten a las condiciones expuestas por el organizador del evento en su solicitud, así como la contraprestación requerida para la prestación efectiva del servicio, la cual podrá ser reconocida al Distrito por el organizador del evento de la manera en que se defina en la regulación del trámite administrativo.
- f. **Responsabilidades de los organizadores del evento:** Si el organizador del evento declara no poder asumir y/o no estar de acuerdo con la contraprestación requerida, este podrá ofrecer alternativas al Distrito para acordar los términos en que se pueda dar la prestación efectiva del servicio según su oferta, o declinar su solicitud.

PARÁGRAFO: La Administración Distrital no estará obligada a prestar el servicio de transporte público del -SITP- en horario extendido, si el organizador del evento no siguió ni cumplió el trámite mediante la regulación vigente ni hizo efectiva la contraprestación requerida o según se haya acordado. Tampoco lo será en caso de que el organizador del evento haya declinado su solicitud.

ARTÍCULO CUARTO.- PLAZO: La Administración Distrital, en un plazo no mayor a seis (6) meses a la expedición de este acuerdo, formulará, regulará y publicará el trámite señalado en el literal a) del artículo 3 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO CINCO.- INFORMES.- La Administración Distrital presentará anualmente un informe al Concejo Distrital sobre el cumplimiento de este Acuerdo, incluyendo entre otros la siguiente información: Descripción de los eventos y condiciones en que se prestó el servicio de transporte público del -SITP- en horario extendido, así como el recaudo o contraprestaciones generadas a favor del Distrito.

ARTÍCULO SEIS.- VIGENCIA.- El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en el Registro Distrital.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA

Presidente del Concejo de Bogotá, D.C.

LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO

Secretaria General de Organismo Control

PROYECTO DE ACUERDO NO 695 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLÍAN Y FORTALECEN LOS INCENTIVOS PARA LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS DISTRITALES Y LOCALES DE JUVENTUD EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1. OBJETO**

La presente iniciativa busca ampliar y fortalecer los incentivos dirigidos a los Consejeros y Consejeras Locales de Juventud en Bogotá, con el fin de reconocer su labor de representación, promover su participación y contribuir al fortalecimiento de sus capacidades para el ejercicio efectivo de su rol en el Distrito Capital.

Se plantea que la Administración Distrital, diseñe y desarrolle una estrategia distrital integral de apoyo a los Consejos Locales de Juventud, que contemple entre otros: asesoría técnica y acompañamiento permanente a los Consejos de Juventud; diseño e implementación de incentivos para la educación, culturales y recreativos, generación de ingresos y emprendimiento, formativos, y para la movilidad; y formación continua en liderazgo, incidencia política, control social y formulación de agendas públicas.

Asimismo, se propone que el Día Distrital de los Consejeros y Consejeras de Juventud de Bogotá se celebre el último viernes del mes de agosto de cada año, en sesión plenaria especial del Concejo de Bogotá, como espacio institucional de reconocimiento, diálogo y rendición de cuentas. En el marco de dicha sesión, se citará a las entidades distritales competentes para rendir informe sobre las acciones, programas y estrategias implementadas en apoyo a los Consejos de Juventud, así como sobre el cumplimiento de los compromisos institucionales asumidos a partir de sus agendas y recomendaciones.

De igual manera, la iniciativa dispone que la Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con las entidades competentes, garantice la divulgación permanente, accesible y actualizada de la gestión de los Consejos Locales de Juventud.

2. ASPECTOS GENERALES

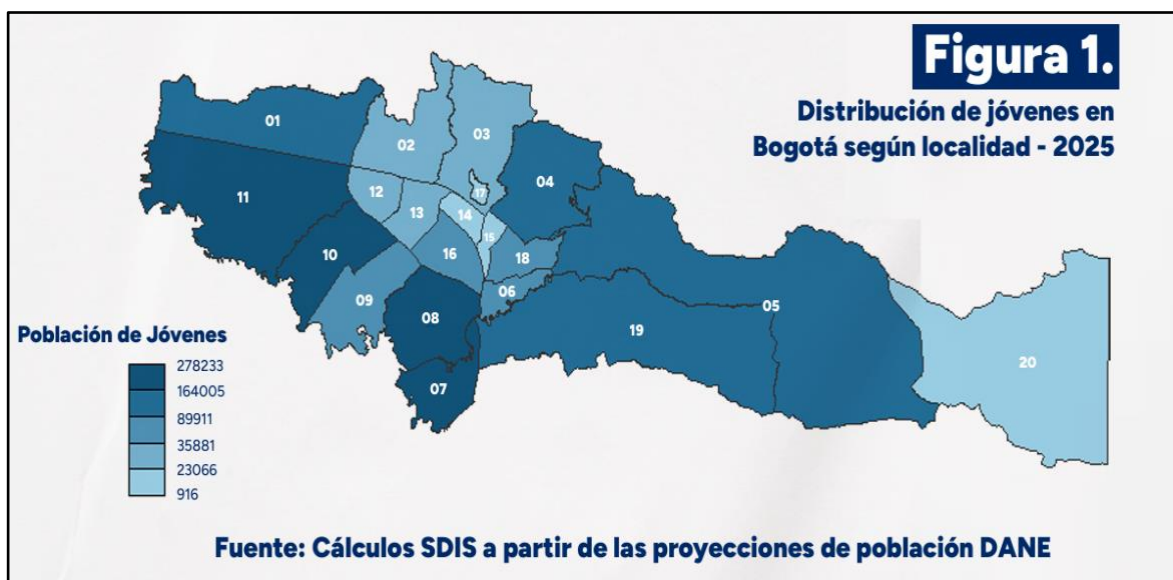
De acuerdo con el Censo de 2018, Colombia contaba con una población total de 48.258.494 personas, de las cuales el 26,1 % corresponde a jóvenes entre 14 y 28 años, lo que representa aproximadamente 12,7 millones de personas, distribuidas de manera casi equitativa entre hombres y mujeres.¹⁸

El documento "Panorama y apuestas por las juventudes en Bogotá 2025" de la Secretaría Distrital de Integración Social, contempla que *“Según las proyecciones poblacionales realizada por el DANE post-COVID (DANE, 2023b), Bogotá cuenta con 1.753.316 jóvenes en 2025, lo que representa el 22% del total de la población del Distrito Capital. La composición de jóvenes según sexo muestra que el 50,2% son hombres y 49,8% mujeres.”*¹⁹

En cuanto a la distribución geográfica, las localidades de Suba, Kennedy, Bosa y Engativá reúnen la mayor proporción de población joven, concentrando aproximadamente 880.000 jóvenes, lo que equivale a cerca del 50 % del total de juventudes en Bogotá. Según el informe, Suba ocupa el primer lugar con un 16,1 %, seguida por Kennedy (13,4 %), Bosa (10,1 %) y Engativá (9,9 %), como se puede observar a continuación:

¹⁸ [PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA DE LOS JÓVENES EN BOGOTÁ: UN ANÁLISIS DE LOS Consejos de juventud y LAS juntas administradoras locales](#)

¹⁹ [Documento de Política Pública de Juventud](#)



Fuente: Figura 1., tomada del documento "Panorama y apuestas por las juventudes en Bogotá 2025"

De acuerdo con las cifras antes citadas se puede evidenciar la relevancia de la juventud como grupo estratégico para el desarrollo de la ciudad.

Por su parte, el documento *¿Qué ha pasado con la participación ciudadana juvenil en Colombia? 2018–2022: Caleidoscopio de la participación ciudadana*, elaborado por el Foro Nacional por Colombia²⁰, ofrece un análisis detallado sobre las dinámicas, avances y desafíos de la participación juvenil en el país durante ese periodo.

Dicho informe contempla que entre 2020 y 2023, se destacó la participación activa de las juventudes en espacios como los Consejos Distritales de Juventud y el Consejo Distrital de Política Social, así: *“Entre 2020 y 2023, según el Informe de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social (2023), se destacó la participación activa de las juventudes en espacios como los Consejos Distritales de Juventud y el Consejo Distrital de Política Social, con la posesión de 372 consejeros locales. En cuanto a la implementación de la Política Pública de Juventud 2019–2030, se priorizaron siete objetivos estratégicos: identidad juvenil, educación, inclusión productiva, salud integral, cultura y deporte, paz y convivencia, y hábitat. La política contempla 36 resultados esperados y 103 productos, definidos con base en los problemas identificados por los jóvenes en la Agenda Pública. Como avances, hasta 2022 se vincularon 309 jóvenes a procesos educativos por ciclos, más de 10.800 participaron en jornadas de socialización de servicios, y cerca de 56.000 se registraron en la App Distrito Joven para acceder a oportunidades de empleo, educación y emprendimiento.”*²¹

De igual manera, en el documento *¿Qué ha pasado con la participación ciudadana juvenil en Colombia? 2018–2022: Caleidoscopio de la participación ciudadana*, se destaca que, en relación con la Administración Distrital, la Veeduría Distrital (2021) reportó que el 81 % de los jóvenes encuestados percibe una falta de apoyo institucional a la participación juvenil, mientras que sólo un 8,7 % considera que sí hay respaldo.

El informe destaca, que el Observatorio de la Participación Ciudadana (2021b) del IDPAC también se pronunció al respecto, señalando: *“entre 2017 y 2021, caracterizó a 3.972 organizaciones y proceso sociales, y arrojó como resultado, que las categorías con las que más se auto reconocen estas organizaciones son las de jóvenes con un 32.74%. Además, entre 2020 y*

²⁰ [Informe participación Juvenil V3.indd](#)

²¹ *ibid.*

2021, esta misma institución logró fortalecer 267 organizaciones y procesos sociales, en los cuales las y los jóvenes, fueron el grupo que más se sintió representado con el 41,57%.²²

Asimismo, contiene que los Consejos Municipales de Juventud enfrentan múltiples dificultades que limitan el ejercicio pleno de su labor. Entre ellas se destacan la falta de espacios adecuados para sesionar, demoras en los estímulos económicos, escaso reconocimiento institucional, baja preparación técnica, limitada autonomía financiera, entre otros²³, lo que evidencia una falta de garantías reales para la participación juvenil.

3. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

ARTÍCULO 40.

“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

- 1. Elegir y ser elegido.*
- 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.*
- 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.*
- 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.*
- 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.*
- 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.*
- 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.*

Numeral desarrollado por la Ley 43 de 1993.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.”

ARTÍCULO 45.

“El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.”

ARTÍCULO 103.

“Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.”

²² ibidem

²³ [Informe participación Juvenil_v3.indd](#)

LEYES

LEY ESTATUTARIA 1622 DE 2013 “Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones”

ARTÍCULO 5.

*“Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderá como:
(...)*

6. Espacios de participación de las juventudes. Son todas aquellas formas de concertación y acción colectiva que integran un número plural y diverso de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes en un territorio, y que desarrollan acciones temáticas de articulación y trabajo colectivo con otros actores, dichos espacios deberán ser procesos convocantes, amplios y diversos, y podrán incluir jóvenes no organizados de acuerdo con sus dinámicas propias.

*Se reconocerán como espacios de participación entre otros a las redes, mesas, asambleas, cabildos, consejos de juventud, consejos comunitarios afrocolombianos, y otros espacios que surjan de las dinámicas de las y los jóvenes.
...”*

ARTÍCULO 6.

“Derechos de los y las jóvenes. Los jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales aprobados por Colombia, y en las normas que los desarrollan o reglamentan. El presente Estatuto busca reafirmar la garantía en el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual como colectivo de la población joven, a través de medidas de promoción, protección, prevención y garantía por parte del Estado para esta población. El Estado dará especial atención a los y las jóvenes desde un enfoque diferencial según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, orientación e identidad sexual, diversidad étnica, cultural, de género y territorial.

El Estado generará gradual y progresivamente, los mecanismos para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente ley.”

ARTÍCULO 33.

“Consejos de Juventudes. Los Consejos de Juventudes son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes, ante institucionalidad pública de cada ente territorial al que pertenezcan, y desde las cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos y la visibilización de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional.”

ARTÍCULO 59.

“Apoyo a los Consejos de Juventud. El Gobierno Nacional, los Gobernadores y Alcaldes, organizarán y desarrollarán un programa especial de apoyo al Consejo Nacional de Juventud, los Consejos

Departamentales de Juventud y a los Consejos Distritales, Municipales y locales de Juventud, que contemplará entre otros aspectos, asesoría para su funcionamiento y consolidación como mecanismos de participación e interlocución del Sistema Nacional de las Juventudes y agentes dinamizadores de las Agendas Territoriales y Nacional de las Juventudes, así como estímulos de carácter educativo, cultural y recreativo, estableciendo en sus respectivos presupuestos los recursos suficientes para garantizar su funcionamiento permanente.

PARÁGRAFO. Las administraciones nacional, departamental, distrital, municipal y local, deberán proveer el espacio físico necesario, dotado de los elementos básicos que garanticen el funcionamiento de los consejos locales, distritales, municipales, departamentales y nacional de Juventud, de igual manera deberán apropiar los recursos presupuestales necesarios para que sus interlocuciones con las autoridades territoriales y nacional se cumplan a cabalidad según las disposiciones de la presente ley.”

LEY ESTATUTARIA 1885 de 2018 “por la cual se modifica la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones”

ARTÍCULO 3. El artículo 34 de la Ley 1622 de 2013, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 34. Funciones de los Consejos de Juventud. El Consejo Nacional de Juventud, los Consejos Departamentales de Juventud, y los Consejos Distritales, Municipales y Locales de Juventud, cumplirán, en su respectivo ámbito, las siguientes funciones:

- 1. Actuar como mecanismo válido de interlocución y concertación ante la administración y las entidades públicas del orden nacional y territorial y ante las organizaciones privadas, en los temas concernientes a juventud.*
- 2. Proponer a las respectivas autoridades territoriales, políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás normas relativas a juventud, así como concertar su inclusión en los planes de desarrollo, en concordancia con la agenda juvenil acordada al interior del subsistema de participación.*
- 3. Establecer estrategias y procedimientos para que los jóvenes participen en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo dirigidos a la juventud.*
- 4. Participar en el diseño y desarrollo de agendas municipales, distritales, departamentales y nacionales de juventud.*
- 5. Concertar la inclusión de las agendas territoriales y la nacional de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y administrativas, para que sean incluidas en los planes de desarrollo territorial y nacional así como en los programas y proyectos necesarios para el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás normas relativas a la juventud. La agenda juvenil que se presente ante la comisión de concertación y decisión, será el resultado del acuerdo entre las diferentes instancias del subsistema de participación*
- 6. Presentar informes semestrales de su gestión, trabajo y avances en audiencia pública, convocada ampliamente y con la participación de los diversos sectores institucionales y de las juventudes.*

7. Ejercer veeduría y control social a los planes de desarrollo, políticas públicas de juventud, y a la ejecución de las agendas territoriales de las juventudes, así como a los programas y proyectos desarrollados para los jóvenes por parte de las entidades públicas del orden territorial y nacional.

8. Interactuar con las instancias o entidades públicas que desarrollen procesos con el sector, y coordinar con ellas la realización de acciones conjuntas.

9. Fomentar la creación de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes y movimientos juveniles, en la respectiva jurisdicción.

10. Dinamizar la promoción, formación integral y la participación de la juventud, de acuerdo con las finalidades de la presente ley y demás normas que la modifiquen o complementen.

11. Promover la difusión, respeto y ejercicio de los Derechos Humanos, civiles, sociales y políticos de la juventud, así como sus deberes.

12. Elegir representantes ante las instancias en las que se traten los asuntos de juventud y cuyas regulaciones o estatutos así lo dispongan.

13. Participar en el diseño e implementación de las políticas, programas y proyectos dirigidos a la población joven en las respectivas entidades territoriales.

14. Interactuar con las instancias o entidades que desarrollen el tema de juventud y coordinar la realización de acciones conjuntas.

15. Participar en la difusión y conocimiento de la presente ley.

16. Es compromiso de los Consejos de Juventud luego de constituidos, presentar un plan unificado de trabajo que oriente su gestión durante el periodo para el que fueron elegidos.

17. Elegir delegados ante otras instancias y espacios de participación.

18. Adoptar su propio reglamento interno de organización y funcionamiento.”

DECRETO 1421 DE 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”

ARTÍCULO 6.

“Participación comunitaria y veeduría ciudadana. Las autoridades distritales promoverán la organización de los habitantes y comunidades del Distrito y estimularán la creación de las asociaciones profesionales, culturales, cívicas, populares, comunitarias y juveniles que sirvan de mecanismo de representación en las distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital y local.

De conformidad con lo que disponga la ley, el Concejo dictará las normas necesarias para asegurar la vigencia de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y comunitaria y estimular y fortalecer los procedimientos que garanticen la veeduría ciudadana frente a la gestión y la contratación administrativas.”

ARTÍCULO 12.

“Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

*1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
...*

DISPOSICIONES DISTRITALES

ACUERDO 927 DE 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

ARTÍCULO 16.

“Programas del Objetivo Estratégico “Bogotá Confía en su Gobierno”. Adóptense los siguientes programas del objetivo “Bogotá confía en su Gobierno”:

(...)

16.8. Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana.

(...)

Así mismo, se desarrollarán procesos de formación ciudadana que garanticen una democracia deliberativa e innovación que mejoren el diálogo, y considerando, para ello, la promoción de la lectura, el uso de las redes sociales y canales digitales para la gestión del conocimiento y una participación más incidente. La Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Integración Social y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), propenderán por el cumplimiento del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en la ciudad de Bogotá, en favor de los Consejos y Plataformas de Juventud establecidos en la Ley, con miras a promover nuevas ciudadanías y liderazgos activos y espacios de participación realmente incidentes. Todo lo anterior mediante el fortalecimiento de capacidades y saberes para las instancias de participación del Subsistema de participación de Juventud con enfoque diferencial, de género y derechos humanos; la construcción de una ruta de acompañamiento y asesoramiento a funcionarios de la Alcaldía Mayor y las Alcaldías locales que tengan a su cargo programas y proyectos de Juventud; la construcción de una estrategia electoral para las próximas elecciones de Consejos de Juventud; la actualización del Sistema Distrital de Juventud y la puesta en marcha del Comité Operativo Distrital de Juventud.”

DECRETO 058 DE 2022 “Por medio del cual se organizan y desarrollan los estímulos, incentivos y apoyos para consejeros y consejeras locales de juventud en los términos de las Leyes Estatutarias 1622 de 2013 y 1885 de 2018”

ARTÍCULO 1.-

“Adopción. Adóptense estímulos e incentivos para los(as) Consejeros(as) Locales de Juventud, con el objetivo de promover y motivar la participación política de los y las jóvenes en Bogotá. D.C., y la permanencia en el ejercicio de su cargo.”

ARTÍCULO 2.-

“Beneficiarios. Serán beneficiarios de los presentes estímulos e incentivos los Consejeros y Consejeras Locales de Juventud en la ciudad de Bogotá D.C. elegidos en el respectivo periodo.

Parágrafo. - Serán beneficiarios de los presentes estímulos, quienes suplan las vacancias absolutas de los(as) Consejeros (as) Locales de Juventud, en los términos de las Leyes Estatutarias [1622](#) de 2013 y [1885](#)

de 2018, exceptuando lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 6 del presente decreto para vacancias temporales.”

OTRAS DISPOSICIONES

CONPES D.C. 08 “POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE JUVENTUD, 2019–2030”

“Espacios de Participación de las Juventudes: Son todas aquellas formas de concertación y acción colectiva que integran un número plural y diverso de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes en un territorio, y que desarrollan acciones temáticas de articulación y trabajo colectivo con otros actores, dichos espacios deberán ser procesos convocantes, amplios y diversos, y podrán incluir jóvenes no organizados de acuerdo con sus dinámicas propias. Se reconocerán como espacios de participación entre otros a las redes, mesas, asambleas, cabildos, consejos de juventud, consejos comunitarios afrocolombianos, y otros espacios que surjan de las dinámicas de las y los jóvenes (Ley 1622, 2013)”

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024–2027²⁴

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra plenamente articulado con el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 “Bogotá Camina Segura”, particularmente con el Eje 4 – Democracia y Gobierno Abierto, que promueve una ciudadanía activa, deliberativa y con incidencia en lo público.

En especial, se vincula con el:

- **Programa 39:** Camino hacia una democracia deliberativa, incidente y transparente, que establece como línea de acción el fortalecimiento de la participación ciudadana, con énfasis en juventudes, organizaciones sociales y mecanismos de decisión colectiva.

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS²⁵

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra alineado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y contribuye directamente al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- **ODS 4 – Educación de calidad:** mediante el fortalecimiento de los procesos formativos dirigidos a los consejeros y consejeras de juventud.
- **ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico:** al incentivar el liderazgo, el emprendimiento y la participación activa de las juventudes en escenarios institucionales.
- **ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas:** al consolidar la participación democrática juvenil, el fortalecimiento de los mecanismos de representación, y la transparencia en la gestión pública.]

4. IMPACTO FISCAL

²⁴ **Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación.** (2024). *Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 “Bogotá Camina Segura”* (Acuerdo 927 de 2024). Bogotá, D.C.

²⁵ **Naciones Unidas.** (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (Resolución A/RES/70/1). Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Teniendo en cuenta que el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, establece lo siguiente:

“Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.”

Es importante señalar que la presente iniciativa no genera impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación.

Atentamente,

BANCADA PARTIDO POLÍTICO MIRA

FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA

Concejal de Bogotá
Partido Político MIRA

SAMIR BEDOYA PIRAQUIVE

Concejal de Bogotá
Partido Político MIRA

PROYECTO DE ACUERDO NO 695 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLÍAN Y FORTALECEN LOS INCENTIVOS PARA LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS DISTRITALES Y LOCALES DE JUVENTUD EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 6 y numeral 1° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y la Ley 1885 de 2018.

Artículo 1o. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto ampliar y fortalecer los incentivos dirigidos a los Consejeros y Consejeras Locales de Juventud en Bogotá, con el fin de reconocer su labor de representación, promover su participación y contribuir al fortalecimiento de sus capacidades para el ejercicio efectivo de su rol en el Distrito Capital.

Artículo 2o. Estrategia distrital integral de apoyo a los Consejos de Juventud. La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno y en coordinación con la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Educación del Distrito, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Secretaría Distrital de Planeación, diseñará y desarrollará una estrategia distrital integral de apoyo a los Consejos Locales de Juventud.

La Estrategia distrital integral de apoyo a los Consejos de Juventud, deberá contemplar entre otras acciones, las siguientes:

- a. Asesoría técnica y acompañamiento permanente a los Consejos de Juventud.
- b. Diseño e implementación de incentivos para la educación, culturales y recreativos, generación de ingresos y emprendimiento, formativos, y para la movilidad.
- c. Formación continua en liderazgo, incidencia política, control social y formulación de agendas públicas.

Parágrafo: La Administración Distrital establecerá los criterios de priorización para el apoyo a los consejeros de juventud, con el fin de garantizar una asignación equitativa, transparente y eficiente de los incentivos.

Artículo 3o. Día Distrital de los Consejeros y Consejeras de Juventud de Bogotá. Establézcase la celebración del Día Distrital de los Consejeros y Consejeras de Juventud de Bogotá, el último viernes del mes de agosto en conmemoración del ejercicio democrático juvenil y como un espacio institucional de reconocimiento, diálogo y rendición de cuentas, que se realizará en sesión plenaria especial del Concejo de Bogotá.

Parágrafo Primero. Para la sesión plenaria que tendrá lugar el último viernes del mes de agosto, se citará a las entidades distritales competentes, con el fin de rendir informe sobre las acciones, programas y estrategias implementadas en apoyo a los Consejos de Juventud, así como sobre el cumplimiento de los compromisos institucionales asumidos en el marco de sus agendas y recomendaciones.

Parágrafo Segundo. La Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con las entidades competentes, deberá garantizar la divulgación permanente, accesible y actualizada de la gestión de los Consejos Locales de Juventud.

Artículo 4o. Implementación. La Administración Distrital, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acuerdo, diseñará un plan de implementación progresiva de la estrategia integral de apoyo, con cronograma, responsables y metas anuales, entre otros.

Artículo 5o. Seguimiento y evaluación de los incentivos. La Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con las entidades responsables de la estrategia integral de apoyo a los Consejos de Juventud, deberán publicar en la página Web de cada entidad un informe semestral sobre la ejecución, cobertura, cumplimiento y evaluación de los incentivos establecidos en el presente Acuerdo.

El informe deberá contener, al menos:

- a) Número de consejeros y consejeras beneficiarios por localidad y tipo de estímulo.
- b) Presupuesto ejecutado por cada entidad responsable.
- c) Avances, retos y recomendaciones para la mejora de la política de incentivos.
- d) Información desagregada por género, localidad, pertenencia étnica y ciclo vital juvenil.

Artículo 6o. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Atentamente,

BANCADA PARTIDO POLÍTICO MIRA

FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA

Concejal de Bogotá
Partido Político MIRA

SAMIR BEDOYA PIRAQUIVE

Concejal de Bogotá
Partido Político MIRA

PROYECTO DE ACUERDO NO 696 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES CONJUNTAS CON EL COMERCIO LOCAL BARRIAL O PEQUEÑO COMERCIO COMO MEDIDA PARA PREVENIR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO EN BOGOTÁ”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. Justificación y análisis de conveniencia de la iniciativa*****Del impacto social***

Las tiendas de barrio, son pequeños establecimientos comerciales que no hacen parte de cadenas o franquicias, y se reconocen como elementos culturales y económicos centrales de los barrios tradicionales en la ciudad. Las tiendas de barrio juegan un papel vital en las dinámicas locales de la ciudad, son puntos de cuento y base del sustento de muchos hogares, principalmente los de clase popular ya que facilitan el acceso a productos de consumo básico para las comunidades. Si bien, en la actualidad sufren una desaceleración del consumo, en gran medida por la competencia de otros modelos comerciales insertados en los barrios, las tiendas, siguen siendo un punto de encuentro, principalmente de las mujeres, que se encargan del cuidado y la jefatura de hogar, muchas de ellas, sufren de violencias basadas en género, o se encuentran en riesgo de feminicidio, sin tener acceso a la información relacionada con medidas de protección, o a dónde acudir para denunciar situaciones de riesgo e incluso para conocer la oferta institucional.

De acuerdo con el Observatorio de violencias de género, el alto índice de feminicidios en la ciudad de Bogotá y las tendencias en aumento, así como las profundas consecuencias de carácter económico, psicológico y social, que éste fenómeno acarrea para las mujeres sobrevivientes y para sus familiares obliga a que el Distrito adopte *medidas o acciones afirmativas* con el propósito de superarlas, reducirlas y eliminarlas, las cuales en gran medida se componen de condiciones de desigualdad y marginalidad que enfrentan las víctimas y sobrevivientes, es importante en este sentido involucrar todos los

Cifras de Las VBG en Bogotá

Según cifras del Observatorio de Feminicidios, entre 2017 y 2019 se registraron 87 feminicidios y 2 transfeminicidios²⁶. Sin embargo, esta escaló dramáticamente entre 2020 y 2023, con 229 feminicidios y 7 transfeminicidios²⁷. Tan solo entre 2024 y lo que va de 2025, ya se han reportado 109 feminicidios y 2

²⁶ Feminicidios Colombia. <https://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/reportes>

²⁷ Ibid.

transfeminicidios²⁸. En total, desde 2017 hasta la actualidad, suman al menos 425 feminicidios y 11 transfeminicidios, lo que refleja un aumento alarmante y sostenido de la violencia de género en la ciudad.

Sumando a lo anterior, desde 2022 hasta la fecha, el Sistema Violeta, herramienta de la Secretaría Distrital de la Mujer, ha documentado 123.714²⁹ delitos contra mujeres, una cifra que abarca desde la violencia más extrema hasta agresiones normalizadas. Entre ellos destacan 334 asesinatos, 13.246 delitos sexuales, 26.746 lesiones personales y 83.388 casos de violencia intrafamiliar³⁰.

El impacto de la violencia presenta una distribución heterogénea en la ciudad, concentrándose predominantemente en zonas con mayores problemáticas socioeconómicas, como lo demuestran los registros por localidad. Ciudad Bolívar emerge como el territorio más afectado, con 61 feminicidios, 1.529 delitos sexuales, 2,9 millones de lesiones personales y 10,5 millones de casos de violencia intrafamiliar desde 2022³¹. Le sigue Kennedy, con 48 feminicidios, 1.218 delitos sexuales, 3,3 millones de lesiones personales y 9,4 millones de casos de violencia intrafamiliar en el mismo periodo. Suba completa este patrón con 31 feminicidios, 1.254 delitos sexuales, 2,6 millones de lesiones personales y 9,5 millones de casos de violencia intrafamiliar³², corroborando la correlación entre vulnerabilidad socioestatal y prevalencia de violencias de género e intrafamiliares.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que las mujeres en Bogotá representan el 53% de la población de la ciudad, y que en muchos casos, las tiendas son un punto de confianza y de cercanía, es de resaltar el alto impacto que se lograría con la implementación de esta propuesta en la ciudad y al tiempo en el país, ya que estas medidas se suman a las nunca suficiente estrategias que contribuyan a una vida libre de violencias para las mujeres, acercando las herramientas a los hogares o puntos en donde confluyen las principales posibles víctimas.

II. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

2.1 Instrumentos Internacionales

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*, reconoció que *la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre*⁸.

El artículo 1 de la Declaración considera que la violencia contra las mujeres es (...) *todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación*

²⁸ Ibid.

²⁹ Sistema Violeta. <https://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/indicadores/violeta.html>

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

*arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada*⁹. (Subrayas fuera del texto).

La *Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer - Convención de Belem do Pará (CBDP)*, incorporada a la legislación colombiana mediante la Ley 248 de 1995 señala que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

La CBDP define la violencia contra las mujeres como (...) *cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado*¹⁰.

Por su parte la Organización de la Naciones Unidas en la *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW*, incorporada al ordenamiento colombiano mediante la Ley 051 de 1981, define discriminación contra la mujer como “(...) *toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera*”¹¹.

De acuerdo con la Recomendación General No. 19 del Comité de la CEDAW la definición de la discriminación incluye la violencia basada en el sexo, que el mismo Comité puntualiza como:

(...) *la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad*¹². (Subrayas fuera del texto).

El Comité de la CEDAW igualmente señala que *La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de convenios específicos de derechos humanos, constituye discriminación, tal como se entiende en el artículo 1 de la Convención*.

2.2. Normativa Nacional y/o régimen legal

La Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, indicó que dentro de los derechos de las víctimas está el de “c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes;”

Medidas de sensibilización y prevención

Artículo 9°. (...) Departamentos y Municipios

1. El tema de violencia contra las mujeres será incluido en la agenda de los Consejos para la Política Social.

2. Los planes de desarrollo municipal y departamental incluirán un capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas de la violencia.

y en su Artículo 15. **Obligaciones de la Sociedad.**

En cumplimiento del principio de corresponsabilidad las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas y naturales, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Para estos efectos deberán:

1. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres reconocidos señalados en esta ley.
2. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial contra las mujeres.
3. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las mujeres.
4. Denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y discriminación en su contra.
5. Participar activamente en la formulación, gestión, cumplimiento, evaluación y control de las políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia y la discriminación en su contra.

6. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley y en la ejecución de las políticas que promuevan los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia y la discriminación en su contra.

7. Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y eliminar la violencia y discriminación en su contra.

Artículo 20.

Información. Los municipios y distritos suministrarán información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia adecuada a su situación personal, sobre los servicios disponibles, las entidades encargadas de la prestación de dichos servicios, los procedimientos legales pertinentes y las medidas de reparación existentes.

Las líneas de atención existentes en los municipios y los distritos informarán de manera inmediata, precisa y completa a la comunidad y a la víctima de alguna de las formas de violencia, los mecanismos de protección y atención a la misma.

Se garantizará a través de los medios necesarios que las mujeres víctimas de violencia con discapacidad, que no sepan leer o escribir, o aquellas que hablen una lengua distinta al español, tengan acceso integral y adecuado a la información sobre los derechos y recursos existentes.

Los avances en la agenda legislativa nacional que en desarrollo de los mandatos constitucionales ha expedido diferentes leyes que reconocen los derechos de las mujeres en las últimas décadas. Entre las principales leyes a favor de derechos de las mujeres se pueden mencionar:

- Ley 51 de 1981: ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–.
- Ley 82 de 1993: expide normas destinadas a ofrecer apoyo estatal a la Mujer Cabeza de Familia.
- Ley 248 de 1995: ratifica la Convención Interamericana de Belém do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
- Ley 294 de 1996: por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
- Ley 800 de 2003: por la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.
- Ley 823 de 2003: por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres.
- Ley 1009 de 2006: por la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de asuntos de género.
- Ley 1413 de 2010: por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas
- Ley 1448 de 2011: por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Establece normas específicas para las mujeres en los artículos 114 al 118. En esta Ley se establece el Decreto 4635 de 2011 sobre comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, el Decreto 4634 de 2011 sobre el pueblo gitano (Rrom) y el Decreto 4633 de 2011 sobre pueblos y comunidades indígenas.
- La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el carácter obligatorio de las recomendaciones emanadas por los comités de los tratados internacionales suscritos por Colombia. Particularmente, en esta política, se toman en cuenta las que hacen referencia a asuntos relacionados con los derechos de las mujeres y, en especial, las dadas por el Comité de la CEDAW.
- Las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de Mujeres, Paz y Seguridad, como las Resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889.
- El Estado Colombiano ha incorporado en la gestión pública sus propuestas; de especial relevancia en estos últimos años son las Metas del Milenio del 2000 y el Consenso de Brasilia de 2010.
- El Sistema Universal de Derechos Humanos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de los cuales es miembro el Estado Colombiano, se han ocupado desde sus inicios de la igualdad entre los géneros y de los derechos de la mujer. En la actualidad, existen importantes desarrollos en materia del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, que se hacen tangibles en una serie de tratados,

convenciones, recomendaciones, resoluciones y conferencias, entre otros, que reconocen la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres

- los principales órganos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social, también se han ocupado del tema y han adoptado resoluciones sobre el particular.

- El Sistema Interamericano, la Asamblea General de la OEA adoptó en junio de 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, único instrumento legal dedicado exclusivamente a la problemática de la violencia contra las mujeres, el cual es incorporado por el Estado Colombiano a partir del 15 de noviembre de 1996

- Mediante la Resolución AG/RES. 1732 del 2000, la Asamblea General aprobó el “Programa interamericano sobre la promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género (PIA)”, que representó el logro de un consenso político por parte de los Estados miembros de la OEA en torno al tema de la discriminación de las mujeres. Su aceptación implicó el reconocimiento de las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia a las que se encontraron sometidas las mujeres, así como el reconocimiento de la necesidad de realizar acciones para el avance de sus derechos, de combatir todas las formas de discriminación y de promover la equidad entre mujeres y hombres desde una perspectiva de género.

2.3. Acuerdos Locales

Acuerdo 676 de 2017 del Concejo de Bogotá, D.C., *Por el cual se establecen lineamientos para prevenir la violencia basada en género y el feminicidio en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones*

Artículo 2. LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. Las entidades del Distrito que, en el marco de sus funciones asesoren, atiendan, orienten, representen a mujeres víctimas de violencia basada en género adoptarán y aplicarán protocolos para la detección del riesgo feminicida y establecerán medidas específicas en prevención, con la asistencia técnica de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Así mismo las entidades distritales desarrollarán, entre otras, las siguientes medidas de prevención:

1. Adopción de medidas para la visibilización de la problemática y la identificación de los escenarios de riesgo.

2. Adoptar acciones para la transformación de concepciones e imaginarios sociales y de estereotipos de género y desnaturalización de la violencia basada en género.

3. Adelantar acciones para la divulgación de la oferta distrital que involucre la atención a los intervinientes en la violencia basada en género.

4. Materializar las acciones de transversalización del enfoque de género en todas las instituciones del Distrito bajo los lineamientos y coordinación de la Secretaría Distrital de la Mujer.

5. Implementar los lineamientos de comunicación no sexista en las estrategias y **piezas comunicativas producidas por la Administración Distrital**

6. **Velar porque las estrategias de prevención y de denuncia tengan un enfoque que reconozca las necesidades de las mujeres en el ámbito rural y urbano.**

7. Las demás que se consideren pertinentes.

Artículo 4. MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE TENTATIVA DE FEMINICIDIO Y VÍCTIMAS INDIRECTAS DEL DELITO DE FEMINICIDIO. La Secretaría Distrital de la Mujer coordinará con los sectores de la Administración Distrital, un plan anual de **medidas de acción afirmativa**, con el objeto de enfrentar las condiciones de desigualdad que afrontan las mujeres víctimas de tentativa de feminicidio, así como las víctimas indirectas de este delito, y presentará al Concejo de Bogotá un informe semestral con los resultados obtenidos.

De acuerdo a lo anterior, **serán sujetos de las medidas de acción afirmativa:**

- a) Las mujeres víctimas de tentativa de feminicidio que se encuentren inmersas en un proceso judicial.
- b) Las mujeres víctimas cuyo caso haya obtenido sentencia condenatoria por tentativa de Feminicidio.
- c) Las víctimas indirectas del delito de Feminicidio o tentativa de Feminicidio.

2.4 Plan Distrital de Desarrollo

En relación con las Violencias Basadas en Género, el Plan de Distrital de Desarrollo aborda, principalmente, esta problemática en su primer capítulo, *"Bogotá Avanza en Seguridad"*, específicamente en el artículo 8, numeral 8.2, a través del programa *"Cero Tolerancia a las Violencias contra las Mujeres y Basadas en Género"*. Este programa refleja el compromiso de la ciudad con la protección integral de los derechos de las mujeres, garantizando su derecho a una vida libre de violencias mediante estrategias de prevención, atención especializada, acceso a la justicia y articulación entre entidades distritales y nacionales.

Este artículo plantea la necesidad de impulsar estrategias integrales que combinen la transformación cultural con una atención oportuna y especializada a las víctimas, asegurando que los servicios sean gratuitos, de calidad y adaptados a las diversidades de las mujeres. Para ello, se propone fortalecer los esquemas de atención en los territorios, bajo los enfoques de género, derechos humanos y diferencial, con el fin de que las mujeres puedan acceder a justicia y apoyo sin barreras. Además, como parte de este compromiso, el plan busca reducir la percepción de inseguridad y promover entornos protectores, especialmente en el espacio público y el transporte, mediante un modelo de prevención y atención efectiva frente a las violencias de género.

Ahora bien, en el segundo capítulo, *"Bogotá confía en su bien-estar"*, plantea en su artículo 10, numeral 10.2, programa 12, *"Bogotá cuida a su gente"* plantea fortalecer las rutas para la prevención de vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres mediante la consolidación de una estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado la prevención

de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios que limitan el ejercicio de sus derechos.

2.5 Políticas Públicas

Bogotá adoptó la Política Pública de Mujer y Equidad de Género 2020-2030 (PPMYEG), cuyo objetivo es *"reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres, en su diferencia y diversidad, que habitan el Distrito Capital, de manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible las condiciones injustas y evitables de discriminación, desigualdad y subordinación de género en los ámbitos público y privado."*³³

*En este marco, la PPMYEG reconoce ocho derechos fundamentales que deben ser garantizados a todas las mujeres que habitan en la ciudad. Entre ellos, en segundo lugar, se destaca el **derecho a una vida libre de violencias**. Este derecho se concreta en el objetivo específico número 3 de la Política Pública, el cual establece la necesidad de: "contribuir a la garantía del derecho de las mujeres, en sus diferentes ciclos de vida, a una vida libre de violencias en los ámbitos político, comunitario e institucional, familiar y de pareja, así como en el espacio público y privado."*

Para el cumplimiento de este objetivo se plantean tres resultados:

- Fortalecimiento de capacidades en los sectores público, privado y en la ciudadanía para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres, mediante procesos de formación, sensibilización y el desarrollo de proyectos pedagógicos orientados a comprender y desnaturalizar dichas violencias.
- Mejoramiento de la respuesta institucional en materia de prevención, protección, atención, información y sanción frente a las violencias contra las mujeres, a través de la implementación y seguimiento de instrumentos clave como el *Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público del Distrito Capital*, el *Documento técnico de criterios orientadores para la valoración del riesgo de feminicidio en el Distrito Capital* y el *Sistema articulado de alertas*.
- Fomento de la apropiación social de los instrumentos de movilización y exigibilidad del derecho a una vida libre de violencias, en el marco del Sistema SOFIA, mediante talleres de prevención, acciones de movilización, campañas de sensibilización, y la divulgación y diseño de rutas de atención en casos de violencia contra las mujeres.

El Concejo de Bogotá adoptó el Acuerdo 584 de 2015 por el cual se adoptan los lineamientos de *Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito* con la cual se busca contribuir a la eliminación de las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que generan discriminación, desigualdad y subordinación en las mujeres que habitan el territorio rural y urbano de Bogotá para el ejercicio pleno de sus derechos (Artículo 1).

³³ Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030

Dicha política Pública se sustenta sobre tres enfoques a saber (Art. 2):

Enfoque de Derechos de las Mujeres entendido como el reconocimiento de la igualdad real y efectiva de los derechos de las mujeres; el Distrito los garantiza y restablece en los casos de vulneración.

Enfoque Diferencial que alude al reconocimiento y transformación de las desigualdades que impidan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres por razones de raza, etnia, ruralidad, cultura, situación socioeconómica, identidad de género y orientación sexual, ubicación geográfica, discapacidad, religión, ideología y edad. Se concreta en la incorporación de acciones afirmativas para transformar las condiciones de discriminación, desigualdad y subordinación.

Enfoque de Género relacionado con el reconocimiento y transformación de las relaciones de poder jerarquizadas que subordinan a las mujeres, producen discriminación y desigualdad de género, lo cual debe eliminarse.

De acuerdo con el *principio de igualdad real y efectiva* de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género el Distrito debe orientar acciones tendientes a “garantizar la dignidad humana de las mujeres y su condición de ciudadanas sujetas de derechos en igualdad, para eliminar la discriminación, desigualdad y subordinación” (Art. 3, Literal b).

Según el principio de *igualdad de oportunidades*, las autoridades distritales deben “garantizar las condiciones para el igual acceso (...) sobre los bienes, servicios y recursos del Distrito Capital, teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a intereses, necesidades y demandas” (Ar. 3, Literal c).

En el mismo orden de ideas y en atención al principio de *equidad de género*, las acciones de las autoridades en el marco de la mencionada Política Pública pretenden “corregir las situaciones injustas y evitables que generan discriminación, desigualdad y subordinación entre mujeres y hombres (Art. 3 literal e) así como “generar condiciones para el reconocimiento y la redistribución social, económica y política, que contribuyan a la transformación de las relaciones de poder y jerarquías” (*Principio Justicia de Género*, Art. 3 literal f).

Uno de los objetivos de la *Política Pública de Mujer y Equidad de Género* es la eliminación de todas las formas de violencias contra las mujeres en todas sus modalidades, física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, cultural, simbólica y política, tanto en el espacio público como el privado, para el ejercicio de sus derechos (Artículo 5 del Acuerdo 584 de 2015 , Lit. a) así como la transformación de las condiciones sociales y económicas injustas que producen discriminación, desigualdad y subordinación en las mujeres, con el fin de avanzar en la eliminación de la pobreza y de la pobreza extrema y de las barreras que enfrentan para el ejercicio de sus derechos.

Según lo dispuesto en el párrafo del artículo 10 del Acuerdo 584 de 2015 “*los sectores de la Administración Distrital, sectores Central, Descentralizado y Localidades, serán responsables de la implementación de los lineamientos de la Política Pública de mujeres y Equidad de Género (...)*”.

En diversos instrumentos internacionales los Estados reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos; por lo tanto el empoderamiento de las mujeres sobrevivientes de feminicidio y de las que asumen el cuidado de las personas que tenían a cargo, a través de acciones afirmativas que les

permitan acceder a ofertas laborales, vivienda, subsidios, etc., se constituye en un mecanismo para la materialización de los mandatos de la CBDP.

Efectivamente, de acuerdo con el Artículo 7 de CBDP cual los Estados están en la obligación de:

- “Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (Literal b).
- “Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces” (Literal g).
- “Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados (Literal h).
- “Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social” (literal i).

III. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C

En atención a lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, especialmente en los artículos 8, 12, y 13 el Concejo de Bogotá es Competente para tramitar este Proyecto de Acuerdo ya que los contenidos del mismo no versan sobre los aspectos enunciados en los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 14, 16, 17, y 21, del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 la presentación de esta iniciativa no se encuentra restringida al Ejecutivo.

En conclusión, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que: El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito

IV. IMPACTO FISCAL

De acuerdo con la Ley 819 de 1993 en su artículo 7, “Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo”.

El presente proyecto de acuerdo no presenta un impacto fiscal, por tanto, ponemos a consideración del Honorable Concejo de Bogotá D.C., la presente iniciativa.

De esta manera, pongo a consideración y estudio de los Honorables Concejales el presente Proyecto de Acuerdo.

Atentamente,

HEIDY LORENA SANCHEZ BARRETO

Concejala de Bogotá

Unión Patriótica

PROYECTO DE ACUERDO NO 696 DE 2025**PRIMER DEBATE****II. TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO****“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES CONJUNTAS CON EL COMERCIO LOCAL BARRIAL O PEQUEÑO COMERCIO COMO MEDIDA PARA PREVENIR LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO EN BOGOTÁ”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las otorgadas por los numerales 1, 10 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto dictar lineamientos para el desarrollo de acciones conjuntas con el comercio local barrial y como medida para prevenir y erradicar las violencias basadas en género en Bogotá, en atención a los art. 15 y 20 de Ley 1257 de 2008.

Artículo 2. Lineamientos: La administración distrital, a través de la secretaria de gobierno, de seguridad convivencia y justicia, y en acompañamiento de la secretaría de la mujer, desarrollarán una estrategia con el comercio local barrial en Bogotá, específicamente sus tiendas, droguerías y misceláneas, para acercar y facilitar el acceso de la información a las mujeres en las localidades sobre violencias basadas en género, herramientas de ayuda y medidas de prevención.

Artículo 3. Acciones: Esta estrategia se compondrá de por lo menos, las siguientes medidas:

- Campañas de visibilización: Disposición de afiches y cartillas en estos puntos comerciales, con información relacionada a VBG y ruta única de atención.
- Cooperación con asociaciones y cooperativas que agrupen pequeños comercios locales y FENALTIENDAS para agendar espacios de sensibilización, difusión y formación en VBG a las y los pequeños comerciantes de barrio.
- Identificar a las tiendas de barrio como puntos amigables para las mujeres y diversidades, y referentes de apoyo para VBG en las localidades.

- Identificar puntos comerciales disponibles en cada localidad en donde se puedan implementar estas medidas, esto, en cooperación con cámara de comercio de Bogotá.

Artículo 4. Seguimiento y Evaluación. La Secretaría Distrital de la mujer y de seguridad, convivencia y justicia presentarán informes semestrales al Concejo de Bogotá sobre la implementación de este Acuerdo,

Artículo 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PROYECTO DE ACUERDO NO 697 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, CULTURA Y SABERES INDÍGENAS EN EL CURRÍCULO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ”.

1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El proyecto de acuerdo busca, como propósito central, la incorporación de contenidos relacionados con la historia, cultura y saberes indígenas en el currículo de los colegios distritales de Bogotá. Esta iniciativa responde a la necesidad de reconocer y promover la diversidad cultural en un contexto urbano como Bogotá, que históricamente ha sido un espacio de confluencia y encuentro de diversas comunidades indígenas provenientes de diferentes regiones del país. Este proyecto pretende no solo preservar su legado cultural, sino también educar a la población estudiantil sobre la importancia de los pueblos indígenas en la construcción de nuestra identidad nacional.

La inclusión de estos contenidos no solo se fundamenta en un compromiso ético y social, sino también en un marco jurídico robusto. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 7, establece el deber del Estado de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Adicionalmente, el artículo 70 estipula que la cultura en sus diversas manifestaciones es base de la nacionalidad y deberá ser protegida por el Estado. De igual manera, instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT exigen a los Estados miembros implementar medidas para garantizar la salvaguardia de las culturas indígenas. Este proyecto de acuerdo, por tanto, busca dar cumplimiento a estos mandatos legales, promoviendo un enfoque intercultural en la educación que permita fortalecer el tejido social y disminuir prejuicios o actos discriminatorios hacia estas comunidades.

La implementación de este proyecto requiere la articulación efectiva entre la Secretaría de Educación y los líderes indígenas reconocidos por sus respectivos cabildos. Este enfoque participativo garantiza que los contenidos educativos sean culturalmente pertinentes y respetuosos de los saberes tradicionales. Además, se busca desarrollar materiales pedagógicos innovadores y formar a los docentes para que puedan transmitir estos conocimientos de manera adecuada. Según estudios realizados por el Ministerio de Educación, la inclusión de temáticas relacionadas con la diversidad cultural en el aula fomenta el respeto por los derechos humanos, mejora la cohesión social y fortalece la convivencia escolar, resultados que redundan en un impacto positivo para el desarrollo humano de la ciudad.

En un plano técnico y financiero, este proyecto también representa una inversión en capital social, promoviendo la equidad y la inclusión. La adopción de un enfoque intercultural en los colegios distritales tiene el potencial de reducir brechas sociales y educativas al visibilizar la riqueza cultural de las comunidades indígenas. El impacto positivo de este tipo de iniciativas ha sido evidenciado en otras ciudades latinoamericanas, como Quito y La Paz, donde programas similares han promovido la valoración del patrimonio indígena, aumentando los índices de pertenencia e identidad cultural entre los estudiantes. Así, este proyecto no solo responde a una deuda histórica con los pueblos indígenas, sino que también contribuye a construir una Bogotá más inclusiva, equitativa y consciente de su diversidad cultural.

Componentes clave del proyecto de acuerdo

1. **Inclusión de contenidos curriculares:** El proyecto debe garantizar que la historia, cultura y saberes indígenas sean incorporados como ejes temáticos obligatorios en el currículo de los colegios distritales, con un enfoque que promueva el respeto y la valoración de la diversidad cultural.

2. **Participación activa de líderes indígenas:** Establecer mecanismos de consulta y participación para que los cabildos indígenas contribuyan en el diseño y evaluación de los contenidos, garantizando que reflejen fielmente su cosmovisión y valores.
3. **Capacitación docente:** Implementar programas de formación para educadores en interculturalidad, con el fin de asegurar una adecuada transmisión de los conocimientos indígenas en un entorno inclusivo y respetuoso.
4. **Medición de impacto:** Incorporar indicadores específicos para evaluar el impacto de la política, como la mejora en la permanencia escolar de estudiantes indígenas, la percepción de inclusión cultural en las aulas y el aumento del conocimiento de los saberes ancestrales en la población estudiantil.

Resultados esperados y justificación

- Impacto cultural y social: La inclusión de contenidos indígenas promoverá la cohesión social, reduciendo los índices de discriminación reportados en el ámbito educativo.
- Reconstrucción identitaria: Facilitará el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas, promoviendo su sentido de pertenencia y autoestima.
- Educación inclusiva y equitativa: Contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 4 (Educación de calidad), asegurando una educación inclusiva y equitativa para todos.

2. SUSTENTO JURÍDICO

- **Normativa internacional:** Acuerdo 169 de la OIT
- **Constitución Política de Colombia**

Artículo 7. El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación

- **Leyes**

Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación): Establece que la educación debe fomentar el conocimiento y respeto por la diversidad cultural del país, incluyendo los saberes de las comunidades indígenas.

- **Jurisprudencia**

Sentencia T-235/11: La Corte Constitucional de Colombia ha caracterizado a los pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional, debido a su situación de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad se origina en aspectos históricos, sociales y jurídicos, como la existencia de patrones históricos de discriminación.

- **Decretos**

Decreto 804 de 1995: Reglamenta la atención educativa para los grupos étnicos, garantizando una educación que respete y desarrolle su identidad cultural.

CONPES D.C. 37 (2024-2035), resalta la importancia de garantizar los derechos culturales, educativos y sociales de los pueblos indígenas en Bogotá, reconociendo las brechas históricas y la exclusión sistemática que han sufrido estas comunidades. En el ámbito educativo, identifica varios puntos críticos:

1. **Desigualdad educativa:** Solo un porcentaje limitado de la población indígena accede a niveles educativos superiores. Según el documento, más del 50% de la población indígena de Bogotá no alcanza niveles de educación superior, y en muchos casos, no completa la secundaria.
2. **Pérdida cultural:** La ausencia de contenidos educativos que integren saberes ancestrales y la cosmovisión indígena ha llevado al desarraigo cultural y la pérdida de identidad entre las nuevas generaciones indígenas.
3. **Falta de infraestructura diferencial:** Las instituciones educativas no están adaptadas para atender las necesidades culturales y lingüísticas de las comunidades indígenas.
4. **Discriminación educativa:** El 30% de los estudiantes indígenas reportan haber experimentado algún tipo de discriminación en instituciones educativas, lo que impacta negativamente su rendimiento y permanencia escolar.

- **Acuerdos y resoluciones**

Acuerdo Distrital 175 de 2005: Este acuerdo del Concejo de Bogotá reconoce la importancia de la diversidad étnica y cultural en la ciudad y establece políticas para la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Cabildo Indígena Muisca de Suba: Reconocido mediante la Resolución 024 del 12 de marzo de 1999.

Cabildo Indígena Muisca de Bosa: Reconocido mediante la Resolución 003 del 12 de enero de 2000.

Cabildo Indígena Inga de Bogotá: Reconocido mediante la Resolución 105 del 30 de enero de 2002.

Cabildo Indígena Kichwa de Bogotá: Reconocido mediante la Resolución 106 del 30 de enero de 2002.

Cabildo Indígena Ambiká Pijao de Bogotá: Reconocido mediante la Resolución 108 del 30 de enero de 2002.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

❖ ANTECEDENTES

Históricamente, el sistema educativo colombiano ha priorizado en su currículo la enseñanza de hechos históricos como la llegada de Cristóbal Colón, relegando el conocimiento sobre los pueblos indígenas a un segundo plano. Este enfoque ha invisibilizado y contribuido, entre otros factores, a una desaparición de las culturas indígenas en el tiempo.

Ante esta situación, es imperativo realizar un ajuste curricular que incluya contenidos que reflejen la riqueza cultural y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, reconociendo su importancia en la construcción de la identidad nacional.

La inclusión de conocimientos de los pueblos indígenas en el currículo escolar es esencial para promover la interculturalidad y el respeto por la diversidad cultural en el país. Al integrar estos conocimientos en la educación formal, se fortalecerá la identidad cultural de las comunidades indígenas y se fomentará en los estudiantes un mayor respeto y aprecio por la diversidad étnica. Además, esta iniciativa contribuirá a la preservación de las lenguas y conocimientos propios de indígenas que están en riesgo de desaparecer debido a la falta de visibilidad en los programas educativos actuales.

Incluir en los currículos una cátedra o materia sobre historia, saberes y cultura indígena es un proceso que ya han adelantado otros países, que son una importante referencia, como lo son países de América Latina Perú, Ecuador, Bolivia y México.

En Perú, por ejemplo, se ha dado un paso importante hacia la inclusión de contenidos relacionados con la historia, cultura y saberes indígenas en el currículo de las escuelas y colegios públicos. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Educación (MINEDU) para reconocer y valorar la diversidad cultural del país, contenidos que en el currículo escolar se oficializó a través del **Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB)**, aprobado mediante la **Resolución Ministerial N.º 281-2016-MINEDU**, el cual empezó a aplicarse progresivamente a partir de 2017, para promover el conocimiento, respeto y valoración de la diversidad cultural y lingüística.

La implementación de estos contenidos se ha llevado a cabo mediante diversas metodologías pedagógicas, con el fin de asegurar una integración efectiva y contextualizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

1. **Enfoque Intercultural:** La educación intercultural bilingüe (EIB) es uno de los ejes principales para la inclusión de contenidos indígenas. Este enfoque permite que los estudiantes indígenas reciban educación en su lengua materna y que todos los estudiantes, indígenas o no, aprendan sobre la diversidad cultural y lingüística del país.
2. **Materiales Educativos Adaptados:** Se han desarrollado y distribuido materiales educativos adaptados, como textos escolares y recursos audiovisuales, que incorporan los saberes, tradiciones y lenguas indígenas. Estos materiales han sido elaborados en colaboración con comunidades indígenas para garantizar la autenticidad y pertinencia de los contenidos.
3. **Capacitación Docente:** El MINEDU ha implementado programas de formación y capacitación docente en enfoques interculturales, para que los profesores puedan aplicar adecuadamente el currículo y los materiales educativos en las aulas.

El impacto de estas iniciativas ha sido variado, pero en general positivo, por lo que a continuación se relacionan con el reconocimiento y valoración de la diversidad, un mejor rendimiento académico en comunidades indígenas, y desafíos en la implementación.

El MINEDU ha realizado varios estudios y reportes sobre la implementación del currículo con enfoque intercultural. Según el **Informe de Progreso en la Educación Intercultural Bilingüe 2021**, se destaca que aproximadamente el 17% de las escuelas públicas del país ofrecen educación intercultural bilingüe. Sin embargo, el reporte también señala que se requiere un mayor esfuerzo para alcanzar la cobertura total y mejorar la calidad de la educación en todas las comunidades indígenas.

La implementación de estos programas y contenidos está respaldada por varias normativas y leyes en Perú, tales como:

- **Ley General de Educación, Ley N.º 28044:** Establece la educación intercultural bilingüe como una modalidad del sistema educativo peruano, garantizando el derecho a recibir educación en la lengua materna para los pueblos indígenas.
- **Decreto Supremo N.º 006-2016-MINEDU:** Reglamenta la implementación de la educación intercultural bilingüe en el país y establece las directrices para la creación de materiales educativos y la formación docente.
- **Resolución Ministerial N.º 281-2016-MINEDU:** Aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica, donde se incorpora el enfoque intercultural como uno de los pilares fundamentales de la educación en Perú.

Otra experiencia importante se encuentra en el país de Ecuador en el que la inclusión de estos contenidos está respaldada principalmente por la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en cuyo artículo 347 establece que el Estado debe garantizar el derecho a una educación intercultural, promoviendo el conocimiento y valoración de las culturas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así mismo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) de 2011 refuerza dicho precepto, estableciendo la necesidad de integrar la interculturalidad como eje transversal en el sistema educativo nacional. El Decreto Ejecutivo N° 1247, emitido en 2012, es otra pieza clave, porque establece la creación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), que tiene como propósito el desarrollo y fortalecimiento de la educación en y para las comunidades indígenas, promoviendo el uso de las lenguas originarias y la enseñanza de sus saberes ancestrales.

Lo anterior, se ha puesto en práctica por medio de diversos programas y se ha ajustado a las necesidades y realidades de las comunidades, entre las metodologías aplicadas se destacan:

- **Diseño de Currículos Interculturales Bilingües:** Adaptados a las realidades lingüísticas y culturales de cada región, estos currículos integran saberes ancestrales y conocimientos propios de las comunidades indígenas.
- **Capacitación Docente:** Programas de formación continua para los docentes, orientados a la enseñanza en contextos interculturales y bilingües. Esto ha permitido a los educadores contar con herramientas pedagógicas adecuadas para impartir contenidos que respeten y promuevan la diversidad cultural.
- **Materiales Didácticos Adaptados:** Desarrollo y distribución de textos y recursos educativos que incluyen contenidos culturales indígenas, con énfasis en la historia, cosmovisión y valores de las diferentes nacionalidades indígenas del país.

El impacto de estos contenidos ha sido monitoreado por el Ministerio de Educación de ese país a través de diversos estudios y reportes, algunos de los resultados observados incluyen revalorización cultural, mejoras en el rendimiento escolar y promoción del bilingüismo. A pesar de ello, la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, ha indicado que, si bien se han logrado avances significativos, aún existe la necesidad de fortalecer la infraestructura educativa en las comunidades más alejadas y de asegurar una mayor equidad en la distribución de recursos.

Con respecto a Bolivia, existe la Ley N° 070 de 2010 de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”. Esta ley constituye una reforma educativa profunda, establece la necesidad de una educación descolonizadora, intercultural y plurilingüe, reconociendo y valorizando las diversas culturas indígenas de este país.

Según informes del Ministerio de Educación de Bolivia, la mencionada ley ha logrado que las nuevas generaciones de estudiantes reconozcan y respeten la diversidad cultural del país, así como su historia y sus saberes ancestrales. Este cambio ha contribuido a una mayor cohesión social y al fortalecimiento de las identidades indígenas. En términos cualitativos, se observa un mayor reconocimiento y valoración de las culturas indígenas por parte de los estudiantes permitiendo una mayor inclusión social y al empoderamiento de las comunidades indígenas, que ahora ven sus conocimientos y tradiciones reflejados en el sistema educativo formal.

Por otro lado, en México, en el currículo de las escuelas y colegios públicos ha sido una prioridad en el marco de la política educativa del país. Este proceso ha sido respaldado por diversos instrumentos legales y normativos que buscan garantizar el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística del país. Entre estos instrumentos se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación (LGE) y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Todo ello, ha permitido que se implementen estrategias tales como el diseño de programas bilingües e interculturales, la capacitación docente y materiales educativos en lenguas indígenas y sobre temas culturales indígenas, adaptados a las necesidades de cada región.

Ahora, es importante resaltar que no solo los países de América Latina tienen experiencias con respecto a la inclusión de la enseñanza de la historia y saberes ancestrales, pues en países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda también se encuentran incorporados estos contenidos.

En Australia, la inclusión de los contenidos relacionados con la historia, cultura y saberes indígenas en el currículo de las escuelas y colegios públicos ha sido un proceso progresivo guiado por un compromiso nacional de reconciliación y respeto por las Primeras Naciones. Este esfuerzo se enmarca en una serie de iniciativas educativas que buscan reconocer y valorar la herencia cultural de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres, quienes son los habitantes originarios de Australia.

La inclusión está respaldada por varios documentos legales y normativos, entre ellos, destaca el **Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA)**. Este currículo establece las directrices nacionales que deben seguir todas las escuelas en Australia.

En el contexto normativo, la **Ley de Educación de 1999** y la **Ley de Reconocimiento de los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres de 2013** son fundamentales, ya que refuerzan la necesidad de incluir temas que promuevan el entendimiento intercultural y el respeto por la diversidad cultural.

El **Australian Curriculum** incluye la historia, cultura y saberes indígenas de manera transversal en diferentes áreas del conocimiento, especialmente en **Historia, Geografía y Estudios Sociales**. Este enfoque permite que los estudiantes adquieran una comprensión más profunda y respetuosa de las culturas indígenas desde una edad temprana. Los contenidos se estructuran en torno a tres ejes principales: historia y cultura, sostenibilidad y conocimiento ambiental y lenguas indígenas.

En Canadá, este tema ha sido una prioridad en los últimos años, especialmente a raíz de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (TRC) de 2015. El proceso ha estado impulsado por un reconocimiento de la necesidad de abordar el legado del sistema de escuelas residenciales y la historia colonial del país. La implementación de estos contenidos se enmarca dentro de varias normativas y políticas tanto a nivel federal como provincial. A nivel federal, la **Ley C-92** (An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families), aunque principalmente orientada a la protección de menores, también establece principios que influyen en la educación, como el respeto por las culturas y lenguas indígenas. A nivel provincial, las jurisdicciones educativas han adoptado sus propios marcos legales y políticas. Por ejemplo, en la provincia de Columbia Británica, se ha desarrollado el **First Peoples Principles of Learning** como parte integral del currículo.

El impacto de la inclusión de estos contenidos ha sido significativo permitiendo una mayor conciencia y sensibilidad cultural, la participación y retención escolar y el empoderamiento de las comunidades indígenas.

Como última experiencia internacional, se tiene el caso de Nueva Zelanda, la inclusión de la historia, cultura y saberes indígenas, particularmente con el pueblo Māori, siendo una prioridad en el sistema educativo. A través de diversas reformas y políticas, se ha integrado de manera significativa en el currículo nacional de las escuelas y colegios públicos la implementación de contenidos relacionados con la cultura Māori, esto ha contribuido a un mayor reconocimiento y respeto por la cultura indígena, promoviendo la identidad cultural y el bilingüismo. Se ha observado un incremento en la participación y el éxito académico de estudiantes Māori, además de una mayor conciencia cultural entre estudiantes de todas las Etnias.

El Ministerio de Educación de Nueva Zelanda ha publicado varios informes que destacan los avances y desafíos en la implementación de la educación bicultural, estos informes indican que la inclusión de la cultura y lengua Māori en el currículo ha fortalecido la identidad de los estudiantes indígenas y ha mejorado su rendimiento académico. Los reportes

también señalan la importancia de continuar desarrollando recursos educativos y capacitando a los docentes para una implementación efectiva.

Entre los impactos más destacados se encuentra la mejora en los resultados académicos de los estudiantes māori, una mayor inclusión y equidad educativa para los pueblos indígenas, enriquecimiento del currículo escolar con perspectivas biculturales. y el fortalecimiento de la lengua māori (tereo māori)) en las escuelas, promoviendo así el bilingüismo.

La inclusión de contenidos indígenas en el currículo se ha incluido a través del Te Tiriti o Waitangi (Tratado de Waitangi): Este tratado es fundamental en la estructura legal y normativa de Nueva Zelanda, y establece la relación entre el gobierno y el pueblo Māori, siendo una base para la inclusión de su cultura y lengua en el sistema educativo, también se resalta la existencia del Nueva Zelanda Curriculum (NZC) y el Ka Hikitia – Accelerating Success.

Estas últimas tres experiencias internacionales, tienen en común algunas formas en la implementación tales como: a). el desarrollo de recursos pedagógicos idóneos y adecuados, b). la capacitación continua de docentes, c). la evaluación y ajuste constante del currículo para asegurar su pertinencia y efectividad, d). el desarrollo curricular colaborativo, e). el desarrollo de materiales educativos y culturales, f).el enfoque holístico y comunitario.

❖ **Importancia de la inclusión de la historia indígena en el currículo en los colegios públicos en Bogotá.**

La inclusión de la historia, cultura y saberes indígenas en los currículos escolares es esencial para construir sociedades más justas e inclusivas. Permite a los estudiantes reconocer y valorar la diversidad cultural de sus países, entender los impactos históricos de la colonización, y fomentar el respeto y la convivencia entre diferentes culturas. Además, contribuye a la reparación histórica y al fortalecimiento de la identidad de las comunidades indígenas, garantizando que sus historias y conocimientos no sean olvidados, sino que sean reconocidos como una parte vital de la historia nacional.

Es un paso fundamental para mitigar la discriminación y el bullying que enfrentan los estudiantes indígenas. Sin embargo, esto debe ir acompañado de una sensibilización profunda, políticas claras y apoyo psicológico para garantizar un ambiente educativo verdaderamente inclusivo y respetuoso. Solo con un enfoque holístico se puede asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico, se sientan valorados y seguros en su entorno escolar.

Esta propuesta requiere un enfoque integral que combine la inclusión curricular, la sensibilización social y la intervención psicológica, los efectos podrían extenderse a nivel educativo, social, cultural y emocional. A continuación, se describe el impacto ampliado en cada una de estas áreas:

1. Educativo

Mejor comprensión y respeto por la diversidad: Incluir contenidos sobre historia y cultura indígena en el currículo escolar ayudaría a todos los estudiantes a comprender y apreciar la riqueza y diversidad cultural de los pueblos indígenas. Esto podría reducir la ignorancia que a menudo subyace a actitudes discriminatorias y al bullying, promoviendo una convivencia más respetuosa.

Enriquecimiento académico: La inclusión de saberes indígenas aportaría nuevos conocimientos y perspectivas a los estudiantes, ampliando su visión del mundo y su capacidad de análisis crítico. Los estudiantes podrían aprender sobre prácticas sostenibles, conocimientos tradicionales en medicina, astronomía y agricultura, que han sido desarrollados y perfeccionados durante siglos.

Fomento del sentido de pertenencia: Para los estudiantes indígenas, ver su cultura reflejada y valorada en el currículo escolar podría fortalecer su identidad y sentido de pertenencia, lo que a su vez podría mejorar su rendimiento académico y su autoestima.

2. Social

Reducción de la discriminación y el bullying: Con una mayor comprensión y respeto hacia las culturas indígenas, es probable que disminuyan las actitudes y comportamientos discriminatorios, incluyendo el bullying. Al integrar estos temas en el currículo, se podría fomentar una cultura escolar más inclusiva y equitativa, donde todos los estudiantes se sientan valorados y respetados.

Fortalecimiento de la cohesión social: Un ambiente escolar que valora y celebra la diversidad cultural puede contribuir a una sociedad más unida y cohesionada. Los estudiantes que crecen en un entorno inclusivo y respetuoso están mejor preparados para convertirse en adultos que valoran y promueven la igualdad y la justicia social.

Empoderamiento de comunidades indígenas: La valorización de las culturas indígenas en la educación pública puede empoderar a las comunidades indígenas, dándoles voz y visibilidad en el sistema educativo. Esto podría fortalecer sus reivindicaciones por derechos y reconocimiento, tanto a nivel local como nacional.

3. Cultural

Preservación de las culturas indígenas: La inclusión de contenidos sobre culturas indígenas en el currículo escolar puede contribuir a la preservación de estas culturas, que a menudo están en peligro debido a la globalización y la homogenización cultural. Los estudiantes no indígenas tendrían la oportunidad de aprender y apreciar estas culturas, mientras que los estudiantes indígenas podrían sentir orgullo por su herencia cultural.

Rescate de saberes y conocimientos ancestrales: Incorporar conocimientos ancestrales en el currículo puede ayudar a rescatar y revitalizar saberes que han sido marginados o subestimados en la educación formal. Esto podría incluir prácticas en medicina, agricultura, arte, y filosofía, que ofrecen valiosas lecciones para enfrentar desafíos contemporáneos como el cambio climático y la sostenibilidad.

4. Emocional y Psicológico

Mejora de la autoestima y la identidad: Los estudiantes indígenas que ven su cultura reflejada en el currículo escolar pueden experimentar un fortalecimiento de su autoestima e identidad. Sentir que su herencia cultural es valorada puede reducir los sentimientos de alienación y aumentar su sentido de pertenencia.

Reducción del estrés y la ansiedad: Disminuir las prácticas discriminatorias y el bullying puede tener un efecto positivo en la salud mental de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que pertenecen a minorías étnicas. Un entorno escolar inclusivo y respetuoso puede reducir el estrés y la ansiedad asociados con la discriminación, permitiendo a los estudiantes concentrarse mejor en su aprendizaje y desarrollo personal.

Incluir contenidos relacionados con la historia, cultura y conocimientos indígenas en el currículo de las escuelas públicas de Bogotá no solo tendría un impacto positivo en la disminución de la discriminación y el bullying, sino que también enriquecería el proceso educativo, fomentaría la cohesión social, y contribuiría a la preservación y valorización de las culturas indígenas. Además, proporciona un entorno más equitativo y respetuoso para todos los estudiantes, fortaleciendo su desarrollo emocional y psicológico. Este enfoque no solo beneficiaría a los estudiantes indígenas, sino a toda la comunidad escolar, preparando a las futuras generaciones para vivir en una sociedad más inclusiva y justa.

En este sentido, este proyecto pretende lograr:

1. Sensibilización y Educación

a. Formación del Personal Educativo: Capacitar a los profesores, directores y demás comunidad educativa en temas de diversidad cultural, historia indígena y sensibilización contra el racismo. Esto incluye talleres y cursos sobre cómo identificar y abordar el bullying y la discriminación.

b. Contenidos Curriculares Inclusivos: Integrar la historia y la cultura indígena en todas las áreas del currículo, no solo en materias de estudios sociales o historia, sino también en literatura, arte, ciencias y educación física. Esto ayuda a construir una comprensión más profunda y respetuosa de las comunidades indígenas.

c. Materiales Educativos: Desarrollar y utilizar libros de texto, recursos digitales y materiales didácticos que representen con precisión y respeto la cultura indígena. Estos materiales deben ser elaborados en consulta con las comunidades indígenas para asegurar su exactitud y sensibilidad.

2. Promoción de la Diversidad y la Inclusión

a. Celebración de la Cultura Indígena: Organizar eventos y actividades escolares que celebren y promuevan las tradiciones y la cultura indígena, como festivales, exposiciones de arte y presentaciones de música y danza. Esto fomenta la apreciación y el respeto hacia las culturas indígenas.

b. Participación de la Comunidad Indígena: Involucrar a miembros de la comunidad indígena en la vida escolar a través de charlas, talleres y colaboraciones en proyectos educativos. La presencia de modelos a seguir y expertos indígenas puede enriquecer el aprendizaje y promover una mayor comprensión.

3. Políticas y Normativas

a. Políticas Anti-Bullying: Desarrollar e implementar políticas claras contra el bullying y la discriminación, con un enfoque específico en las experiencias y necesidades de los estudiantes indígenas. Estas políticas deben ser comunicadas claramente a toda la comunidad educativa.

b. Procedimientos de Reporte y Apoyo: Establecer procedimientos efectivos para que los estudiantes y sus familias puedan reportar incidentes de bullying y discriminación. Proveer apoyo psicológico y asesoramiento a las víctimas de bullying, garantizando un entorno seguro y de apoyo.

4. Evaluación y Monitoreo

a. Evaluación Continua: Realizar evaluaciones periódicas para medir la efectividad de las estrategias implementadas y ajustar las prácticas según sea necesario. Incluir encuestas y grupos focales para obtener retroalimentación de los estudiantes y sus familias.

b. Monitoreo del Clima Escolar: Monitorear el clima escolar regularmente para detectar posibles problemas de discriminación y bullying. Implementando medidas correctivas basadas en los hallazgos para mejorar la inclusión y el respeto en la escuela.

5. Fomento de la Empatía y el Respeto

a. Actividades de Integración: Promover actividades que fomenten la colaboración y el entendimiento entre estudiantes de diferentes orígenes culturales. Proyectos en grupo y discusiones guiadas pueden ayudar a los estudiantes a aprender a trabajar juntos y respetarse mutuamente.

b. Promoción de Valores de Inclusión: Integrar valores de respeto, igualdad y justicia en la enseñanza diaria, reforzando la importancia de tratar a todos los compañeros con dignidad y respeto, independientemente de su origen cultural.

Al adoptar un enfoque integral que combina educación, participación comunitaria, políticas claras y un compromiso continuo con la evaluación y mejora, se puede crear un entorno escolar en el que todos los estudiantes, incluidos los de pueblos indígenas, se sientan valorados y respetados, es por ello que este proyecto cobra relevancia

5. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO.

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo, en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta a la Corporación para dictar normas así:

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...)

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.

6. IMPACTO FISCAL.

Este proyecto no genera impacto fiscal, ya que se propone la utilización de plataformas digitales existentes para la distribución de materiales educativos y la capacitación de docentes. Esto permitirá evitar costos adicionales asociados a la impresión de libros o manuales. Además, la capacitación de docentes se podrá realizar a través de programas de formación continua ya establecidos, optimizando así los recursos disponibles.

De igual manera la Secretaría de Educación Distrital tiene la responsabilidad de desarrollar acciones necesarias en torno a la inclusión de los enfoques Poblacional, Diferencial y de Género, en el marco de la implementación de los modelos, planes y programas.

Por tanto, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes.

7. CONCLUSIONES

La inclusión de contenidos relacionados con la cultura y conocimientos propios de los pueblos indígenas en el currículo educativo responde a la necesidad de reconocer y preservar la diversidad cultural de la ciudad. Esta iniciativa no solo beneficiará a las comunidades indígenas, sino que también enriquecerá la educación de todos los estudiantes, al brindarles una perspectiva más amplia y diversa sobre la historia y cultura del país. La formación de un comité conjunto entre la Secretaría de Educación, los líderes indígenas y expertos en currículo educativo garantizará que los contenidos desarrollados sean culturalmente pertinentes, inclusivos y pedagógicamente adecuados.

8. TÍTULO - ATRIBUCIONES – CONSIDERANDOS – ARTICULADO: Título: “Por medio del cual se incluye la enseñanza de la historia, cultura y saberes indígenas en el currículo de las instituciones educativas públicas del distrito capital de Bogotá”.

Autor

Atentamente

OSCAR FERNANDO BASTIDAS JACANAMIJOY

Concejal de Bogotá D.C.

Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS

PROYECTO DE ACUERDO NO 697 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, CULTURA Y SABERES INDÍGENAS EN EL CURRÍCULO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL DE****ATRIBUCIONES**

El Concejo de Bogotá, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), la Ley 1381 de 2010 (Ley de Lenguas Nativas), y demás normas concordantes,

CONSIDERANDOS

Que el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, asegurando el respeto y la promoción de los derechos culturales de las comunidades indígenas. La educación debe reflejar esta diversidad y garantizar la preservación, difusión y apropiación del conocimiento de los pueblos indígenas, contribuyendo a la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa de todas las culturas.

Que el artículo 70 de la Constitución Política establece que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y que el Estado tiene la obligación de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. En este sentido, la educación juega un rol fundamental en la promoción de la diversidad cultural, siendo un espacio propicio para la enseñanza y difusión de la historia y saberes de los pueblos indígenas.

Que la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en su artículo 14, establece que la educación debe fomentar en el educando el respeto por la identidad cultural, así como el conocimiento y valoración crítica del patrimonio cultural. De acuerdo con esta ley, el currículo escolar debe incluir contenidos que reflejen la pluralidad cultural de Colombia, permitiendo a los estudiantes comprender y valorar la riqueza de la herencia cultural de los pueblos indígenas.

Que la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), en su artículo 8, promueve la inclusión de contenidos culturales que reflejen la diversidad étnica y cultural de Colombia en los programas educativos. Esto incluye la enseñanza de la historia, lenguas, tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, garantizando su conocimiento y preservación para las futuras generaciones.

Que la Ley 1381 de 2010 (Ley de Lenguas Nativas) reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la preservación y uso de sus lenguas, así como la promoción de estas lenguas a través del sistema educativo. La inclusión de contenidos relacionados con las lenguas y saberes indígenas en el currículo escolar es un paso esencial para garantizar este derecho.

Que la Corte Constitucional, mediante sentencias T-466 de 2016 y T-606 de 2015, ha reafirmado la necesidad de incluir en los programas educativos conocimientos que reflejen la pluralidad étnica y cultural de la Nación, en particular, los saberes de las comunidades indígenas. Esta jurisprudencia reconoce la importancia de la educación en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde se respete y valore la diversidad cultural.

Que el Distrito Capital de Bogotá, en su calidad de entidad territorial y en consonancia con el Plan de Desarrollo Distrital, tiene el compromiso de promover políticas educativas inclusivas que fomenten el respeto por la diversidad cultural y étnica, así como la preservación del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas que habitan en su territorio.

Que la inclusión de contenidos relacionados con la historia, cultura y saberes indígenas en el currículo escolar contribuye a la construcción de una ciudadanía más consciente y respetuosa de la diversidad cultural, promoviendo el diálogo intercultural y el reconocimiento de las contribuciones de los pueblos indígenas al desarrollo de la sociedad.

En mérito de lo expuesto, el Concejo de Bogotá,

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto promover la inclusión de contenidos relacionados con la historia, cultura y saberes ancestrales de los pueblos indígenas en el currículo de las instituciones educativas públicas del Distrito Capital de Bogotá, con el fin de garantizar el reconocimiento, respeto y preservación de la diversidad cultural de la Nación.

Artículo 2. Inclusión en el Currículo. Las instituciones educativas públicas del Distrito Capital de Bogotá, en todos sus niveles, deberán incluir en sus planes de estudio y proyectos pedagógicos contenidos que aborden la historia, cultura, lenguas, saberes tradicionales, conocimientos y contribuciones de los pueblos indígenas al desarrollo de la sociedad.

Artículo 3. Desarrollo de Materiales Pedagógicos. La Secretaría de Educación Distrital, en coordinación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y con la participación de representantes de las comunidades indígenas, desarrollará y proporcionará materiales pedagógicos que sean adecuados y culturalmente pertinentes para la enseñanza de estos contenidos.

Parágrafo. Se garantizará la participación activa de las comunidades indígenas en el proceso de elaboración de los contenidos educativos, así como en la definición de estrategias pedagógicas que favorezcan la enseñanza de su historia y cultura en las instituciones educativas públicas del Distrito Capital.

Artículo 4. Implementación. La administración, en un plazo no mayor a 3 años, realizará las gestiones pertinentes para la implementación progresiva de estos saberes en los currículos, una vez se tengan los materiales concertados, de los que trata el artículo 3 de este acuerdo.

Artículo 5. Capacitación Docente. La Secretaría de Educación Distrital deberá poner en marcha programas de formación y capacitación para los docentes de las instituciones educativas públicas en el Distrito Capital, orientados a la enseñanza de la historia, cultura y saberes indígenas, así como a la implementación de estrategias pedagógicas inclusivas que promuevan el diálogo intercultural y el respeto por la diversidad cultural.

Artículo 6. Seguimiento y Evaluación. La Secretaría de Educación Distrital, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte, y de Gobierno, establecerá mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la efectiva inclusión y enseñanza de los contenidos relacionados con la historia, cultura y saberes indígenas en las instituciones educativas públicas del Distrito Capital.

Parágrafo 1. La implementación de los contenidos educativos relacionados con la historia, cultura y saberes indígenas deberá realizarse de manera progresiva y con respeto a las características propias de cada comunidad educativa, teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las directrices establecidas en el presente Acuerdo.

Parágrafo 2. Los costos generados por la implementación del presente Acuerdo se financiarán con los recursos asignados en el presupuesto general del Distrito para la educación y cultura, así como con otras fuentes de financiación que sean pertinentes y autorizadas conforme a la normativa vigente.

Artículo 7. Vigencia y Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PROYECTO DE ACUERDO NO 698 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA RED DEL CUIDADO COLECTIVO DE MUJERES INDÍGENAS VINCULADAS A LAS MANZANAS DE CUIDADO EN EL DISTRITO CAPITAL”.*****1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO****Objetivo general**

Crear la *red del cuidado colectivo de Mujeres Indígenas vinculadas a las manzanas del cuidado en el distrito Capital* tiene como propósito principal garantizar el acceso equitativo y culturalmente pertinente de las mujeres indígenas en los programas existentes en Distrito Capital, con este se busca atender las necesidades específicas de las mujeres indígenas en el ámbito urbano, reivindicar sus derechos mediante la integración de una mirada territorial ancestral, respetando y fortaleciendo sus prácticas culturales y comunitarias.

Objetivos específicos

- Aunar esfuerzos para reforzar la inclusión y atención de las mujeres indígenas a la estrategia de Manzanas del cuidado.
- Utilizar la red como herramienta para la garantía de sus derechos a través del fortalecimiento de alianzas interinstitucionales.
- Aprovechar los recursos existentes en la articulación de mecanismos comunitarios tradicionales.
- Reivindicar los derechos a la cultura, identidad, lengua e historia de las mujeres indígenas del Distrito.
- Desarrollar protocolos específicos para la atención y acompañamiento de mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad, garantizando el respeto por sus prácticas culturales y derechos fundamentales.

La propuesta potencia la importancia de la red del cuidado colectivo como un elemento esencial en la reducción de brechas sociales y económicas, al tiempo que asegura la preservación del patrimonio cultural de las comunidades indígenas que han contribuido históricamente al tejido social de la ciudad.

2. ANTECEDENTES

Históricamente, las mujeres indígenas han enfrentado múltiples formas de discriminación y exclusión social debido a la intersección de género, etnia y pobreza. Según datos del Censo Nacional de 2018, en Bogotá residen más de 30.000 indígenas pertenecientes a diversos pueblos. Las mujeres desempeñan un papel central en el cuidado de sus familias y comunidades, pero a menudo enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de cuidado y desarrollo personal.

En Bogotá, habitan más de 22 pueblos indígenas, 14 pueblos reconocidos por la Alcaldía Mayor. Entre estos, se encuentran los pueblos; Pastos, Wounaan, Kichwa, Huítoto, Kametsa, Nasa, Tubu, Misak Misak, Eperara Siapidara, Yanacona, Ambiká Pijao, Inga, Muisca Suba, Muisca Bosa y tres grupos representativos del pueblo Emberá: Dobida, Chamí y Katío, que viven en reasentamientos de acogida debido al desplazamiento forzado. y otros cinco reconocidos desde la instancia de víctimas indígenas los pueblos Wayuu, Koreguaje, Kubeo, Kankuamo y Zenu.

Las mujeres indígenas en Bogotá representan una población significativa en la ciudad, y su situación está marcada por desafíos particulares relacionados con el desplazamiento, la exclusión y la preservación de sus tradiciones culturales en un contexto urbano.

De acuerdo al último reporte emitido por la “secretaría Distrital de la Mujer sobre mujeres indígenas de Bogotá”: Liderazgo, transformación y empoderamiento, menciona que, en la actualidad en Bogotá, residen más de 10,000 mujeres

indígenas pertenecientes a diversos pueblos³⁴. La entidad desde el 2021, ha implementado programas específicos para apoyar a mujeres indígenas, brindando asistencia en temas de violencia de género, salud mental y empoderamiento. Por ejemplo, 1,126 mujeres indígenas han recibido atención psico-jurídica, mientras que 290 han accedido a asesoría psicosocial y legal a través de programas de justicia de género. Además, nueve mujeres han encontrado refugio en Casas de Acogida y más de 241 participan activamente en las "Manzanas del Cuidado," una iniciativa para promover la autonomía y el bienestar³⁵.

En lo histórico y a lo largo donde habitan pueblos y comunidades indígenas, las mujeres tienen un rol primordial en la defensa de la identidad de sus pueblos y son ellas quienes forjan liderazgos para dignificar la vida, preservar sus costumbres y luchar por la pervivencia cultural. Sus conocimientos tradicionales y la profunda conexión con su entorno, asumiendo roles de preservación y transmisión de conocimiento. Sin embargo, las "Mujeres indígenas se enfrentan a múltiples formas de discriminación y vulnerabilidad debido a la interseccionalidad de factores como el género, la etnicidad y la situación socioeconómica" al igual la ausencia de espacios o redes de apoyo específicas que consideren sus particularidades culturales.

El papel de las mujeres indígenas en Bogotá es clave en la preservación de su cultura, la lucha por sus derechos y la reivindicación de su identidad sigue siendo un desafío por lo que es importante tener en cuenta:

- **Desafíos Sociales en un contexto de ciudad:** Muchas mujeres indígenas que viven en Bogotá son desplazadas de sus territorios ancestrales debido a la violencia, el conflicto armado, la explotación de recursos y la falta de oportunidades en sus comunidades de origen. Este desplazamiento genera una serie de retos, como la adaptación a un entorno urbano que puede ser culturalmente ajeno y, en ocasiones, hostil hacia sus tradiciones e identidad.
- **Preservación de la Cultural y Lenguajes:** Las mujeres indígenas en Bogotá buscan preservar su cultura y transmitir su lenguaje y sistemas de conocimientos a las nuevas generaciones. Sin embargo, la falta de políticas que promuevan y respeten su identidad cultural hace que sea difícil mantener sus prácticas tradicionales en un entorno urbano que las margina. Algunas mujeres lideran procesos de enseñanza en sus comunidades para mantener vivas sus lenguas y costumbres, y otras colaboran con instituciones educativas para promover el conocimiento y respeto por la diversidad cultural indígena.
- **Garantía de Derechos y eliminación de Violencias:** las mujeres indígenas enfrentan altos niveles de violencia, tanto en sus comunidades como en la ciudad, incluyendo violencia de género, violencia económica y discriminación. En Bogotá, algunas organizaciones y colectivos, también se enfrentan a la precarización laboral y, en muchos casos, tienen empleos informales y mal remunerados, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
- **Participación y representación en Movimientos Sociales:** Las mujeres indígenas en Bogotá no tienen la visibilidad en movimientos sociales o en espacios de representación que les permita ocupar espacios de participación política. Pese a que se acogen en su cabildo y algunas formas organizativas para promover sus derechos y luchar contra la discriminación y la exclusión, las oportunidades son insuficientes

³⁴ [Mujeres Indígenas de Bogotá: Liderazgo, Transformación y Empoderamiento | Secretaría Distrital de la Mujer](#)

³⁵ Ibidem

pese a las cifras de participación, incidencia y representatividad para seguir avanzando en políticas de inclusión y respeto por su identidad cultural y derechos como mujeres indígenas.

- **Necesidad de más apoyo Institucional:** A nivel institucional, existe la política pública enfocada en la población indígena urbana, como el *Plan Distrital Bogotá Camina Segura*, que contempla algunos programas para el apoyo a comunidades indígenas, sin embargo, no son suficientes dada la demanda en términos de la población que habita y es desplazada a la ciudad, los recursos y el alcance de estas políticas son limitados y no siempre responden a las necesidades específicas de las mujeres indígenas.

Es importante reconocer que desde la implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género y la Política de Pueblos Indígenas en Bogotá ha sido clave para visibilizar y atender las necesidades de las mujeres indígenas, permitiendo un enfoque más inclusivo y culturalmente sensible. Sin embargo, estos esfuerzos por comprender y atender las necesidades, afectaciones que tienen las mujeres indígenas en un contexto de ciudad, son insuficientes y quedan limitantes cuando no se reconocen la multiplicidad de factores e interseccionalidades que les convergen a las mujeres indígenas.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La creación de esta red de cuidado colectivo inmersa en las manzanas es una propuesta que resalta su importancia en una perspectiva interseccional en la implementación de políticas públicas, ya que fortalece las capacidades organizativas, el liderazgo de las mujeres indígenas, fomenta su participación activa en la toma de decisiones que afectan directamente su bienestar y el de sus comunidades. Esto no solo garantiza un enfoque inclusivo y participativo, sino que también contribuye al cumplimiento de compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) descritos así:

ODS	Descripción	Relevancia para la Iniciativa
ODS 3	Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	Promueve el acceso a servicios de cuidado y salud, mejorando el bienestar de las mujeres y comunidades vulnerables.
ODS 5	Igualdad de Género: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.	Fomenta la igualdad de género, reconociendo y valorando el trabajo de cuidado que realizan las mujeres.
ODS 10	Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países.	Aborda la redistribución de las tareas de cuidado, reduciendo las desigualdades socioeconómicas.
ODS 11	Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Mejora la infraestructura y acceso a servicios de cuidado en las comunidades, promoviendo una ciudad más equitativa e inclusiva.

Fuente: Construcción Propia

Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la construcción de una Bogotá más equitativa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural.

Es una respuesta urgente ante la creciente vulnerabilidad de las mujeres indígenas, quienes enfrentan barreras en el acceso a la garantía de los derechos tales como; salud, educación, empleo y justicia entre otros. Este proyecto de acuerdo busca establecer un puente entre las instituciones distritales que ofertan atención en las Manzanas del Cuidado y las comunidades indígenas, fomentando la protección de sus derechos y el fortalecimiento de la cohesión social en la ciudad.

La secretaria Distrital de la Mujer tiene a su cargo estrategias que son pertinentes para la atención y garantía de los derechos de las Mujeres y son elemento para la creación de la red del cuidado colectivo de Mujeres Indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el distrito Capital:

Sistema del Cuidado: El sistema de cuidado presta, entre otros, el servicio de orientación psicosocial, orientación y asesoría jurídica en modalidad individual y colectiva para mujeres en sus diferencias y diversidades, con el fin de acompañarlas en la búsqueda de bienestar emocional ligado al ejercicio de sus derechos. En ese sentido, brindan servicios a través de:

- Manzanas del cuidado
- Buses del cuidado
- Programa cuidado casa a casa
- Ofrece cuidado a cuidadoras.

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá a fecha de mes de noviembre de 2024 se inauguraron 23 manzanas del cuidado, donde se reconoce como tarea adicional del trabajo del cuidado los trámites administrativos y/o activación de instancias judiciales para el acceso a la justicia en casos de vulneración, violencias, satisfacción de necesidades, acceso a servicios y/o garantía de derechos fundamentales para sí mismas, las personas bajo su cuidado y/o la administración y gestión del funcionamiento del hogar.

Por lo tanto, se constituye como un servicio que pretende reconocer, reducir y redistribuir las tareas de cuidado entre las cuidadoras, la sociedad y el Estado. Así, brinda orientación y asesoría a las personas cuidadoras, considerando sus diferencias y diversidades, en todas las ramas del derecho y a nivel social, abordando los impactos del trabajo no remunerado en sus vidas. Este servicio es proporcionado por equipos de profesionales en psicología, trabajo social y derecho, en el marco de la oferta de cuidado a cuidadoras del Sistema Distrital del Cuidado. Su objetivo es reconocer, valorar y resignificar el trabajo de cuidado no remunerado y a quienes lo realizan, a través de procesos de empoderamiento y bienestar, en dos modalidades:

1. Orientaciones individuales psicosociales, jurídicas y psicojurídicas según las necesidades e intereses de las cuidadoras, en un espacio personalizado y confidencial, a través de las cuales se realiza una escucha activa, validación y contención emocional (de requerirse); en la que se pretende identificar el impacto emocional y relacional de estas problemáticas.

Articuladamente se identifican las rutas de acción, y se brinda información clara, completa y precisa sobre sus derechos y las rutas de acceso a la justicia que correspondan, de conformidad con la Resolución 314 de 2022 de la Secretaría Distrital de la Mujer (Por medio de la cual se desarrollan los objetivos, principios y componentes de la Estrategia de Justicia de Género). Se brinda herramientas para la identificación, prevención y atención de todos los tipos de violencias, del ciclo de violencias.

En este sentido, se apoya con la activación rutas a través múltiples acciones transversales e integrales como:

- Contención emocional.
 - Primeros auxilios psicológicos
 - Psicoeducación
 - Exploración de redes de apoyo.
 - Elaboración de derechos de petición, quejas, denuncias.
 - Solicitudes de medidas de protección y solicitudes de incumplimientos a medidas de protección.
 - Interposición de denuncias, medidas de atención, definición de alimentos, custodia y visitas.
 - Reconocimiento de derechos patrimoniales y conyugales.
 - Restablecimiento de derechos a favor de la mujer y sus hijos e hijas, impulsos procesales, etc., así como la articulación intra e interinstitucional que se requiera en el caso particular.
2. Orientaciones colectivas psicosociales, jurídicas y psico jurídicas a través de encuentros, talleres, en temas de interés que permitan fortalecer y brindar herramientas para su autonomía como sujetas de derechos, dirigidos también a potenciar las capacidades para el autocuidado e impulsar la creación de redes de apoyo entre cuidadoras. En el marco de estos encuentros colectivos realizados por las profesionales, se realizan múltiples jornadas de sensibilización, prevención y abordaje de las violencias contra las mujeres, dirigidos tanto a las cuidadoras, la comunidad, y otros funcionarios que prestan servicios en las Manzanas de cuidado, los Buses del Cuidado y otras unidades operativas.

Estas son unas de las varias estrategias interinstitucionales y de la alianza público-privadas que articula la Secretaría Distrital de la Mujer para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y que son articuladoras en las Manzanas de Cuidado en donde se propone la creación de la red del cuidado colectivo de Mujeres Indígenas y seguramente habrá muchas más para garantizar los derechos de las Mujeres en Bogotá desde un enfoque diferencial y Étnico.

Estas acciones buscan reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres indígenas en Bogotá, promoviendo su bienestar y participación activa en la sociedad. El Documento CONPES D.C. 37, "Política Pública de los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C. 2024 – 2035", establece una serie de productos concertados entre diversas entidades del Distrito Capital y las autoridades indígenas, incluyendo la Secretaría Distrital de la Mujer. Esta política pública destaca algunas de las líneas de articulación con el sector mujer para la garantía de los derechos de las mujeres indígenas en Bogotá.

- **Fortalecimiento de la participación de las mujeres indígenas:** Desarrollo de programas que promuevan la participación activa de las mujeres indígenas en espacios de toma de decisiones públicas, reconociendo sus identidades y capacidades, y fortaleciendo sus organizaciones y ciudadanía plena.
- **Garantía del derecho a una vida libre de violencias:** Implementación de acciones orientadas a prevenir y atender las violencias que afectan a las mujeres indígenas en diferentes ámbitos, asegurando su acceso a rutas de atención adecuadas y culturalmente pertinentes.
- **Promoción de los derechos económicos de las mujeres indígenas:** Desarrollo de iniciativas que reconozcan y fortalezcan el trabajo de las mujeres indígenas, destacando sus saberes y potencialidades en actividades de producción y reproducción, y facilitando su acceso a oportunidades económicas.
- **Acceso a la salud plena:** Ejecución de programas que garanticen el derecho a la salud de las mujeres indígenas, asegurando atención oportuna e integral con calidad y calidez, y promoviendo su participación en la toma de decisiones que las afectan.

En este sentido la protección de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas es una prioridad tanto a nivel internacional como nacional, y a nivel distrital debe ser un modelo ejemplarizante por lo que es fundamental la creación de la red del cuidado colectivo de Mujeres Indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el distrito Capital, como mecanismo que integren los saberes ancestrales y los programas sociales existentes, con un enfoque diferencial que responda a las necesidades de las mujeres indígenas en Bogotá.

La implementación de una red específica para ellas no sólo visibiliza sus problemáticas, sino que también establece un modelo de atención integral que responde a sus necesidades desde una perspectiva intercultural, fortaleciendo la equidad en el acceso a los derechos sociales.

Las mujeres indígenas desde diferentes espacios de participación han señalado los siguientes planteamientos.

- *Identificación de necesidades:* donde se realicen encuestas y entrevistas con las mujeres indígenas para entender sus necesidades específicas y los desafíos que enfrentan en contexto de ciudad.
- *Construir alianzas:* Reconocer los Cabildos indígenas, organizaciones locales ONG que realizan trabajo con enfoque diferencial indígena y lideresas comunitarias que trabajan en temas de derechos humanos y protección de mujeres, entre estas la Consejería Distrital de Mujeres Indígenas de Bogotá.
- *Capacitación:* Ofrecer talleres y capacitaciones sobre derechos humanos, prevención de violencia, y habilidades de liderazgo para empoderar a las mujeres indígenas desde su conocimiento de saberes y perspectiva sociocultural.
- *Espacios seguros:* crear espacios seguros donde las mujeres indígenas puedan reunirse, compartir experiencias y recibir apoyo emocional y práctico
- *Acceso a recursos:* facilitar el acceso a recursos legales, educativos y económicos que puedan ayudar a las mujeres indígenas a mejorar sus situaciones diversas en el contexto de ciudad.
- *Promoción de la participación:* fomentar la participación activa de las mujeres indígenas en la toma de decisiones y en la gestión de los servicios prestados por las instituciones.

La red del cuidado colectivo de Mujeres Indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el Distrito Capital sería una iniciativa valiosa en término de reconocimiento y garantía de los derechos, esta red tendría como líneas de acción las siguientes actividades dirigidas a las mujeres indígenas que habitan en Bogotá:

- Sensibilización como una estrategia de cambio en temáticas como violencia y discriminación.
- Diagnósticos participativos en la detección y atención de las violencias propias que sufren las mujeres Indígenas en cualquier curso de vida; que coadyuven a brindar elementos para el diseño de una ruta de atención contra la violencia con enfoque diferencial y que incluya su perspectiva cultural incluyendo sus pensamientos y sistemas de justicia propio.
- Creación de redes de cuidado colectivo basadas en la sororidad y el empoderamiento que apunten al fortalecimiento y articulación de capacidades comunitarias vinculados a las mismas mujeres indígenas como articuladoras profesionales de la red de cuidado colectivo en las manzanas de cuidado.
- Programas de Salud Intercultural desde una atención psicosocial y espiritual que respete y combine prácticas tradicionales y modernas y atención desde las prácticas propias de salud medicina ancestral y partería.
- Implementación de sistema de educación propio e intercultural y promoción de educación de lenguas propias indígenas y español en programas educativos.
- Apoyo Económico y Social desde Iniciativas para mejorar las condiciones económicas y sociales de las mujeres indígenas.
- Conservación Cultural desde los proyectos para preservar y promover la identidad cultural, ambiental y territorial de las mujeres indígenas.
- Participación Ciudadana en el fomento de la movilización activa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones y en la implementación de programas.

Se propone adelantar inicialmente un pilotaje en las Manzanas del Cuidado de Suba, Bosa y Usme para fortalecer la atención de Mujeres indígenas que habitan estos territorios y una vez avanzada la identificación de permanencia y asentamiento de las mujeres de acuerdo a sus pueblos, y de manera progresiva ir sumando a las demás localidades hasta lograr el 100% de cobertura desde un enfoque diferencial étnico.

Por ello se propone la creación de la red del cuidado colectivo de Mujeres Indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el distrito Capital desde un enfoque diferencial Étnico con énfasis en pueblos indígenas que integre las necesidades, costumbres y prácticas de las comunidades en el diseño y funcionamiento de estos espacios. Por lo que se proponen algunos pasos importantes a considerar:

- **Consulta y Participación Comunitaria:** consiste en involucrar a las comunidades indígenas desde el principio. Realizar consultas y talleres participativos para entender sus necesidades, deseos y perspectivas. Es crucial respetar y valorar su conocimiento y experiencias.
- **Diseño Culturalmente Relevante:** Incorpora elementos arquitectónicos y de diseño que reflejen la cultura y las tradiciones indígenas. Esto puede incluir el uso de materiales de arte propio, así como la inclusión de materiales sostenibles.
- **Servicios Adaptados:** Ofrece servicios que respondan a las necesidades específicas de las comunidades indígenas. Esto puede incluir atención en salud intercultural, educación propia, y programas de apoyo económico y social adaptados a su contexto.
- **Espacios de Socialización y Aprendizaje:** Crea áreas para la socialización y el aprendizaje comunitario. Estos espacios pueden ser utilizados para la transmisión de conocimientos tradicionales, talleres de artesanías, actividades culturales y recreativas.
- **Educación y Sensibilización:** Desarrolla programas educativos para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de respetar y valorar la cultura indígena. Esto también incluye la formación de los profesionales que trabajarán en las manzanas del cuidado, asegurando que entiendan y respeten las prácticas y creencias indígenas.
- **Salud y Bienestar:** Integrar servicios de salud que respeten la medicina tradicional indígena, incluyendo la disponibilidad de insumos y la presencia de médicos ancestrales, curanderos sabedoras y parteras de la comunidad.
- **Sostenibilidad:** Asegurar que las manzanas del cuidado sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, algo que es fundamental en los sistemas de conocimiento de las indígenas. Promoviendo prácticas de reciclaje, el uso de energías renovables y la conservación del entorno natural
- **Evaluación y Retroalimentación:** Implementa un sistema de evaluación continua y retroalimentación para asegurar que las necesidades de las mujeres indígenas se estén cumpliendo y que los servicios proporcionados son efectivos y culturalmente apropiados.

Estos elementos aportan a la conformación de una red de cuidado para mujeres, sistema que debe proporcionar asistencia y recursos a aquellas que se dedican al trabajo de cuidado, ya sea de manera remunerada o no remunerada. Las redes buscan reconocer, reducir y redistribuir las responsabilidades de cuidado, las cuales incluyen servicios como orientación legal, apoyo psicológico, y asistencia social. También fomentan el empoderamiento y el bienestar de las cuidadoras a través de diferentes modalidades y programas.

Las redes de cuidado para mujeres se han venido implementando, pero aún se desconoce la experiencia con mujeres indígenas por lo que crear la red de cuidado colectivo para mujeres indígenas es una propuesta innovadora e incluyente.

En Colombia existe la experiencia exitosa con mujeres indígenas en la conformación de la Red Nacional Interétnica de Mujeres para la Defensa del Medio Ambiente en Colombia, que moviliza la agenda pública en torno al cuidado del medio ambiente, la equidad de género y la construcción de paz, posicionando a las mujeres indígenas como actores del cambio social.

Reiterando que en América Latina han surgido como una respuesta a la necesidad de reconocer, redistribuir y reducir la carga del trabajo de cuidado, que históricamente ha recaído desproporcionadamente sobre las mujeres. Estas redes buscan generar un cambio estructural que promueva la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y las familias. Países como Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina ya han adelantado la implementación de estas redes del cuidado

País	Experiencia de Red de Cuidado

Uruguay	En 2015, se creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) que se enfoca en la primera infancia, las personas mayores y aquellas con discapacidades. Combina iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil para proporcionar cuidados integrales.
Costa Rica	Articuló una red que combina iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil, enfocándose en los sectores con menos recursos. Mejora el acceso a los servicios de cuidado y reduce la carga sobre las cuidadoras.
Chile	Ha ampliado los cuidados preescolares, proporcionando más apoyo a las familias y reduciendo la carga de cuidado sobre las mujeres.
Argentina	Anunció recientemente un proyecto de ley para expandir los servicios de cuidado, mejorando la calidad de vida de las cuidadoras y beneficiando a las familias.

Fuente: Construcción Propia

Retomando estas experiencias y elementos se puede incorporar red de cuidado a mujeres indígenas en las manzanas del cuidado para la ciudad de Bogotá con una perspectiva de respeto a la riqueza cultural de las comunidades.

4. SUSTENTO JURÍDICO

Normativa Nacional

Constitución Política de Colombia

- **Artículo 7** de la Constitución reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
- **Artículo 13** garantiza la igualdad ante la ley y la protección especial de grupos vulnerables, como las mujeres y los pueblos indígenas.
- **Artículo 43** protege los derechos de las mujeres y fomenta medidas contra la discriminación de género. Además, el artículo 330 reconoce la autonomía de las comunidades indígenas sobre sus territorios y el derecho a ser consultados en temas que les afecten.

Leyes

- **Ley 1257 de 2008:** Esta ley busca garantizar la protección integral a las mujeres contra todo tipo de violencia. Aplica un enfoque diferencial, considerando a las mujeres en situación de vulnerabilidad, incluidas las indígenas.
- **Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras:** Reconocer y reparar los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. (Las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado tienen prioridad en los procesos de atención, reparación y restitución de derechos).
- **Ley 2126 de 2021 Regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia** (Mejora los mecanismos de atención para prevenir, proteger y atender casos de violencia intrafamiliar y violencia de género.
- **Ley 70 de 1993:** Reconoce los derechos de las comunidades negras e indígenas y busca garantizar su acceso a recursos y protección especial del Estado.
- **Convenio 169 de la OIT:** Protocolo internacional que Colombia ha suscrito, el cual garantiza los derechos de los pueblos indígenas y tribales, promoviendo su participación en la toma de decisiones que les afecten.
- **Decreto 4635 de 2011:** Protección integral de los derechos de las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado, en donde el Estado debe garantizar la reparación y protección de sus derechos.

Jurisprudencia

- **Sentencia T-025 de 2004:** La Corte Constitucional reconoce la vulnerabilidad especial de los pueblos indígenas y establece la necesidad de políticas públicas que protejan sus derechos de forma efectiva.
- **El Auto 092 de 2008:** el cual establece la protección y atención a las mujeres en situación de desplazamiento forzado, así como referenciar el marco jurisprudencial de protección los derechos de las mujeres indígenas en el marco de las violencias basadas en género
- **La Sentencia SU-091/23:** señala que resulta necesario vincular el marco jurídico de protección para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, el cual está contemplado en los artículos 13, 43 y 246 de la Constitución Política, la Convención Interamericana de Belem Do Pará para “Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer” (Ley 248 de 1995) y el Convenio 169 de la OIT, la Ley 1257 de 2008, y tratados internacionales a favor de la protección y garantía de los Derechos de las mujeres, así como en la jurisprudencia.

Normativa Distrital

- **Política Pública de los Pueblos Indígenas CONPES DC 37 (2024-2035)** Define objetivos y lineamientos para los pueblos indígenas en Bogotá.
- **Acuerdo 245 de 2006:** Establece lineamientos para la implementación de políticas públicas con enfoque diferencial para poblaciones vulnerables en el Distrito Capital, incluidas las mujeres y las comunidades indígenas.
- **Acuerdo 711 de 2018:** Define la política pública para la igualdad de género en Bogotá y promueve el respeto y la protección de los derechos de las mujeres en la ciudad, con especial atención a grupos vulnerables.
- **Decreto 612 de 2015 Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá:** Crea este Consejo, que incluye la articulación con la Consejería Distrital de Mujeres Indígenas.
- **Decreto Distrital 304 de 2023 Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá:** Modifica los artículos sobre la composición y funciones de este Consejo, reconociendo la representación de mujeres indígenas.
- **Acuerdo 676 de 2017:** Establece lineamientos para prevenir violencia basada en género en Bogotá.
- **Acuerdo 421 de 2009 y Acuerdo 703 de 2018:** Crean y actualizan el Sistema de Protección Integral para Mujeres Víctimas de Violencias (SOFIA).
- **Resolución 314 de 2022:** Define principios de la Estrategia de Justicia de Género para atención psicosocial y jurídica a mujeres.

Todas estas normas son instrumentos que permitirán la aplicación de enfoque de género y diferencial que conlleve a avanzar hacia la protección y armonización, con las costumbres indígenas y los derechos de las mujeres, logrando garantizar que las políticas y marcos legales apoyen la inclusión y protección de las mujeres indígenas en el desarrollo de las manzanas del cuidado.

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO.

El Concejo de Bogotá, en el marco de su competencia constitucional y legal, tiene la facultad de dictar normas que promuevan la protección del patrimonio cultural y la diversidad étnica, conforme a los artículos 322, 323 y 324 de la Constitución Política de Colombia, y el Decreto 1421 de 1993, que establece el régimen especial para Bogotá.

El Concejo de Bogotá puede adoptar medidas de promoción cultural, fortalecer el acceso a la cultura para todos los ciudadanos y garantizar la preservación de los patrimonios culturales inmateriales, en concordancia con los Acuerdos Distritales y la Ley General de Cultura.

En este orden de ideas este proyecto de acuerdo busca reconocer el fortalecimiento de la participación e incidencia desde un enfoque de género de las mujeres Indígenas que habitan la ciudad de Bogotá, y el reconocimiento de los derechos y la

garantía a una vida libre de violencias garantizando que la oferta institucional llegue a todas las mujeres indígenas de la ciudad como una medida de efectividad de políticas de protección.

6. IMPACTO FISCAL.

La implementación, desarrollo y ejecución de esta iniciativa no generará ningún impacto fiscal, dado que se realizará utilizando los recursos existentes de las distintas secretarías distritales, como la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Gobierno, secretaría de salud, secretaría de educación, secretaría de cultura y la Secretaría de Integración Social. Se optimizarán los diferentes programas y proyectos ya implementados, como las casas de igualdad de oportunidades y los servicios de salud diferencial, sin necesidad de crear nuevas estructuras administrativas o asignar nuevos recursos financieros.

El enfoque será diferencial y con respeto a la autonomía cultural, promoviendo la participación activa de las comunidades en la identificación de necesidades y soluciones. No se requiere la creación de nuevos gastos, ya que se aprovecharán los recursos y programas distritales vigentes, optimizando su impacto en las mujeres indígenas.

7. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA.

Esta iniciativa responde a la necesidad de generar mecanismos de protección para las mujeres indígenas, quienes por su doble condición de vulnerabilidad de género y pertenencia a grupo étnico, enfrentan riesgos especiales. por consiguiente La red de apoyo permitirá:

- Articulación interinstitucional y comunitaria para generar soluciones efectivas.
- Fortalecimiento de la autonomía de las mujeres indígenas en sus decisiones.
- Protección efectiva de sus derechos a través de programas distritales ya existentes.
- Respeto a los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución y las normas internacionales.

Será una muestra de voluntad y de garantía de derechos por parte de la administración distrital en la aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena y el ejercicio del derecho propio. Garantizando los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de la infancia, las mujeres y las mayores, previniendo daños como la revictimización, discriminación, fragmentación de las dinámicas colectivas y daños espirituales que no son reparados por la institucionalidad.

Este proyecto se sustenta en el uso eficiente de los recursos existentes en el Distrito Capital, como los espacios físicos, programas institucionales y recursos humanos, evitando así impactos fiscales adicionales. Para garantizar su sostenibilidad y efectividad, se propone la creación de alianzas estratégicas con actores claves, incluyendo organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, y líderes y lideresas comunitarias. Estas alianzas permitirán una articulación efectiva entre los saberes tradicionales y las herramientas modernas de gestión pública, promoviendo un enfoque comunitario que priorice el empoderamiento de las mujeres indígenas como agentes de cambio dentro de sus comunidades y la ciudad.

TÍTULO - ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS: Título: “Por medio del cual se crea la red del cuidado colectivo de mujeres indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el distrito capital”.

Autor

Atentamente

OSCAR FERNANDO BASTIDAS JACANAMIJOY

Concejal de Bogotá D.C.

Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS

PROYECTO DE ACUERDO NO 698 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA RED DEL CUIDADO COLECTIVO DE MUJERES INDÍGENAS VINCULADAS A LAS MANZANAS DE CUIDADO EN EL DISTRITO CAPITAL”****ATRIBUCIONES**

El Concejo de Bogotá, Distrito Capital, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 43 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1257 de 2008 y demás normas concordantes, dicta el siguiente Acuerdo.

CONSIDERANDOS

1. **Que el artículo 43 de la Constitución Política de Colombia** establece que el Estado garantiza a la mujer, en especial a la cabeza de familia, protección especial durante el embarazo y después del parto, así como la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
2. **Que la Ley 1257 de 2008** consagra medidas para la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y establece obligaciones del Estado para proporcionar asistencia y protección integral a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
3. **Que los pueblos indígenas del Distrito Capital** constituyen una población históricamente vulnerable, cuyas mujeres enfrentan múltiples formas de discriminación, violencia y exclusión, lo que exige la implementación de mecanismos específicos de apoyo que respondan a sus necesidades culturales, sociales y económicas.
4. **Que la Secretaria de la Mujer, Secretaría de Integración Social y otras entidades del Distrito** ya cuentan con servicios sociales, psicológicos y legales y comunitarios que pueden ser adaptados e integrados para atender las particularidades de las mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad sin generar un impacto fiscal adicional.

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. Crear la red del cuidado colectivo de mujeres indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el distrito capital, con el fin de brindarles acceso integral a servicios promocionales, preventivos y resolutivos enmarcados en apoyo psicológico, legal y social, garantizando su seguridad, bienestar y desarrollo integral en el marco del respeto por su identidad cultural.

Parágrafo 1. Para la creación de la red del cuidado colectivo para mujeres indígenas deberá garantizarse la participación, diálogo y concertación con las comunidades y mujeres indígenas garantizando la corresponsabilidad de las entidades y comunidades.

Parágrafo 2. La implementación de la red del cuidado colectivo de mujeres indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el distrito capital se desarrollará una vez se apruebe el presente proyecto de acuerdo con un pilotaje inicial y llegará al 100% finalizando al 2026, teniendo en cuenta la territorialización de las mujeres indígenas en Bogotá.

Artículo 2. Constitución de la Red del cuidado colectivo de Mujeres Indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el distrito Capital. La red estará conformada por puntos de atención ubicados en centros comunitarios y espacios ya existentes, que serán habilitados y adaptados por la Secretaría de la mujer, secretaria Integración Social, Secretarías de Salud, la Defensoría del Pueblo entre otras entidades distritales vinculadas a la Manzanas de Cuidado. En

dichos puntos, las mujeres indígenas podrán recibir atención diferencial psicológica, asesoría legal y acompañamiento social.

Parágrafo. La atención en estos puntos será llevada a cabo por profesionales especializados y mujeres indígenas que hayan recibido formación en acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica, quienes fungirán como líderes y facilitadoras del proceso.

Artículo 3. Funciones de la Red del cuidado colectivo de Mujeres Indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el distrito Capital. Las principales funciones de la Red de Apoyo serán las siguientes:

1. Brindar acompañamiento psicosocial a mujeres indígenas víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad.
2. Facilitar la asesoría jurídica en casos de violencia, discriminación y violación de derechos fundamentales.
3. Coordinar con instituciones de salud, justicia, educación, cultura para el acceso efectivo a derechos y servicios de protección.
4. Promover la articulación con otras entidades públicas y privadas que ofrezcan apoyo a mujeres indígenas.
5. Demás que por su objeto de atención y focalización puedan brindar a las mujeres Indígenas

Artículo 4. Coordinación Interinstitucional desde la Secretaría Distrital de la Mujer. La Red del cuidado colectivo de Mujeres Indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el distrito Capital funcionará en coordinación con la Secretaría de la mujer, secretaria Integración Social, Secretarías de Salud, la Defensoría del Pueblo, y otras entidades distritales, para garantizar la provisión de servicios y recursos ya existentes sin implicar costos adicionales al Distrito.

Artículo 5. Capacitación y Sensibilización. La Secretaría de la Mujer, en conjunto con la Secretaría de Gobierno y organizaciones indígenas, desarrollará programas de formación y sensibilización para el personal encargado de la atención en la Red, a fin de garantizar una atención adecuada desde un enfoque diferencial Indígena que reconozca la diversidad cultural y la situación particular de las mujeres indígenas.

Artículo 6. Creación e implementación de un protocolo Específico. La Secretaría de la mujer, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Salud, secretaria de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, Personería y otras entidades distritales establecerán un protocolo específico para la atención y acompañamiento de mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad, garantizando el respeto por sus prácticas culturales y derechos fundamentales.

Artículo 7. Reportes. La Secretaría de la mujer en articulación con la Secretaría de Integración Social, Secretaría de Salud, secretaria de Gobierno y otras entidades distritales perteneciente a la manzana del cuidado presentarán un solo informe inicial al momento de la creación de la red del cuidado colectivo de Mujeres Indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el distrito Capital de la que y el uso de recursos publicado por medio de la página web de la Secretaría de la Mujer y radicado a la corporación. Reportes trimestrales. Este artículo tiene como objetivo garantizar la transparencia y el seguimiento mediante la presentación regular de informes y reportes.

Parágrafo. El servicio prestado por la Red del cuidado colectivo de Mujeres Indígenas vinculadas a las manzanas de cuidado en el distrito Capital será implementada con los recursos humanos, técnicos y materiales ya disponibles en las entidades distritales Secretaría de la mujer, secretaria Integración Social, Secretaría de Salud, la Defensoría del Pueblo entre otras entidades distritales vinculadas a la Manzanas de Cuidado.

Artículo 8. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 699 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYE EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UNA COMISARÍA DE FAMILIA ESPECIALIZADA PARA LOS ASUNTOS INDÍGENAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**I. OBJETO DEL PROYECTO**

La presente iniciativa tiene por objeto incluir el enfoque diferencial en el rediseño institucional de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el fin de crear la Comisaría de Familia especializada con enfoque diferencial, para brindar atención especializada e interdisciplinaria para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y/o víctimas de otras violencias en el contexto familiar, según lo establecido en Ley 2126 de 2021.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA**• DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

ARTÍCULO 7. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”.

ARTÍCULO 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

ARTÍCULO 10: “(...) Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.”

ARTÍCULO 13. “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”

ARTÍCULO 70. “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades (...) La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el país (...)”

ARTÍCULO 246. “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”

ARTÍCULO 329. “La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con

participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.”

ARTÍCULO 330: “De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades.”

ARTÍCULO 42. “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progeneración responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.”

ARTÍCULO 43. “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.”

ARTÍCULO 44. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”

ARTÍCULO 45. “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.”

- **TRATADOS INTERNACIONALES**

CONVENIO 169 DE LA OIT 1989. RATIFICADO A TRAVÉS DE LA LEY 21 DE 1991. En ella el Estado colombiano acepta: “a) Reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y

espirituales propios de dichos pueblos para lo cual deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente b) Respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) Adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2007. La Declaración estableció una norma esencial para eliminar las violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas en todo el mundo, para combatir la discriminación y la marginación, y para defender la protección de medios de subsistencia indígenas. “*Artículo 2: Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos.*”

• **NORMATIVIDAD DEL ORDEN NACIONAL**

LEY 89 DE 1890: Esta norma establece los resguardos y fija parámetros claros para la defensa de las comunidades indígenas: estabilidad en cuanto a la propiedad de sus tierras, vida legal a los cabildos como entes relativamente autónomos representativos de las comunidades. “*Art. 3: En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres.*”

LEY 16 DE 1972. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Esta ley representa una fuente normativa y una herramienta jurídica que orienta y respalda la formulación e implementación de políticas públicas que reconozcan y protejan los derechos de los grupos étnicos en Colombia. Al aprobar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Colombia se compromete a cumplir con las obligaciones derivadas de la misma, tales como respetar, proteger y realizar los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todas las personas, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

LEY 22 DE 1981. “Por medio de la cual se aprueba "La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 (XX) del 21 de diciembre de 1965, y abierta a y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966.”

LEY 21 DE 1991. “Aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.”

DECRETO 1088 DE 1993. “Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.”

LEY 270 DE 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia. la cual en su artículo 12 dispone: “ (...) Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley ejercen sus funciones Jurisdiccionales únicamente

dentro del ámbito de su territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos, los cuales no podrán ser contrarios a la Constitución y a las Leyes. Estas últimas establecerán las autoridades que ejercen el control de constitucionalidad y legalidad de los actos proferidos por las autoridades de los territorios indígenas (...)"

DECRETO 1320 DE 1998. Reglamenta la Consulta Previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.

LEY 1381 DE 2010. “Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.”

LEY 1482 DE 2011. “Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones. Esta ley penaliza los actos de discriminación en Colombia. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, el Estado colombiano modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones relacionadas con tratos discriminatorios. (Senado, 2023).”

LEY 1448 DE 2011. “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición.

DECRETO-LEY 4633 DE 2011. “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.”

DECRETO 4100 DE 2011. Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se modifica la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se dictan otras disposiciones. Este sistema busca articular y coordinar las normas, las políticas, las entidades y las instancias del orden nacional y territorial que tienen competencia en estas materias. Establece que el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario debe tener en cuenta el enfoque diferencial étnico, que implica reconocer la diversidad cultural, la identidad, las tradiciones, las costumbres, las formas de organización social, política y económica, y las necesidades específicas de los grupos étnicos.

DECRETO 1953 DE 2014. “Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política.”

LEY 2126 DE 2021. “Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarias de Familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones. *Artículo 5.* Los comisarios y comisarias de familia serán competentes para conocer la violencia en el contexto familiar que, para los efectos de esta ley, comprende toda acción u omisión que pueda causar o resulte en daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión que se comete por uno

o más miembros del núcleo familiar, contra uno o más integrantes del mismo, aunque no convivan bajo el mismo techo. También serán competentes cuando las anteriores conductas se cometan entre las siguientes personas: a. Las y los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado. b. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor o progenitora. c. Las Personas encargadas del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta, que no sean parte del núcleo familiar, y de los integrantes de la familia. d. Personas que residan en el mismo hogar o integren la unidad doméstica sin relación de parentesco. e. Personas con las que se sostiene o se haya sostenido una relación de pareja, cohabitacional o no, de carácter permanente que se caracterice por una clara e inequívoca vocación de estabilidad.”

LEY 2294 DE 2023. "Por medio de la cual se expide el plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: “Colombia potencia mundial de la vida”, en su artículo 203, que hace referencia al Sistema Nacional de Justicia, establece en el parágrafo primero que: “ (...) Con el fin de asegurar el tránsito institucional hacia la estructuración del Sistema Nacional de Justicia Familiar, el parágrafo 1 del artículo 5 y el artículo 44 de la Ley 2126 de 2021, entrarán a regir a partir del 1 de julio de 2024”

• JURISPRUDENCIA Y FALLOS JUDICIALES

SENTENCIA NO. C-139/96 JURISDICCIÓN INDÍGENA- Elementos “El análisis del artículo 246 muestra los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas -que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de “normas y procedimientos”-, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional. En la misma estructura del artículo 246, entonces, está presente el conflicto valorativo entre diversidad y unidad.”

AUTO 004 DE 2009: “Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04.”

SENTENCIA T-129/11 DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL “Es amplia y reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en distintos contextos ha protegido a las comunidades indígenas del país. El referido precedente se ha edificado en los principios fundamentales de la Carta Política contemplados en el artículo séptimo, referente a la protección de minorías raciales y culturales, el cual establece que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. De ese artículo se extraen elementos esenciales como el reconocimiento estatal y la protección a la diversidad étnica y racial. Así, la Carta Política, sobre la base de los principios de dignidad humana y pluralismo, reconoce un estatus especial de protección con derechos y prerrogativas específicas a las comunidades étnicas para que bajo sus usos y costumbres hagan parte de la Nación. De otra parte, la diversidad cultural está relacionada con las representaciones de vida y concepciones del mundo que la mayoría de las veces no son sincrónicas con las costumbres dominantes o el arquetipo mayoritario en la organización política, social, económica, productiva

o incluso de religión, raza, lengua, etc. Lo cual refuerza la necesidad de protección del Estado sobre la base de la protección a la multiculturalidad y a las minorías.”

SENTENCIA T-921/13 ELEMENTOS DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA-TERRITORIAL, PERSONAL, INSTITUCIONAL Y OBJETIVO “Puede reconocerse la existencia de cuatro (4) principios (i) a mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía; (ii) los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares; (iii) las normas legales imperativas (de orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural y; (iv) los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas.”

SENTENCIA T-425/14 INDÍGENAS URBANOS “Es importante resaltar que, siempre que pueda hacerse una plena identificación de tales comunidades, a partir de los parámetros establecidos en este acápite y de la diversidad étnica y cultural reconocidos en el texto superior, los indígenas que se encuentran en los centros urbanos tienen a su favor, tanto como los que permanecen en áreas rurales cercanas a su origen, los derechos al autogobierno, a la supervivencia cultural, a la educación, la salud propia, la administración propia de justicia, la participación política, y, en general, a la especial protección del Estado, lo cual debe estar encaminado a través de una política pública en la cual se involucren todos los sectores interesados.”

SENTENCIA T-642/14 JURISDICCIÓN INDÍGENA-COMPETENCIA «El Constituyente de 1991, estableció la existencia de una jurisdicción especial indígena, que habilita a estos pueblos a ejercer funciones judiciales. La posibilidad de que los pueblos indígenas cuenten con una jurisdicción especial, también ha sido reconocida por el artículo 9º del Convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, y señala que “en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”.»

SENTENCIA SU-123 DE 2018. Señaló que el grado de participación depende del nivel de afectación, tal y como se explica. Cuando la medida no afecte directamente al pueblo étnico: “La participación corresponderá al estándar de intervención básico que se relaciona con la inclusión de las comunidades en los órganos decisorios nacionales o la mediación de sus organizaciones en cualquier escenario que les interese. Cuando la medida sea susceptible de afectación directa al pueblo étnico: “Se aplican todas las reglas de deliberación con las comunidades tradicionales, conforme al derecho a la consulta previa y con el propósito genuino de llegar a un acuerdo. Cuando se presenta una afectación directa intensa y la medida amenace la subsistencia de la comunidad tradicional: “En principio, la ejecución de la medida requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades tradicionales y en caso de no llegar a un acuerdo, prevalecerá la protección de las comunidades tradicionales” Se aplica excepcionalmente en tres casos: “(i) Traslado o reubicación del pueblo indígena o tribal de su lugar de asentamiento; (ii) el almacenamiento o depósito de materiales peligrosos o tóxicos en sus territorios; (iii) medidas que impliquen un alto impacto social, cultural y ambiental que pone en riesgo su subsistencia”.

- **NORMATIVIDAD DE ORDEN DISTRITAL:**

ACUERDO 359 DE 2009. "Por el cual se establecen los lineamientos de política pública para los indígenas en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones."

DECRETO 612 DE 2015: "Por el cual se crea el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C." "Creación: Créase el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C., como un espacio de diálogo e interlocución permanente entre la Administración Distrital y los Pueblos Indígenas para garantizar el goce efectivo de sus derechos y el mejoramiento de sus condiciones de vida en el marco del principio del Buen Vivir. Artículo 2°- Objeto: El Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C. tendrá por objeto apoyar la orientación y concertación de las acciones requeridas o derivadas del proceso de implementación y seguimiento de la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C.; del Plan Integral de Acciones Afirmativas y de todas las decisiones administrativas susceptibles de afectarlos."

CONPES (Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital) No.37- Política Pública de los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C., 2024 al 2035.

III. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

• Antecedentes

El Distrito Capital ha sido receptor histórico de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en condición de desplazamiento por causa del conflicto armado y la búsqueda de oportunidades para el mejoramiento de su calidad de vida, en el marco de la garantía de sus derechos sociales, económicos y culturales. En tal sentido, los Pueblos Indígenas se enfrentan a la ruptura en el relacionamiento con sus territorios de origen, tradiciones, usos, costumbres y conocimientos ancestrales, lo cual afecta su pervivencia física y cultural.

En este marco, el *enfoque Diferencial Étnico*, es el punto de partida para la implementación de instrumentos que garanticen la territorialización efectiva de las Políticas Públicas Étnicas y la atención en la garantía de derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas.

Por lo anterior, se hace necesario definirlo desde la diversidad, con una mirada que permita comprender la discriminación y la exclusión social en la ciudad de Bogotá, y que con ello se consoliden acciones que transformen la realidad de los pueblos y comunidades étnicas desde la equidad, así como el reconocimiento de los diálogos interculturales, logrando una perspectiva de Bogotá pluriétnica y multicultural.

Para esto, es necesario la comprensión del enfoque diferencial, como la perspectiva de identificación y de análisis que permita, no solo obtener información, sino también, garantizar sobre los grupos poblacionales con características particulares en razón de su edad o etapa de ciclo vital, género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, y discapacidad, entre otras características, para promover la visibilización de situaciones de vida particulares y brechas existentes y, de esta manera, guiar la toma de decisiones públicas y privadas (adaptado de la Ley 1448 de 2011)

Los enfoques se deben materializar para garantizar el goce efectivo de los derechos expresos en la Constitución Política de 1991, a través de la cual se define a Colombia como un Estado Social de Derecho, Democrático, Participativo y Pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación Colombiana.

Así mismo, la Corte Constitucional ha identificado las imperfecciones a la hora de formular, implementar y hacer seguimiento en las políticas públicas y la inclusión del enfoque diferencial, la garantía, la protección de los derechos de los grupos étnicos.

Por lo mismo es importante mencionar el **Auto 382 de 2010**:

(...)

“Que de acuerdo con auto 218 de 2006, la Corte constató al hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004, que el gobierno no había avanzado en la implementación de un enfoque diferencial para la protección y garantía de derechos de los grupos étnicos, ordenado por la sentencia. En esta oportunidad la Corte advirtió que el impacto del conflicto armado en comunidades indígenas y afrodescendientes es proporcionalmente mayor frente al nivel del desplazamiento en general del país, durante el año 2006. También resaltó que esta población ha sufrido hostigamientos, asesinatos, reclutamiento forzado, combates en sus territorios, desaparición de líderes y autoridades tradicionales, bloqueos, órdenes de desalojo, fumigaciones, etc., hechos que constituyeron las causas del desplazamiento. En dicho pronunciamiento la Corte dimensionó la gravedad de la violación de los derechos constitucionales específicos para estas comunidades, refiriéndose particularmente a los derechos colectivos a la integridad cultural y al territorio. Con base en el resultado de este análisis, en el auto 218 de 2006, la Corte señaló la necesidad de diseñar e implementar un enfoque diferencial específico, que reconociera que el desplazamiento surte efectos distintos dependiendo de la edad, el género, el origen étnico, la capacidad física o mental”.

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación definió unos lineamientos para la implementación del enfoque de derechos y la atención diferencial a Grupos Étnicos en la gestión de las entidades territoriales, a través de la inclusión del Enfoque de Derechos para la Atención Diferencial. El lineamiento define el Enfoque Étnico Diferencial como una perspectiva integrada de análisis, reconocimiento, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los grupos étnicos existentes en el país, haciendo énfasis en la igualdad de oportunidades desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación. Por tanto, el Departamento Nacional de Planeación sugiere que el gobierno territorial debe:

- a) *Verificar y proveer los medios para que los grupos étnicos tengan representación en el Consejo Territorial de Planeación de la entidad territorial, así como en otros espacios de planificación.*
- b) *Incluir el enfoque diferencial étnico en directrices, procedimientos, instrumentos y formatos que se utilicen en el proceso de planeación, lo que permitirá la producción de herramientas fundamentadas en el enfoque diferencial étnico.*
- c) *Gestionar y programar recursos para la atención integral de necesidades de los grupos étnicos.*

En esta misma línea, el DNP³⁶, presenta un documento donde recalca la importancia de la inclusión de la variable étnica y el enfoque diferencial en la formulación e implementación de planes, políticas a nivel nacional y territorial. Además, precisa que no se debe perder de vista las diferencias entre sujetos de derechos y niveles de vulnerabilidad también diferenciados; estas variables orientan el gasto público para la inclusión poblacional de los grupos étnicos, sujetos de especial protección constitucional.

³⁶ Guía para la incorporación de la variable étnica y el enfoque diferencial en la formulación e implementación de planes y políticas a nivel nacional y territorial – Departamento Nacional de Planeación 2012

También presentan los principios para la incorporación de la dimensión o variable étnica en planes, proyectos, procedimientos, instrumentos y formatos de las entidades públicas:

- ♦ **Derechos:** *A la participación y la consulta previa Como derecho de los grupos étnicos.*
- ♦ **Inclusión:** *Incorporación de las aspiraciones de los grupos étnicos en acciones concretas de política, planes o proyectos.*
- ♦ **Compromiso institucional:** *Concretar acciones con las entidades.*
- ♦ **Acceso:** *Brindar las garantías con dificultades de participación.*
- ♦ **Coherencia:** *en el caso que se amerite la consulta previa con los grupos étnicos.*
- ♦ **Acción coordinada:** *Las acciones y su ejecución deben llegar a todos los niveles de ejecución – nacional, regional y local.*
- ♦ **Sistémico:** *Los impactos se deben identificar en el mediano y largo plazo, por lo que es esencial el principio sistémico.*

Sumado a lo anterior, el Acuerdo 878 de 2023, a través del cual se dictan los “Lineamientos para el Sistema Distrital de Planeación, la creación de planes de desarrollo y se garantiza la participación ciudadana en el Distrito Capital”, establece la *Diversidad Étnica y Cultural*, dentro de sus principios generales, lo cual demanda que las actuaciones de las autoridades e instancias distritales, tanto en términos de planeación como en la participación, reconozcan y protejan la diversidad étnica y cultural del Distrito Capital, así mismo se garantice su vinculación en todos los procesos que de este se deriven.

Así mismo, es necesario contemplar la *metodología de análisis interseccional*, la cual se encuentra encaminada a esclarecer la situación de opresión o privilegio de una persona o grupo de personas en razón a su pertenencia a múltiples categorías sociales y la interacción entre éstas. Por ello, una vez abordado el concepto de enfoque diferencial, es preciso hablar de interseccionalidad, la cual involucra la implementación de los enfoques diferenciales de manera conjunta, así como de otras categorías diferenciales que pueden agravar la situación de exclusión o discriminación de una persona. Entre otras, su nivel económico, nivel de educación, opinión política y ubicación geográfica (enfoque territorial).

En este marco, se hace necesaria una intervención integral que coincida con mecanismos e instrumentos que garanticen respuestas efectivas en la garantía y progresividad de los derechos.

● IDENTIFICACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BOGOTÁ.

A continuación, se presenta información estadística sobre la densidad poblacional de los Pueblos Indígenas en Bogotá, con base en la *Encuesta Multipropósito de Bogotá - Cundinamarca de 2021*, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Según esta Encuesta, 131.548 personas se auto- reconocen como parte de un grupo étnico en la zona urbana, de los cuales, 76.968 personas se identifican como miembros de un Pueblo Indígena.

En este marco, iniciamos con el *Pueblo Muisca*, el cual se encuentra ubicado principalmente en las localidades de Bosa y Suba. Este Pueblo es originario del territorio de Bogotá y se encuentra en un proceso de fortalecimiento y salvaguarda de su identidad cultural, a través de la implementación de sus Planes de Vida. A lo largo de la historia ha sufrido el impacto de la colonialidad y los cambios que se han originado en sus territorios, a raíz de las dinámicas de urbanización, lo que ha causado la atomización de las familias y la migración a otros sectores de la ciudad. Así mismo, se encuentran avanzando en la revitalización de su lengua propia el Muyscubun” (Ficha de caracterización y censo Cabildos Indígenas Muisca de Bosa y Suba, 2023).

El *Pueblo Inga* es originario de Santiago, Putumayo. La llegada de población indígena Inga a la ciudad de Bogotá ha sido ocasionada por múltiples procesos que han conducido a la pérdida de los territorios ancestrales, el resquebrajamiento cultural en algunos casos, y en otros, la resignificación simbólica. (Ficha de caracterización y censo Cabildo Indígena Inga, 2023).

El *Pueblo Kamëntšá Biyá* proviene del departamento del Putumayo; Municipio de Sibundoy - Tabanokëng. La migración a Bogotá, es frecuente y continua, especialmente los dos (2) primeros meses de cada año e igual a mitad de año por razones de estudio y trabajo. (Ficha de caracterización y censo Cabildo Indígena Kamentsá, 2023).

El *Pueblo Pijao* que hace parte del Cabildo Ambiká y es originario de los municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega, Chaparral, Purificación y Prado del departamento del Tolima. Su proceso de ubicación en Bogotá inicia en la década de 1990 motivada por la violencia del conflicto armado en su territorio de origen y por la búsqueda de oportunidades laborales y educativas ante la falta de garantía de sus derechos fundamentales. (Ficha de caracterización y censo Cabildo Indígena Ambiká Pijao, 2023).

El *Pueblo Eperara Siapidara* tiene su territorio de origen en los municipios de Timbiquí, López de Micayy Guapi en el departamento del Cauca, en los que se halla el resguardo de Guanguí que acoge a las comunidades de San Francisco, Peñatigre, Agua Clarita y Angostura. Como resultado de las amenazas, hostigamientos a las autoridades, desaparecimientos de algunos comuneros y reclutamiento de los jóvenes” (SDG, 2023, p.34) motivaron un pico migratorio hacia la ciudad de Bogotá en el año 2008. (Ficha de caracterización y censo Cabildo Eperara, 2023).

El *Pueblo Wounaan Nonam*, este tiene su territorio ancestral en los municipios de Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca) donde se ubican los resguardos de San Antonio de Togoroma, Puerto Pizario, Papayo, Burujón, Guarataco, San Bernardo, Chachajo, Pichima Quebrada, Unión Basalito, Taparalito, Playa Linda, Buenavista, Pitalito Bajo Baudo, Chintado, Chappien y Pangala. (Ficha de caracterización y censo Cabildo Indígena Wounaan Nonam, 2023).

El *Pueblo Nasa*, que es originario de los municipios de Páez, Insá, Popayán y otros municipios del norte del departamento del Cauca, inició su proceso de desplazamiento hacia Bogotá como consecuencia de una combinación de factores entre los que se cuenta su victimización y el desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado vivido en su territorio de origen, así como la búsqueda de oportunidades de estudio para sus miembros. (Ficha de caracterización y censo Cabildo Indígena Nasa, 2023).

El *Pueblo Yanacona*, es un pueblo originario de los municipios de La Vega, San Sebastián, Sotará, Santa Rosa y Palestina en los departamentos del Cauca y Huila. En dichos municipios se ubican los resguardos indígenas de Rioblanco, Guachicono, San Sebastián, Pencitara, Yakuas, Snata Bárbara y Descanse. (Ficha de caracterización y censo Cabildo Indígena Yanacona, 2023).

El *Pueblo Misak- Misak*, es originario mayoritariamente del municipio de Silvia en el departamento del Cauca. Debido a la violencia de grupos armados, a “la extrema estrechez territorial” (SDG, 2023, p.32) y a fenómenos de desplazamiento forzado en su territorio ancestral, se inició un proceso de migración hacia Bogotá. (Ficha de caracterización y censo Cabildo Indígena Misak- Misak, 2023).

La *Comunidad Tubú Hummurimassá* pertenece al Pueblo Siriano (también conocido como Cimga, Chiranga, Si-Ra y sura Masa) está “ubicado en el Gran Resguardo del Vaupés parte oriental” (SDG, 2023, p.41). (Ficha de caracterización y censo Cabildo Indígena Tubu, 2023).

El *Pueblo de los Pastos*, es originario del sur del departamento de Nariño, especialmente de los municipios: Piedrancha, Cumbal, Guachucal, Aldana, Ipiales, Guachavez, Tuquerres, Córdoba, Potosi, Funes. Los resguardos o cabildos donde provienen son Cumbal, Chiles, Panan, Ipiales, Pastas, Muellamues, Guachucal, Guachavez, Carlosama, Gran Mallama, Tuquerres, Puerres, Males, Muses, Colimba, Funes, Yascual. (Ficha de caracterización y censo Cabildo Indígena Los Pastos, 2023).

El *Pueblo indígena Uitoto Murui – Muina*, denominados hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, debido a que son personas de centro. Los mayores relacionan que el origen es el kom+mafo (hueco de la creación) ubicado en el corregimiento de la chorrera del resguardo predio putumayo en el departamento del Amazonas. Proviene de los departamentos de Caquetá-Putumayo y Amazonas. Provenientes del resguardo Indígena predio Putumayo (departamento del Amazonas), Caquetá y Putumayo. (Ficha de caracterización y censo Cabildo Indígena Uitoto, 2023).

Finalmente, el *Pueblo Kichwa* tiene su territorio ancestral en la provincia de Imbabura ubicada en la república del Ecuador. Su presencia en tiempos recientes inicia en las décadas de 1920 y 1940, con unos picos migratorios entre principios de la década de 1970 y finales de la década de 1990. (Ficha de caracterización y censo Cabildo Indígena Kichwa, 2023).

• LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Según la Ley 1448 de 2011, “Por el cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” y en su Art.1, “...tiene como objeto establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de violaciones contempladas, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”. Así también, según el Art. 13 “...El Estado ofrecerá garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la Ley en mención, tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad, personas campesinas... miembros de grupos étnicos (indígenas, afro, raizales, palenqueras, Rrom) y víctimas de desplazamiento forzado interno, rural o transnacional.

Esto, como se declara en la Ley 1448 de 2011, plantea que el Estado realizará esfuerzos encaminados a las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación contenidas en la presente Ley y que cumplan con los esfuerzos de NO discriminación y de No regresividad que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

Aunado, el Parágrafo 1 del Art. 13 de la presente Ley menciona que: “Para cualquier reglamentación de las medidas atención, asistencia y reparación integral, será de obligatorio cumplimiento la incorporación de este enfoque, teniendo en cuenta el principio de pro-víctima y el enfoque de DDHH, en atención a las obligaciones internacionales en materia”

El Art. 28 de la Ley en mención, Derechos de las Víctimas y de acuerdo con el derecho 5. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condición de dignidad; Derecho 10. Derechos de las mujeres a vivir libres de violencia; Derecho 14.

Derechos a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando en los que tengan un interés como parte o intervinientes; Derecho 17. Derecho de restaurar los derechos y los vínculos fracturados por los hechos victimizantes derivados del conflicto a voluntad de las partes, serán sujetos de garantía de derechos y de atención, no solamente para dirimir conflictos, sino también, sujetos de derechos para una justicia real, en equidad, igualdad y no repetición.

Entonces, garantía de derechos mediante la atención integral en condiciones de dignidad pasa por la relación directa con el objetivo principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su agenda para el año 2030 en torno a “hacer realidad los derechos humanos de todas las personas”. Por ello la garantía de los Derechos Humanos (DDHH) para los Pueblos y Comunidades Étnicas pasa por el cumplimiento de las normas internacionales en los cuales se encuentran fundados los ODS, ya que para la región hay un reconocimiento explícito de los mismos ODS desde las políticas orientadas por la CEPAL, por ello la consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior establecen que los ODS integran los derechos humanos a la agenda mundial de desarrollo.

En este marco, la garantía, promoción y protección de los DDHH en torno a la atención integral en condiciones de dignidad de los Pueblos y Comunidades Étnicas, está directamente relacionada con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en articulación con la garantía de los siguientes DDHH:

1. **Fin de la Pobreza:** Derecho a un nivel de vida adecuado.
2. **Hambre Cero:** Derecho a una alimentación adecuada.
3. **Salud y Bienestar:** Derecho a la vida, Derecho a la salud, Protección especial para las madres y los niños y las niñas,
4. **Agua limpia y Saneamiento:** Derecho al agua potable y al saneamiento, Derecho a la salud.
5. **Reducción de las Desigualdades:** Derecho a la igualdad y no discriminación.
6. **Paz, Justicia e Instituciones Sólidas:** Derecho a vivir en paz; todas y todos tenemos derecho a una paz justa, sostenible y duradera.

En virtud de lo anterior, la atención integral debe estar enmarcada dentro del enfoque basado en los derechos humanos, lo cual permite potenciar y desarrollar la capacidad de los garantes de derechos para cumplir con sus funciones y obligaciones y en torno a la reivindicación de los derechos, además en la inclusión del enfoque diferencial étnico.

Por ello es de obligatorio cumplimiento la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas que habitan en la ciudad de Bogotá, en el cumplimiento de acuerdos y leyes promulgadas para la promoción y protección de los derechos humanos.

● JUSTICIA PROPIA Y JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA

El Capítulo 5 de la Constitución Política de Colombia del 91, desarrolla en su artículo 246 que *“las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”*

La Jurisdicción Especial Indígena es definida como *“la facultad constitucional de las Autoridades indígenas de administrar justicia en todas las ramas del derecho, en forma autónoma, integral e independiente de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales, las normas y procedimientos propios y la legislación indígena especial vigente dentro de su ámbito territorial.” (PROYECTO DE LEY SOBRE JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA)*

Por su parte, la USAID, destaca que “para la cabal comprensión de la Jurisdicción Especial Indígena debe considerarse que la administración de justicia, desde la visión de los pueblos indígenas, tiene unas dimensiones culturales, espirituales, preventivas, de armonización, de ordenamiento y de sanación.” (p.15)

En este marco, según Esther Sánchez Botero (2004) dentro de los impactos que tuvo la Constitución de 1991, se encuentra, *“la alternativa –sin precedentes para compartir con las autoridades de los pueblos indígenas la posibilidad de llevar a cabo actuaciones judiciales, reconociendo un pluralismo jurídico y otorgándoles un espacio legal para la participación como iguales en la diferencia. Estos pueblos, muchos de ellos con cultura diferenciada y todos con un alto sentido de pueblo distinto, en consecuencia, parten hoy de sus sistemas de derecho propio, que les ha permitido durante siglos organizar y vivir armónicamente la vida en sociedad, para conocer asuntos conflictivos y definirlos como judiciales.”*

Así mismo, el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia en el 2004, señaló que la jurisdicción de las comunidades indígenas fue incluida en la estructura general de la Administración de Justicia, como integrantes de la Rama Judicial, a través de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Sin embargo, siempre se ha carecido de mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional.

En lo concerniente a Bogotá, en el año 2015, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), en articulación con los 14 Cabildos Indígenas que conforman el Consejo Consultivo y de Concertación de los Pueblos Indígenas en Bogotá (Decreto 612 de 2015), adelantó el primer Diagnóstico de las Formas de Administración y Aplicación de Justicia Propia de los Pueblos Indígenas en Bogotá, a través del cual, se identificaron los Sistemas de Justicia Propia de cada Pueblo y el Protocolo de Aplicación de Justicia Propia de cada pueblo, de acuerdo con la gravedad y/o levedad de la falta, así como propuestas para la coordinación interjurisdiccional. Este proceso, ha contribuido a la articulación entre las Autoridades Indígenas y la administración distrital.

Posteriormente, entre los años 2021 y 2022, en el marco de la implementación del Plan Integral de Acciones Afirmativas para los Pueblos Indígenas de Bogotá, el Distrito avanzó hacia la construcción de una ruta para la atención con enfoque diferencial indígena en las Comisarías de Familia, para los miembros de los pueblos indígenas que se encuentren en riesgo y/o hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con lo anterior, la ruta tiene como propósito, además de una atención acorde con la cosmovisión de cada pueblo indígena, " (...) la coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción Indígena con el fin de mejorar los procesos de acceso las medidas de protección para las personas víctimas de violencia intrafamiliar con pertenencia étnica, en las Comisarías de Familia de Bogotá".(p.5)

Este proceso, se constituyó en un esfuerzo conjunto entre los Equipos de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría Distrital de Gobierno y las autoridades indígenas de los 14 cabildos que hacen parte del Decreto 612 de 2015.

- **LAS FUNCIONES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA Y EL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA**

La Secretaría Distrital de Integración Social, en cumplimiento del literal d) del artículo 26 del Decreto 607 de 2007, a través de la Subdirección para la Familia gestiona el funcionamiento de las Comisarías de Familia de Bogotá, D.C.

Estas comisarías, conforme al artículo 2° de la Ley 2126 de 2021, son responsables de brindar atención especializada e interdisciplinaria para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género y violencia familiar.

Las Comisarías de Familia, según el artículo 13 de la Ley 2126 de 2021, adoptan medidas de protección y atención para garantizar los derechos vulnerados en casos de violencia en el contexto familiar. Pueden ordenar todas las medidas necesarias para asegurar una vida libre de violencia para las víctimas, conforme a las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021. Estas acciones, en concordancia con el artículo 4 de la Ley 2126 de 2021, incluyen un enfoque de género, reconociendo la desigualdad y discriminación que afectan a mujeres y personas con identidad de género diversa.

Artículo 4. Principios rectores de las Comisarías de Familia:

8. *No discriminación:* En todas las actuaciones y decisiones de las Comisarías de Familia, se deberá garantizar la no discriminación en razón de la situación personal, social, económica, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, etnia, raza, religión, ideología política, o filosófica, discapacidad, convicciones personales, nacionalidad o cualquier otra condición que pueda constituir un criterio de discriminación.

10. *Atención diferenciada e interseccional:* Las Comisarías de Familia garantizarán la aplicación del enfoque diferencial e interseccional, considerando las necesidades y situaciones particulares de los territorios y de los grupos más vulnerables, sujetos de especial protección o personas especialmente afectadas por el conflicto armado, los niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, población rural, líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, población afrocolombiana, negra, palenquera, raizal, Rrom, y personas con orientación sexual o identidad de género diversas, migrantes, entre otros

- **CIFRAS DE ANÁLISIS DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**

Ángulo, en la página de la Secretaría de Integración Social refiere que el maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes - NNA en Bogotá se duplicó entre 2020 y 2023, la tasa de maltrato infantil -que incluye maltrato emocional, físico, sexual, económico, de negligencia o de abandono- pasó de 8,2 a 17,2 NNA. De la misma manera, la Secretaría de Salud alerta también sobre una escalada sin precedentes en la historia reciente del abuso sexual en contra de menores de edad, que pasó de 5.112 casos en 2020 a 12.446 en 2023.

Asimismo, la Secretaría Distrital de Integración en el Sistema de Información SIRBE, con vigencia al 1 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024, indica los siguientes datos, por grupo etario:

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR ATENDIDAS EN LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DE BOGOTÁ DESAGREGADO POR TIPO DE VIOLENCIA Y GRUPO ETARIO, VIGENCIA DE 2020 A MAYO DE 2024								
VIGENCIA	GRUPO ETARIO	TIPO DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR						
		ABANDONO	VIOLENCIA SEXUAL	VIOLENCIA FÍSICA	VIOLENCIA PSICOLÓGICA	NEGLIGENCIA	VIOLENCIA ECONÓMICA O EXPLOTACIÓN	SIN INFORMACIÓN
2021	0 A 5 AÑOS	4	93	635	821	57	33	88
2021	6 A 12 AÑOS	8	175	1062	1421	48	50	144
2021	13 A 17 AÑOS	10	153	1066	1397	43	41	152
2021	18 A 26 AÑOS	6	71	2887	3662	75	162	387
2021	27 A 59 AÑOS	14	174	5872	8667	151	488	947
2021	MAYOR 60 AÑOS	22	9	717	1448	60	129	155
2022	0 A 5 AÑOS	11	128	817	1191	58	31	155
2022	6 A 12 AÑOS	14	289	1506	2114	104	45	249
2022	13 A 17 AÑOS	13	316	1524	2007	92	40	211
2022	18 A 26 AÑOS	10	115	3364	4519	86	163	475
2022	27 A 59 AÑOS	21	240	7181	11627	193	589	1241
2022	MAYOR 60 AÑOS	49	18	737	1868	87	160	211
2023	0 A 5 AÑOS	14	117	1053	1518	56	64	187
2023	6 A 12 AÑOS	18	331	1693	2536	142	72	340
2023	13 A 17 AÑOS	22	300	1459	1993	96	67	307

2023	18 A 26 AÑOS	7	113	3295	4587	92	187	707
2023	27 A 59 AÑOS	25	250	6989	11859	150	660	1870
2023	MAYOR 60 AÑOS	48	12	772	1838	100	164	275
2024	0 A 5 AÑOS	3	52	400	574	22	31	91
2024	6 A 12 AÑOS	5	134	670	1001	50	40	186
2024	13 A 17 AÑOS	8	117	554	776	40	16	148
2024	18 A 26 AÑOS	0	38	1148	1636	13	78	391
2024	27 A 59 AÑOS	14	109	2694	4527	59	275	919
2024	MAYOR 60 AÑOS	29	10	326	802	57	83	158

Tabla No 1 Registro en el Sistema de Información Misional SIRBE - Secretaría Distrital de Integración Social

De la misma manera, esta curul envió la proposición No. 1283, a la Secretaría de Integración Social y dentro de sus respuestas mencionan que las Comisarías de Familia de Bogotá, en el marco del Acuerdo Distrital 155 de 2005, “Por medio del cual se crea el programa de seguimiento y apoyo a familias afectadas por la violencia intrafamiliar – PARVIF”, realizan seguimiento a las medidas de protección por violencia en el contexto familiar, con miras a verificar el cumplimiento y la efectividad de estas. Este programa fue actualizado en 2017 con el “Modelo de Seguimiento y Acompañamiento a Familias Involucradas en Situaciones de Violencia Intrafamiliar, el cual abarca acciones psicosociales para evaluar la dinámica familiar, asegurar la protección y fomentar la autonomía y empoderamiento de las personas involucradas”.

En este sentido, este programa es implementado en la atención a todas las víctimas de violencias en el contexto familiar atendidas en las Comisarías de Familia de la ciudad, incluidas aquellas pertenecientes a los Pueblos Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanquera y el Pueblo Rrom Gitano.

Es así como, el mencionado modelo, contempla un proceso de seguimiento que se encuentra soportado en las dimensiones: ético - política, epistemológica, ontológica y metodológica. Dentro de la dimensión metodológica, el modelo tiene tres aspectos importantes para el abordaje de los casos atendidos en las Comisarías de Familia:

- i. La postura para la atención psicosocial.
- ii. La gestión coordinada de significado.
- iii. La evaluación familiar, presentando además técnicas de seguimiento y contacto, que permiten describir el Modelo en las Comisarías de Familia de Bogotá.

Así las cosas, en estas respuestas se evidencia la poca relevancia en la inclusión del enfoque diferencial poblacional y étnico en el abordaje y con ello se vulneran los derechos culturales y sociales de los Grupos Étnicos y Personas con Discapacidad; si bien se mencionan en el modelo de seguimiento, es probable que los profesionales carecen de los conocimientos suficientes en materia de inclusión de la Jurisdicción Especial Indígena.

- **OBSTÁCULOS Y/O BARRERAS DE ACCESO A LA JUSTICIA DEBIDO A LA NO IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE POBLACIONAL - DIFERENCIAL**

En el caso de la atención a los *grupos étnicos*, se evidencia: 1) El desconocimiento de las funciones de las Autoridades Tradicionales Indígenas y funcionamiento de los Cabildos Indígenas en el contexto de ciudad; y el vasto marco normativo que protege los derechos de los grupos étnicos. Por lo cual, no existe una participación activa y/o acompañamiento de sus Gobernadores/as, líderes/as y/o representantes en los procesos de atención y la coordinación jurisdiccional para la atención de los casos. 2) El desconocimiento de la importancia de la justicia indígena en la resolución de conflictos, la cual tiene un carácter restaurativo y para armonizar al individuo y la comunidad. 3) Carencia de traductores en las lenguas propias de los pueblos indígenas, en la recepción de denuncias y acompañamiento en las demás etapas del proceso.

- **EXPERIENCIAS DE COMISARÍAS DE FAMILIA ESPECIALISTAS EN ASUNTOS INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL.**

Aunque nuestro país y el Distrito Capital en particular, ha avanzado en acciones que aportan a la atención con enfoque diferencial de las comunidades étnicas y personas con discapacidad en las comisarías de familia; y actualmente el Consejo Superior de la Judicatura implementa un Módulo de Formación Intercultural, el cual tiene como objetivo sensibilizar a los administradores de justicia de la Jurisdicción Especial Indígena y del Sistema Judicial Nacional para que realicen una adecuada implementación del enfoque diferencial en la coordinación jurisdiccional; a nivel internacional se cuenta con experiencias de Sistemas Judiciales Indígenas o de la inclusión efectiva de las costumbres y prácticas culturales de los grupos étnicos dentro del Sistema Judicial Nacional.

Lo anterior, evidencia el respeto por la diversidad cultural de las comunidades. Por sus saberes, por su encuentro colectivo. Las víctimas encuentran mayores garantías de acceso a la justicia; las cuales, se ajustan a su idioma propio (en el caso de los Pueblos Indígenas), a una traducción en lengua de señas, para la población sorda y demás especializaciones que garantizan la atención de los demás tipos de discapacidad. Además, en el caso de los Pueblos Indígenas, contribuye al respeto y fortalecimiento de sus gobiernos propios y autonomía.

Dentro de las experiencias destacadas en otros países, se encuentran la de Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, en los que se cuenta con Sistemas de Justicia Indígena y/o Tribunales Indígenas que aplican las leyes propias (leyes de origen, derecho mayor y derecho consuetudinario), y las leyes convencionales en el abordaje de los conflictos y las faltas, logrando una efectiva coordinación jurisdiccional. Las cuales, además, desde la visión de armonizar de los pueblos, reparan el daño, restauran las afectaciones generadas en la familia y comunidad. En estos procesos, se evidencia la importancia de la participación de los grupos y comunidades para la creación y funcionamiento de estos sistemas.

- **ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL**

En el años 2025 se realizará un transición importante de las 37 Comisarias de Familia, que pasarán a la Secretaría de Seguridad y con ello la administración actual se comprometió con el Concejo de Bogotá y los ciudadanos en aumentar la respuesta de estas, formalizando la planta de personal los equipos interdisciplinarios actuales y aumentar a 16 equipos comisariales, pasaron de 51 a 67.

Específicamente en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, en el Objetivo Bogotá avanza en su seguridad, se encuentra la meta 7942 Fortalecimiento de las Comisarias de Familia para el mejoramiento en el acceso a la justicia de víctimas de violencias por razones de género y otras violencias en el 1949

Adelantar el, 100, %, de las acciones que permitan el desarrollo de capacidades en las y los comisarios, y los equipos interdisciplinarios de las comisarias de familia en Bogotá en el análisis y uso de los enfoques diferencial e interseccional, derechos humanos de las mujeres y prevención y atención de Violencias basadas en Género en el marco de su operación y la administración de justicia contexto familiar en Bogotá D.C

Así las cosas, los Pueblos Indígenas continúan trabajando en la reivindicación y garantía de la protección y pervivencia de sus culturas, atendiendo al vasto marco normativo consolidado en pro del reconocimiento y la protección de sus derechos fundamentales, socioculturales, individuales y colectivos. Iniciando con los Convenios Internacionales, la Constitución Política de Colombia de 1991, las Leyes, los Acuerdos, Decretos y Resoluciones y los instrumentos de Política Pública, adoptadas por el Consejo de Política Social (CONPES) del Distrito, en la búsqueda de acciones políticas que aporten a la transformación de su realidad y la potenciación de su autonomía.

Sin embargo, los últimos gobiernos han avanzado tímidamente en la garantía de sus derechos, en donde se evidencia la falta de contundencia a la hora de mitigar las afectaciones estructurales de los grupos históricamente discriminados. Es por esto que se debe contar con instrumentos que contengan variables étnicas y herramientas presupuestales que permitan un efectivo seguimiento a su implementación, garantizando el mínimo vital, educación, salud, desarrollo económico, entre otros derechos, con el fin de potencializar las acciones diferenciales y asociar recursos específicos para su ejecución.

Así mismo, se deben incluir planes, programas y acciones que mitiguen el flagelo de la discriminación racial, tal como lo sugiere la Declaración y el Programa de Acción de Durban³⁷, donde; *“Insta y exhorta a los Estados a que garanticen dentro de su jurisdicción que las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas puedan ejercer plena y efectivamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna y en condiciones de plena igualdad ante la ley, y los derechos a disfrutar de su propia cultura, a profesar y a practicar su propia religión y a utilizar su propio idioma, y a participar efectivamente en la vida cultural, social, económica y política del país en que viven”*.

IV. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo, en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta a la Corporación para dictar normas así:

³⁷ Nota informativa 3 DPV2574/C. “Combatir mundialmente el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia es un asunto prioritario para la comunidad internacional”

Angulo, R. 2024. Cero tolerancia con la violencia contra niñas, niños y adolescentes, columna ciudad de oportunidades, Páginas 3.

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...)

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

15. Organizar la Personería y la Contraloría Distritales y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.

V. CONCLUSIONES

Aunque se dispone de un amplio marco normativo que propende por la defensa, protección y promoción de los derechos de los grupos poblacionales de especial protección constitucional que han sido históricamente discriminados por sus condiciones y características étnicas, discapacidad y/u orientación sexual, se carece de rutas de atención con enfoque diferencial especializado, para la atención integral de estas poblaciones, en equidad dentro de las comisarías de familia. Lo cual aumenta las barreras de acceso a la justicia y la aplicación de la misma. Además, cuando una persona pertenece a uno o más grupos poblacionales, se carece de un análisis interseccional.

Nuestro país ha avanzado tímidamente en la eliminación de los obstáculos y barreras planteados, sin embargo, el Distrito Capital, se destaca por una mirada proyectada hacia la garantía de estos derechos en condiciones de equidad e igualdad para la garantía de los derechos fundamentales de estas poblaciones. Empero, se requiere de acciones efectivas que permitan crear rutas especializadas con equipos profesionales capacitados para desarrollar esta atención de forma permanente. Por lo anterior, se requiere la creación de una Comisaría de Familia especializada en Asuntos Indígenas, para adelantar las siguientes acciones, a saber:

VI. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Congreso de la República. Ley 2126 de 2021. *Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de Familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones*. 4 de agosto de 2021.

Congreso de la República. Ley 2294 de 2023. *“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia potencia mundial de la vida”*, artículo 203, parágrafo primero.

Secretaría Distrital de Integración Social. (2022). *Informe: Construcción ruta de atención con enfoque diferencial e interseccional para la atención en comisarías de familias de Bogotá de quienes con pertenencia étnica indígena estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar*.

Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. (2004). Ponencia: *La Jurisdicción Especial Indígena en Colombia y los mecanismos de coordinación con el Sistema Judicial Nacional*. <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/4263275/13613759/Jurisdicci%C3%B3n+Especial+Ind%C3%ADgena+-+Consejo+Superior+de+la+Judicatura.pdf/c83d6e15-80ac-4398-a834-a3c69a6013ff>

Sánchez, E. (2004). *Derechos propios : ejercicio legal de la jurisdicción especial indígena en Colombia*. Procuraduría General de la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio Público Colombia. Bogotá, D.C.

VIII. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 699 DE 2025**PRIMER DEBATE**

POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYE EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UNA COMISARÍA DE FAMILIA ESPECIALIZADA PARA LOS ASUNTOS INDÍGENAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, que le confiere el artículo 322 de la Constitución Política y el numeral 15 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:**CAPÍTULO I****INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO EN EL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

Artículo 1. Adecuación Institucional con Enfoque Diferencial- Poblacional: La Comisaría de Familia Especializada para los Asuntos Indígenas, en el marco del cumplimiento de los señalamientos constitucionales y legales exigidos por el Estado colombiano, para el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar en Bogotá, se deberán adoptar medidas necesarias dentro los objetivos, estructura organizativa y funciones de la entidad, con el fin de vincular dentro del ámbito de acción de sus competencias específicas, las acciones dirigidas a la atención integral de estas poblaciones.

Artículo 2: Rediseño institucional: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, iniciará un proceso normativo que contribuya a la transformación, técnica y administrativa, en el marco de sus competencias, para crear una Comisaría de Familia Especializada para los Asuntos Indígenas, con el fin de ajustarse y adaptarse en toda su gestión a las garantías de derechos de los grupos sujetos de especial protección constitucional.

Parágrafo: Los procesos de ajuste institucional adelantarán la identificación de las condiciones externas e internas que afectan el quehacer; generar acciones de cambio a partir del redimensionamiento de los procesos, procedimientos y distribución de las funciones, así como elaborar los proyectos de actos administrativos, estudios de cargas que materialicen tales fórmulas de transformación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

CAPÍTULO II

CREACIÓN DE LA COMISARÍA DE FAMILIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICA

Artículo 3. Objetivo. En el marco de la modificación de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, creese la Comisaría de Familia especializada para los asuntos indígenas en la atención con enfoque diferencial, con el fin de brindar atención especializada e interdisciplinaria para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y/o víctimas de otras violencias en el contexto familiar, según lo establecido en Ley 2126 de 2021.

Artículo 4. Composición. La Comisaría de familia especializada para los asuntos indígenas en la atención con enfoque diferencial, estará conformada por un/a comisario/a, y un equipo interdisciplinario que garantice una atención integral y especializada a las personas usuarias de sus servicios. El equipo interdisciplinario estará conformado como mínimo por tres (3) abogados(as), tres (3) profesionales en psicología, tres (3) profesionales en trabajo social o desarrollo familiar, y tres auxiliares administrativos; pertenecientes a los grupos de atención prioritaria (sabedores indígenas).

PARÁGRAFO 1. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia establecerá los perfiles del equipo interdisciplinario y demás requisitos requeridos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales correspondiente.

Artículo 5. Mediación lingüística y comunicacional. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia deberá garantizar el servicio de intérpretes y traductores para personas que lo requieran en la Comisaría de familia. Para el efecto se podrán acceder a las entidades que cuenten con el servicio o celebrar, convenios interinstitucionales para acceder al servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordo ciegas teniendo en cuenta la Ley 982 de 2005 o la norma que la modifique o adicione y traductores de lenguas de grupos étnicos, cuando así lo requieran las necesidades del servicio, en virtud del principio de atención diferenciada e interseccional.

Artículo 6. Funciones generales de la Comisaría de familia. Serán funciones de la Comisaría de Familia Especializada en enfoque poblacional - diferencial las siguientes:

1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de la violencia establecida en el Artículo 5° de la Ley 2126 de 2021.
2. Orientar a las personas en riesgo o víctimas de las violencias a que hace referencia esta ley, sobre sus derechos y obligaciones.
3. Recibir solicitudes de protección en casos de violencia en el contexto familiar.
4. Brindar atención especializada conforme a los principios rectores de la presente ley y demás parámetros constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos y erradicación de las violencias en el contexto familiar, en especial las violencias por razones de género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y personas adultas mayores.

5. Activar la ruta con enfoque diferencial e interseccional para la atención de quienes con pertenencia étnica indígena estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar, de conformidad con la Ley 2126 de 2021 y el bloque de constitucionalidad.
6. Divulgar los derechos y rutas de atención de las personas usuarias, a través de la implementación de un Módulo de Formación Intercultural, con Autoridades Indígenas y Equipos de trabajo de la Comisaría de Familia.
7. Desarrollar espacios de diálogo entre la Comisaría de Familia Especializada y los Cabildos Indígenas, sobre elementos institucionales y normativos para la atención con enfoque diferencial, con el objetivo de sensibilizar a los administradores de justicia a nivel local y distrital, para que realicen una adecuada implementación del enfoque diferencial en coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena.
8. Establecer y difundir las políticas, rutas y actividades que promuevan la prevención de la violencia en el contexto familiar, en coordinación con las administraciones distritales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.
9. Garantizar el archivo, custodia y administración de la información generada en virtud de sus funciones.
10. Las demás funciones asignadas expresamente por la ley 2126 de 2021, siempre y cuando tengan estrecha relación con su objeto misional y se les garanticen las

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7. Recursos de Financiación: Para la modificación de la estructura institucional de las Comisarías de Familia, y la creación de la Comisaría Especializada en atención con enfoque poblacional diferencial, se incluirá en los rediseños institucionales de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2126 de 2021, Artículo 6, Parágrafo 1.

Artículo 8. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

OSCAR FERNANDO BASTIDAS JACANAMIJOY

Concejal De Bogotá D.C

Vocero Bancada Movimiento Alternativo Indígena Y Social – MAIS

PROYECTO DE ACUERDO NO 700 DE 2025**PRIMER DEBATE****“PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE CREA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS SAGRADOS” EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.****1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo busca garantizar la recuperación y protección de los espacios sagrados en el Distrito Capital de Bogotá, entendidos como territorios de especial relevancia cultural, espiritual y ambiental para las comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos sociales que encuentran en estos lugares un vínculo profundo con su identidad colectiva y sus prácticas ancestrales. Estos espacios representan no solo una conexión con la historia y las tradiciones, sino también una contribución esencial a la diversidad cultural, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental del distrito, objetivos que se alinean con el Plan de Desarrollo Distrital y los compromisos internacionales asumidos por Colombia, como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Históricamente, muchos de estos espacios han sido marginados, fragmentados o incluso destruidos debido al crecimiento urbano descontrolado, la falta de reconocimiento de su importancia o la imposición de modelos de desarrollo que no consideran las visiones tradicionales del territorio. En Bogotá, hay un sin número de espacios sagrados como lo son cerros orientales, los humedales, Parqués ejemplo Entrenubes y casas de pensamiento, ceremoniales o sagradas lugares que poseen un significado sagrado para comunidades indígenas en especial las originarias de este territorio el pueblo Muisca, así como para las comunidades afrodescendientes que los asocian con prácticas espirituales y ceremoniales. Sin embargo, su vulnerabilidad ante actividades como la expansión inmobiliaria, la contaminación y la desatención estatal subraya la urgencia de una normativa que priorice su protección y conservación desde una perspectiva intercultural y de derechos humanos.

El proyecto incorpora un enfoque técnico y jurídico que reconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas artículo 25 y la Ley 21 de 1991, que incorporó el Convenio 169 de la OIT en Colombia, obligando al Estado a proteger los territorios y prácticas culturales de los pueblos indígenas. Asimismo, este acuerdo no genera impacto fiscal, pues se fundamenta en la reestructuración de políticas e instrumentos ya existentes y en el uso eficiente de recursos disponibles, como los vinculados a programas ambientales, de turismo sostenible y de memoria histórica en el distrito. Al integrar actores como las alcaldías locales, entidades educativas y organizaciones comunitarias, se busca fomentar una corresponsabilidad en la salvaguarda de estos espacios.

Además de su valor cultural, los espacios sagrados son esenciales para la sostenibilidad ambiental de la ciudad. Estudios recientes muestran que áreas protegidas por comunidades indígenas o tradicionales suelen conservar mayor biodiversidad y calidad ambiental. Por ejemplo, datos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el IDEAM evidencian que humedales protegidos comunitariamente mantienen un 30% más de biodiversidad en comparación con zonas urbanas similares sin intervención comunitaria. La recuperación de estos espacios fortalece la relación ciudadana con el entorno y promueve una Bogotá resiliente frente al cambio climático, destacando que su protección es tanto un deber ético como un imperativo estratégico para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

2. ANTECEDENTES

Salvaguardar el patrimonio vivo es fundamental para los pueblos indígenas, porque su patrimonio es la base de su identidad, de sus culturas y la transmisión continua de este patrimonio es la que va a fortalecer las identidades y las culturas de los pueblos (Victoria Tauli-Corpuz, 2019).

Los sitios sagrados contienen un componente dinámico y la capacidad de cambiar y evolucionar conforme se va pasando de generación en generación, permitiendo que sus representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas aún sigan siendo pertinentes y que dan sentido a la vida diaria; esto contribuye a la vitalidad, fortaleza y el bienestar de las comunidades (UNESCO, 2019).

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la resolución 2664 del 4 de diciembre de 2023, el cual “Reconoce el Sistema de Sitios Sagrados de la Comunidad Muisca SSSM...” y, Art. 3, (...) *mantener activo el dialogo intercultural de carácter histórico entre los contenidos de la cosmogonía que representa y expresa los valores y practicas sociales, culturales, religiosas y espirituales*, garantiza las experiencias y expresiones que poseen los sitios sagrados, que simbolizan el origen o hitos históricos dentro de las consideraciones de identidad.

Ahora bien, la Ley 1185 de 2008, Artículo 1, Parágrafo A (...) “*tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito que sirva de testimonio de identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro*”, siendo como garante de la protección y salvaguardia de los lugares o sitios de integración del patrimonio cultural de la Nación.

Bogotá es una ciudad donde convergen múltiples culturas y cosmovisiones, entre las cuales se encuentran las de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Muchos de estos grupos tienen espacios sagrados que representan el vínculo espiritual y cultural con sus tradiciones ancestrales. Sin embargo, el desarrollo urbano ha afectado de manera significativa estos espacios, poniendo en riesgo su conservación. La falta de una política, proyectos, planes y programas claros que proteja estos sitios ha causado la pérdida de importantes espacios y ha debilitado la identidad cultural de estas comunidades.

Los espacios sagrados no solo son relevantes para las comunidades étnicas, sino que también forman parte del patrimonio ambiental y espiritual de todos los habitantes del Distrito. La protección de estos sitios contribuirá al desarrollo de una Bogotá más incluyente, en la que se respete la diversidad cultural y se fomente la convivencia pacífica.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La protección de los espacios sagrados no solo responde al mandato constitucional establecido en el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural del país, sino que también materializa compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) enfatiza el derecho de estos pueblos a mantener, proteger y desarrollar sus sitios culturales y espirituales, incluidos sus lugares sagrados. En el contexto distrital, Bogotá, como capital de un país pluricultural, tiene el deber de implementar políticas que garanticen la salvaguarda de estos espacios, no solo como patrimonio material e inmaterial, sino como eje esencial de la identidad y diversidad cultural de la ciudad. La recuperación de estos lugares implica un reconocimiento tangible de la deuda histórica hacia los pueblos originarios, quienes han sido los guardianes de estos territorios y sus significados ancestrales.

Desde una perspectiva ecológica y social, los espacios sagrados suelen estar intrínsecamente vinculados con ecosistemas específicos, como humedales, cerros o zonas verdes, que en Bogotá enfrentan constantes amenazas por procesos de urbanización y contaminación. Estos sitios no solo son vitales para la espiritualidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino que también desempeñan un papel crucial en la regulación del clima local, la conservación de la biodiversidad y el suministro de servicios ecosistémicos esenciales para la ciudad. Por ejemplo, los cerros orientales y los humedales, reconocidos como espacios sagrados para comunidades indígenas, albergan especies endémicas y representan reservorios de agua vital para los habitantes de Bogotá. Proteger estos espacios no es únicamente una cuestión de justicia cultural, sino una estrategia clave de sostenibilidad urbana.

La identificación y señalización de los espacios sagrados también tiene un impacto positivo en el fortalecimiento de la cohesión social y el turismo cultural sostenible. Bogotá, como una metrópoli reconocida internacionalmente, tiene la

oportunidad de proyectarse como un destino que valora y preserva su diversidad cultural. Experiencias en otras ciudades del mundo, como México y Cusco (Perú), han demostrado que la promoción del turismo cultural en torno a sitios sagrados no solo genera ingresos económicos, sino que también fomenta el respeto y el entendimiento entre diferentes culturas. En Bogotá, iniciativas como esta podrían integrarse en programas existentes, fortaleciendo actividades pedagógicas y culturales que promuevan el reconocimiento de la cosmovisión indígena entre los ciudadanos y visitantes.

Finalmente, la propuesta no implica un impacto fiscal directo debido a su enfoque en la articulación interinstitucional y comunitaria. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría Distrital de Ambiente cuentan con programas y recursos que pueden ser adaptados y optimizados para incluir la recuperación y protección de los espacios sagrados. Además, la participación activa de las comunidades en la identificación y promoción de estos lugares asegura un proceso participativo y de bajo costo que, además de ser eficiente, fortalece el empoderamiento de los actores locales y refuerza la legitimidad del proyecto. Este enfoque asegura que el distrito no solo cumpla con su responsabilidad legal y ética, sino que también se beneficie de los aportes culturales, sociales y ambientales que esta iniciativa puede generar.

4. SUSTENTO JURÍDICO

Este proyecto encuentra fundamento en los siguientes artículos y normas:

1. **Constitución Política de Colombia:**

- **Art. 7:** "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana".
- **Art. 8:** "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación".
- **Art. 63:** "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, los resguardos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables".
- **Art. 79:** "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. El Estado protegerá la diversidad e integridad del ambiente".

2. **Leyes**

- **Ley 397 de 1997** (Ley General de Cultura): establece la protección del patrimonio cultural de la Nación, incluidos los bienes inmateriales y los lugares sagrados de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
- **Ley 1448 de 2011:** otorga protección especial a los territorios de las comunidades étnicas afectadas por el conflicto armado, incluyendo sus lugares sagrados.

3. **Jurisprudencia**

- **Sentencia T-009 de 2013** de la Corte Constitucional: protege los lugares sagrados de las comunidades indígenas, garantizando su derecho a la autonomía cultural y espiritual.

4. **Normativa Distrital**

- **Acuerdo Distrital 257 de 2006:** otorga competencias a las Secretarías Distritales para la formulación de políticas en materia de cultura, ambiente y ordenamiento territorial, en concordancia con los derechos de las comunidades étnicas.
- **Decreto Distrital 364 de 2013:** reglamenta el Sistema de Patrimonio Cultural, Inmaterial, y establece la protección de espacios significativos para las comunidades étnicas.

- **Acuerdo 761 de 2020:** reconoce a Bogotá como una ciudad intercultural y promueve la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el Distrito.
- **Resolución Conjunta No. 2664 de 2023,** *“Por la cual se reconoce el Sistema de Sitios Sagrados de la comunidad Muisca - SSSM - y se dictan otras disposiciones”*

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO.

El Concejo de Bogotá tiene la competencia para regular y legislar en asuntos que involucren la protección del patrimonio cultural y ambiental del Distrito, de conformidad con el Artículo 313 de la Constitución Política, que le otorga funciones para "dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural".

En ese mismo sentido, el numeral 13 del artículo 12 de la Ley 1421 de 1993, así:

ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

...

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.”

En este sentido, este proyecto de acuerdo está enmarcado dentro de las facultades del Concejo, ya que busca proteger un bien inmaterial que es parte del patrimonio de la ciudad, contribuyendo a la preservación de los derechos culturales y ambientales.

6. IMPACTO FISCAL.

El desarrollo y aplicación de este proyecto no generará impacto fiscal, ya que se integrará dentro de las políticas y recursos ya asignados a las entidades del Distrito. La recuperación y señalización de los espacios sagrados se realizará en coordinación con las Secretarías Distritales pertinentes, utilizando recursos humanos y materiales ya existentes. No se requiere la creación de nuevos cargos ni la asignación de partidas presupuestales adicionales.

Además, se prevé que las acciones de protección contribuirán al desarrollo turístico y cultural de la ciudad, generando beneficios indirectos al incentivar el turismo sostenible y la conservación del patrimonio ambiental, sin sobrecargar financieramente al Distrito.

7. CONCLUSIÓN:

La protección de los espacios sagrados en Bogotá no solo fortalece el tejido social al reconocer y respetar la diversidad cultural de la ciudad, sino que también constituye un acto de reparación simbólica y empoderamiento para las comunidades indígenas, afrodescendientes y tradicionales. Estos lugares, cargados de significados históricos y espirituales, son testigos del legado de los pueblos ancestrales y constituyen un vínculo entre las generaciones pasadas y futuras. Su preservación fomenta el sentido de pertenencia y enriquece el patrimonio cultural inmaterial de la capital, alineándose con los principios constitucionales que promueven la multiculturalidad y la participación comunitaria en las políticas públicas. En el contexto de Bogotá, la protección de estos espacios puede contribuir a reducir tensiones sociales asociadas con la exclusión cultural y la marginalización histórica, promoviendo una ciudad más inclusiva y cohesionada.

El desarrollo de esta iniciativa bajo un enfoque participativo garantiza no solo su viabilidad económica, al integrarse en los planes ambientales y culturales ya existentes, sino también su legitimidad social. La señalización e identificación de estos espacios pueden implementarse mediante metodologías colaborativas, como la cartografía social y el diálogo interinstitucional, promoviendo una corresponsabilidad entre las comunidades y las autoridades distritales. Según datos

del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Bogotá cuenta con más de 15 zonas urbanas reconocidas como espacios de valor cultural, lo que evidencia una base sólida para incluir los espacios sagrados en la gestión patrimonial de la ciudad. Además, integrar estas acciones en estrategias ya presupuestadas no solo optimiza los recursos, sino que refuerza la articulación institucional, evitando duplicidades y fomentando el respeto por los derechos colectivos de las comunidades.

8. TÍTULO - ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS: Título: " Recuperación y Protección de los Espacios Sagrados" en el Distrito Capital de Bogotá, y se dictan otras disposiciones."

Autor

Atentamente

OSCAR FERNANDO BASTIDAS JACANAMIJOY

Concejal de Bogotá D.C.

Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS

PROYECTO DE ACUERDO NO 700 DE 2025**PRIMER DEBATE****“PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE CREA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS SAGRADOS” EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”****ATRIBUCIONES**

El Concejo de Bogotá, Distrito Capital, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto Orgánico de Bogotá) y en concordancia con la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), y demás normas concordantes.

CONSIDERANDOS

1. Que la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 8 que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, reconociendo la importancia de los espacios sagrados como parte del patrimonio cultural inmaterial.
2. Que el artículo 70 de la Constitución Política reconoce el derecho a la cultura como uno de los derechos fundamentales y establece que el Estado debe promover y proteger el acceso a la cultura de todos los ciudadanos, incluyendo la preservación de aquellos lugares que tienen relevancia espiritual y ancestral para las comunidades indígenas y otros grupos étnicos y religiosos.
3. Que el artículo 63 de la Constitución declara que los bienes de uso público, parques naturales y reservas territoriales, entre otros, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cual incluye a los territorios de importancia cultural y sagrada para los pueblos ancestrales.
4. Que la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) en su artículo 1 establece que el patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y manifestaciones que, por su valor histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, filmográfico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico, científico, técnico, industrial y tecnológico, tienen una importancia relevante para la identidad y la memoria colectiva de los colombianos, dentro de los cuales se incluyen los espacios sagrados.
5. Que Bogotá cuenta con diversos espacios de importancia espiritual y sagrada, tanto para comunidades indígenas como para otras colectividades religiosas, que representan un valor inmaterial invaluable y un recurso cultural que merece ser preservado para las futuras generaciones.
6. Que los espacios sagrados son un punto de convergencia para las prácticas culturales y espirituales de comunidades ancestrales y religiosas, constituyéndose en un pilar para la protección del tejido social, la convivencia, y la identidad cultural de Bogotá.
7. Que es necesario reconocer y recuperar los espacios sagrados, asegurando su protección, preservación, y respeto por parte de todos los ciudadanos y las instituciones distritales, en atención a los principios de diversidad cultural y respeto por la diferencia.

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. Crear y desarrollar el Programa de "Recuperación y Protección de los Espacios Sagrados" en el Distrito Capital de Bogotá, orientado a la protección, preservación y recuperación de aquellos lugares considerados sagrados por su valor espiritual, cultural, ancestral, y ambiental, para las comunidades étnicas que habitan Bogotá.

Artículo 2. Definición de Espacios Sagrados. Se entenderá por Espacios Sagrados aquellos lugares que, por su significación espiritual, cultural o ancestral, son considerados como puntos de conexión entre el mundo humano y lo divino o trascendental por una o varias comunidades étnicas.

Artículo 3. Identificación de los Espacios Sagrados. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en conjunto con la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Planeación, realizará un censo y diagnóstico de los espacios sagrados existentes en Bogotá, con el fin de identificar aquellos lugares que requieren acciones de protección, preservación y recuperación. Dicho censo incluirá la participación de las comunidades étnicas correspondientes.

Artículo 4. Acciones de Protección y Recuperación. El Distrito, implementará las siguientes acciones para la recuperación y protección de los Espacios Sagrados:

1. Establecimiento de un plan de manejo y conservación.
2. Realización de acciones de restauración ecológica, arquitectónica, y cultural, cuando sea necesario.
3. Desarrollo de campañas de sensibilización y educación dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia de respetar y proteger los espacios sagrados.
4. Coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad y el respeto por estos lugares, previniendo actos de vandalismo, ocupación ilegal u otras formas de uso no autorizado.

Artículo 5. Participación Comunitaria. El Programa de "Recuperación y Protección de los Espacios Sagrados" garantizará la participación activa de las comunidades étnicas que tengan vínculos espirituales o culturales con dichos espacios. Las decisiones sobre el manejo, cuidado, y acceso a estos espacios serán tomadas en concertación con las comunidades respectivas.

Artículo 6. Impacto Fiscal. La implementación de este acuerdo no generará impacto fiscal en el presupuesto del Distrito Capital. Para la ejecución de las acciones establecidas, se priorizarán mecanismos de cooperación interinstitucional, alianzas estratégicas con el sector privado y la gestión de recursos nacionales, distritales e internacionales, sin comprometer recursos adicionales del presupuesto distrital.

Artículo 7. Coordinación Interinstitucional. En la implementación participarán las siguientes entidades:

- La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, será la secretaria técnica y la encargada de la formulación, implementación y evaluación del presente acuerdo,
- La Secretaría de Gobierno será la presidencia
- Secretaria de Planeación
- Secretaria Distrital de Ambiente
- Secretaria Distrital de Movilidad
- Secretaria Distrital de Integración Social
- Secretaria Distrital de Hábitat
- Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación
- Cabildos Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros, Gitanos y Rrom.
- Fondos de Desarrollo Local

Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte liderará la implementación del presente acuerdo, en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente y las autoridades étnicas y religiosas, para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este acuerdo.

Parágrafo 2. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte deberá, en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la promulgación de este acuerdo, presentar un informe al Concejo de Bogotá sobre el avance en la identificación

de los sitios sagrados en el Distrito y aquellas acciones de protección y recuperación de los espacios sagrados en el Distrito.

Parágrafo 3. Las acciones de restauración y conservación de los espacios sagrados que requieran obras de infraestructura no podrán alterar el carácter espiritual y/o cultural del espacio y deberán ser aprobadas previamente por las comunidades vinculadas.

Artículo 8. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PROYECTO DE ACUERDO NO 701 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL ETNIA AL PARQUE EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ”.*****1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo promover la interculturalidad en Bogotá a través de la realización de un festival, que se realizaría cada año, como un evento artístico y cultural de libre acceso para todos los bogotanos. Que permitan visibilizar y fortalecer la diversidad étnica, cultural y social del Distrito Capital. A través de este festival, se busca fomentar el respeto, la inclusión, y la integración de las distintas comunidades, contribuyendo a la cohesión social y al enriquecimiento cultural de la ciudad.

- Fomentar el turismo a partir de una oferta cultural y gastronómica entorno al festival.
- Promover la visibilización de artistas locales, distritales y nacionales.
- Fortalecer y reconocer la labor de los músicos y compositores de los grupos étnicos y dar a conocer las tradiciones que se envuelven en estas comunidades.
- Impulsar emprendimientos que a través de sus productos resalten lo étnico.

2. ANTECEDENTES

Bogotá es una ciudad caracterizada por su diversidad cultural, producto de la convergencia de diversas comunidades étnicas, migratorias y sociales que coexisten en su territorio. La Constitución de 1991 en Colombia, por ejemplo, marcó un cambio hacia la inclusión y la valoración de diversas expresiones culturales, permitiendo así una interrelación entre lo urbano y lo rural. Aunque persisten desafíos en la implementación efectiva de este reconocimiento, la transformación de la cultura ha permitido de los movimientos sociales que utilizan nuevos códigos culturales como herramientas de resistencia y lucha por derechos. Asimismo, estos movimientos están redefiniendo la política y promoviendo una lucha por la visibilidad y el reconocimiento de identidades históricamente marginadas. En este contexto, la cultura se convierte en un espacio de insurgencia y resignificación que busca transformar tanto la política como el Estado. Desde la Constitución Política de 1991, Colombia ha reconocido su carácter multicultural y pluriétnico, por lo cual se han desarrollado políticas públicas enfocadas en la promoción de la cultura y la inclusión social. A nivel distrital, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ha implementado acciones para fomentar la participación de las comunidades a través de actividades culturales.

“El reconocimiento de la cultura como un valor universal y de nuestras culturas como parte integral de dicho valor; El reconocimiento y la legitimación de la pluralidad y la diversidad cultural; La democratización del acceso a bienes y servicios culturales; La difusión y el apoyo a las distintas manifestaciones artísticas y culturales teniendo en cuenta las expresiones de las comunidades afrocolombianas, indígenas, pueblo Rom y de las personas con limitaciones y sus cultores en los medios de comunicación; La recuperación de la importancia de lo público para el debate ciudadano; La aplicación de las recomendaciones sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular de la UNESCO” IDCT (2003, p.49).

Desde la perspectiva multicultural de las Políticas Culturales Distritales 2001- 2004, las políticas culturales se desarrollan a partir del reconocimiento y la pluralidad cultural como principios directrices para la convivencia y el respeto dentro de la diferencia cultural “Su punto de partida es la valoración positiva de las diferencias culturales. Ahora bien, la política distrital de cultura desde 2004- 2016 realizó reformas a la administración distrital de 2006 y se crearon otros instrumentos

de política, como el Instituto Distrital de las Artes. Qué surge, con el propósito de implementar las estrategias culturales que hagan posible la transformación social mediante la promoción de actividades y convocatorias que den forma a las dinámicas cambiantes de la ciudad y a la vida.

Sin embargo, es necesario fortalecer la oferta de eventos y festivales que promuevan la interculturalidad de manera más integral y sostenible en el tiempo. Ahora bien, en el plano internacional se vienen desarrollando líneas orientadoras a las políticas y programas de los Estados como lo son los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Los cuales plantean que “El conocimiento de las acciones humanas en el entorno y las relaciones sociales, deben orientarse a la transformación de los modos de estar juntos en un territorio”.

Por último, un precedente es la agenda 21 de cultura la cual es un documento de carácter mundial que “Plantea un compromiso por parte de las ciudades y los gobiernos locales del mundo para el desarrollo cultural”. Lo que propone esta agenda es combinar el componente cultural con pilares como el económico, social y ambiental para así garantizar el desarrollo sostenible. En este sentido, cabe anotar que Bogotá se encuentra adscrita a la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), así que es una de las ciudades que adopta como horizonte esta agenda para el accionar de la gestión pública de la cultura.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Bogotá, como epicentro del país es una de las ciudades ha venido fortaleciendo el reconocimiento de la interculturalidad como un eje fundamental y esencial para la construcción de una sociedad más integral, democrática y justa. Es decir, establecer la multiculturalidad como una de las bases para mejorar la convivencia y visibilizar a los diferentes sectores sociales que componen esta sociedad. Ahora bien, la realización de festivales y eventos culturales proporciona una plataforma para el intercambio de saberes, costumbres y tradiciones entre diferentes grupos sociales, contribuyendo a la reducción de la discriminación y la xenofobia.

Este proyecto no solo permite la difusión de la riqueza cultural de las diversas comunidades étnicas, sino que también genera espacios de diálogo y cohesión en los que se fortalecen los lazos entre los ciudadanos. Por último, permite la promoción de la interculturalidad, como un mecanismo eficaz para la integración social y el desarrollo humano, lo que respalda la pertinencia de esta iniciativa en Bogotá.

Ahora bien, cabe mencionar que para el año 2023 se entregaron 45 mil millones de pesos a 1.786 propuestas del programa Distrital de Estímulos, el programa distrital de apoyos concertados y es cultura local. En este sentido, Bogotá cuenta con un importante posicionamiento en cuanto a la formulación e implementación de las políticas públicas culturales. De manera que, garantice los derechos culturales de cada uno de los ciudadanos, en este caso, de todas las comunidades étnicas.

Debe resaltarse que es importante el diálogo intercultural que se gesta en este proyecto de acuerdo, porque logra congrega las diferentes visiones y cosmovisiones de los pueblos étnicos que componen el país. Además, se plantea como un espacio de participación que reúne a personas étnicas y no étnicas, en pro de construir una mejor sociedad y ciudadanía de paz.

La implementación de un festival étnico enfocado en la interculturalidad resulta pertinente para consolidar una ciudad más democrática e incluyente. Bogotá, al ser una de las ciudades más diversas de Colombia, necesita de mecanismos que permitan a las comunidades expresar y compartir su cultura. La iniciativa promueve espacios donde se respeten las diferencias y se valoren las contribuciones de cada grupo a la identidad cultural de la ciudad.

Desde un enfoque económico, el desarrollo de estos eventos tiene el potencial de dinamizar el sector cultural y turístico de la ciudad, atrayendo tanto a locales como a visitantes. Además, fortalece las economías creativas y fomenta el

emprendimiento en el ámbito cultural, con un impacto positivo en la generación de empleo y en la activación de otros sectores productivos.

El establecimiento de un programa destinado a promover la interculturalidad a través de la realización del festival étnico en el Distrito Capital de Bogotá tendría un impacto significativo y positivo en los pueblos indígenas en condición de ciudad asentados en Bogotá. Además, generaría transformaciones profundas en diversos escenarios de la vida cotidiana en la ciudad, asimismo, se detalla el impacto en áreas clave para la aplicación, desarrollo y ejecución de este tipo de iniciativas que pretenden mejorar la calidad de vida de estas comunidades.

Impacto en el ámbito educativo: La incidencia del festival étnico es promover la interculturalidad y brindar a los pueblos indígenas, la oportunidad de compartir y transmitir sus conocimientos, lenguas, cosmovisiones y saberes ancestrales en los espacios educativos. Esto no solo enriquecería los contenidos educativos para los estudiantes no indígenas, sino que también fortalecería el sentido de identidad de los niños y jóvenes indígenas al ver reflejada su cultura en la enseñanza formal.

Por otro lado, fomentar la presencia activa de las culturas indígenas en los colegios y universidades crearía un espacio de diálogo intercultural, donde se reconocen las diversas formas de entender el mundo, promoviendo el respeto mutuo y reduciendo los prejuicios o estereotipos.

La educación es uno de los pilares fundamentales y más importantes de la sociedad sino el más importante, por lo tanto, tiene el reto de formar personas integrales que cultiven y trabajen por la diversidad de pensamientos. En este sentido, la educación es la puerta para alcanzar una sociedad mayoritariamente crítica y armoniosa con las diferentes manera de pensar.

Impacto social: En el ámbito social, el festival étnico contribuiría a visibilizar a las comunidades étnicas urbanas, muchas veces invisibilizadas o estigmatizadas. A través de estos espacios, la sociedad bogotana podría conocer de cerca la diversidad cultural que habita en su ciudad, lo que fomentaría la tolerancia, la buena convivencia, solidaridad y el respeto hacia la diferencia.

Además, este encuentro fortalecería los lazos interculturales entre los propios pueblos étnicos, que suelen vivir dispersos en diferentes zonas de la ciudad. Asimismo, se favorece el intercambio de experiencias que refuerzan el tejido comunitario y social, y permite la participación de diferentes sectores que habitan la ciudad.

Impacto cultural: La realización de este festival étnico permitiría que las músicas tradicionales, danza tradicional y gastronomía tradicional, sigan resistiendo y perviviendo en el tiempo. Asimismo, se fortalezcan las sonoridades y las distintas expresiones inmersas en la cosmovisión de los pueblos étnicos y florezcan en el entorno urbano. Ahora bien, donde usualmente estas expresiones culturales tienden a diluirse, este tipo de iniciativas servirían como una herramienta para preservar el patrimonio inmaterial de estas comunidades, evitando la pérdida de prácticas y saberes ancestrales.

De manera simultánea, se generaría un tejido intercultural entre indígenas y no indígenas, al compartir espacios de encuentro y aprendizaje conjunto. Este intercambio permitiría que la ciudadanía de Bogotá conozca y valore la riqueza cultural que aportan los pueblos indígenas a la identidad multicultural del Distrito Capital.

Impacto emocional y psicológico: Desde el punto de vista emocional y psicológico, la promoción de la interculturalidad a través del festival étnico permitiría reforzar el sentido de pertenencia e identidad de los pueblos étnicos en la ciudad. Ya que, muchas personas étnicas enfrentan procesos de desarraigo, debido a que han tenido que abandonar sus territorios ancestrales para asentarse en Bogotá, lo que genera sentimientos de aislamiento o desconexión con su cultura.

El festival étnico sería un espacio para la autoafirmación y el orgullo étnico, al visibilizar sus raíces y aportar a la sociedad desde su identidad. Asimismo, el participar en estos eventos también fortalecería la autoestima individual y colectiva, promoviendo una mejor salud mental y emocional entre los indígenas urbanos, quienes muchas veces enfrentan discriminación y marginación en el entorno urbano.

Impacto psicológico en el contexto de integración social: Este evento funcionaría como catalizador de procesos de integración social, por lo cual, las comunidades étnicas participarían activamente en el ámbito cultural y urbano. Por un lado, al interactuar con otros grupos poblacionales, se fortalecería su identidad indígena en el contexto urbano. Esta integración permitiría mejorar la percepción de los pueblos étnicos en la ciudad, y disminuir la exclusión social y fomentando la inclusión en diferentes áreas de la vida ciudadana.

Impacto en el ámbito económico: El festival étnico también pretende tener un impacto en la economía local y apoyar a las economías propias de los pueblos étnicos. En tanto, que ayudaría a promover los emprendimientos étnicos a través de la articulación del festival con una feria que se realice dentro de la misma y se potencien los productos tradicionales de cada pueblo. Asimismo, se generarían oportunidades de negocio para la comercialización de los productos que hacen comunidades étnicas

Lo cual, promovería el mejoramiento de su autonomía económica en la ciudad y a fortalecer la valorización de sus productos y conocimientos en un contexto tan competitivo como Bogotá. En tanto, sería una plaza para dar a conocer sus emprendimientos y alcanzar un mayor impacto en la ciudad y que posiblemente genere un mayor alcance de negocios.

Impacto en el ámbito emocional colectivo: El fortalecimiento del sentido comunitario y la celebración de las raíces culturales contribuirían a generar un arraigo más profundo y unión entre los pueblos étnicos en Bogotá. La recuperación de los espacios públicos para realizar eventos culturales genera un entorno de bienestar donde los pueblos indígenas no solo se ven reconocidos, sino que pueden expresar su identidad sin temor a la discriminación, lo cual es esencial para la sanación emocional colectiva después de enfrentar procesos históricos de marginalización.

El desarrollo y ejecución de este programa de interculturalidad fomentaría el diálogo y la convivencia pacífica entre diferentes grupos étnicos y sociales que coexisten en Bogotá. Sería una herramienta poderosa de inclusión, al visibilizar las aportaciones culturales de los pueblos indígenas en un contexto urbano donde tienden a ser marginados. Además, este tipo de programas tienen la capacidad de generar empatía y conciencia en la sociedad mayoritaria, ayudando a reducir las barreras de discriminación que muchos indígenas enfrentan en su vida diaria.

4. SUSTENTO JURÍDICO

Este proyecto encuentra su sustento en varios instrumentos legales, entre los cuales se destacan:

Contexto Internacional

- I.1 La diversidad cultural** es el principal patrimonio de la humanidad. Es el producto de miles de años de historia, fruto de la contribución colectiva de todos los pueblos, a través de sus lenguas, imaginarios, tecnologías, prácticas y creaciones. La cultura adopta formas distintas, que siempre responden a modelos dinámicos de relación entre sociedades y territorios. La diversidad cultural contribuye a una “existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual más satisfactoria para todas las personas” (Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, artículo 3), y constituye uno de los elementos esenciales de transformación de la realidad urbana y social.
- I.2 Los gobiernos locales** reconocen que los derechos culturales forman parte indisoluble de los derechos humanos y toman como referencia básica la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto

Internacional Relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (2001). En tal sentido, se ratifica que la libertad cultural de los individuos y las comunidades resulta condición esencial de la democracia. Ninguna persona puede invocar la diversidad cultural para atentar contra los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance.

I.3 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972

"A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural": los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, - los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las Zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico".³⁸

I.4 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial-UNESCO 2003

En el 2003 la UNESCO promulga la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en la cual hace advertencia de los peligros inminentes de la globalización para las expresiones de un mundo plural y diverso. Destaca, como aspecto importante, el hecho del reconocimiento que se hace a las comunidades portadoras, para que sean éstas las que tomen decisiones respecto a cómo salvaguardar su patrimonio cultural.

"Artículo 16 – Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

- 1. A fin de asegurar una mejor visibilidad del patrimonio cultural inmaterial y la conciencia de su significado, y fomentar un diálogo que respete la diversidad cultural, el Comité, a propuesta de los Estados Partes interesados, establecerá, mantendrá actualizado y publicará un Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.*
- 2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios para el establecimiento, actualización y publicación de esta Lista Representativa."³⁹*

³⁸ <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>

³⁹ <https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n>

I.5 UNESCO - Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro) 2020

La Unesco en dicha declaración señaló que:

“La música, la danza y el teatro son con frecuencia elementos fundamentales de la promoción cultural destinada a atraer al turismo, y suelen formar parte de los espectáculos ofrecidos en los viajes organizados de las agencias turísticas. Aunque pueda atraer más visitantes, aumentar los ingresos de una comunidad o un país determinados y ofrecer un escaparate a su cultura, la promoción cultural de este tipo puede dar lugar a que surjan formas de presentación de las artes del espectáculo adaptadas y adulteradas para el mercado turístico. Si bien el turismo puede contribuir a reavivar las artes del espectáculo tradicionales y dar un “valor de mercado” al patrimonio cultural inmaterial, también puede tener un efecto deformante, ya que a menudo las representaciones se simplifican y acortan para mostrar una serie de “escenas culminantes” adaptadas para responder a la demanda turística. A menudo las formas artísticas tradicionales se convierten en productos de diversión, con la consiguiente pérdida de importantes formas de expresión comunitaria.”

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991:

Artículo 7: "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana."

Artículo 70: "El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, mediante una política permanente de democratización de la cultura nacional e internacional."

Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura): En su artículo 1 establece que el Estado promoverá la cultura en todas sus manifestaciones y reconocerá la pluralidad y la diversidad cultural de Colombia.

Ley 1757 de 2015 (Ley de Participación Ciudadana): Artículo 2 reconoce el derecho a la participación en los asuntos culturales y establece mecanismos para la incidencia ciudadana en la planeación y ejecución de políticas culturales.

Ley 724 de 2001: Establece que el Estado debe garantizar la promoción y el respeto de las culturas indígenas, afrocolombianas y de otras comunidades minoritarias en Colombia.

NORMATIVIDAD DISTRITAL:

Decreto Distrital 456 de 2013: Reglamenta la organización de festivales y eventos culturales en Bogotá, otorgando a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte la facultad de apoyar este tipo de actividades.

Acuerdo 635 de 2016: Crea la política pública distrital de atención y reconocimiento a los grupos étnicos y minorías culturales en Bogotá.

Acuerdo 927 de 2024, Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”

- 10.8. Programa 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural.

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 322 y 323 de la Constitución Política de Colombia, así como en el Decreto Ley 1421 de 1993, el Concejo de Bogotá tiene competencia para expedir acuerdos que promuevan el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital. En este sentido, la promoción de la interculturalidad a través de festivales y eventos culturales es una competencia directa del Concejo, en consonancia con las políticas nacionales y distritales en materia de cultura y diversidad.

6. IMPACTO FISCAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, todo Proyecto de Acuerdo debe incluir en su exposición de motivos un análisis explícito del impacto fiscal, el cual debe ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En atención a este requisito, se establece que el presente proyecto no genera impacto fiscal, dado que no representa una afectación al Marco Fiscal de Mediano Plazo no requiere nuevas partidas presupuestales o adiciones presupuestales. Los posibles gastos derivados de su implementación están contemplados dentro de los programas y proyectos ya incluidos en los presupuestos de inversión anual y en el Plan Operativo Anual de Inversiones de las entidades competentes, particularmente de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y otras entidades con responsabilidad sectorial.

Además, la iniciativa se alinea con los objetivos establecidos en el Acuerdo 761 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2020–2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, específicamente en el Programa 26: *Bogotá-Región, el mejor destino para visitar*, que contempla acciones estratégicas para el posicionamiento turístico y cultural de la ciudad mediante la formulación de productos culturales y de bienestar, y la ejecución de eventos y ferias que fortalecen la economía y el tejido social.

Igualmente, el artículo 35 del mencionado Plan de Desarrollo establece la priorización de acciones del sector Cultura, Recreación y Deporte, orientadas a la reactivación económica y social, mediante el uso eficiente de los recursos asignados. En este marco, la ejecución de la presente iniciativa se integra a metas y programas ya definidos, sin comprometer recursos adicionales.

Se prevé, además, que los eventos y actividades culturales derivados del proyecto puedan ser implementados mediante convocatorias públicas ya existentes y financiados, en parte, mediante alianzas estratégicas con el sector privado y organizaciones internacionales, lo que refuerza su viabilidad financiera sin necesidad de modificar el presupuesto distrital vigente.

Finalmente, se recuerda lo señalado por la Sentencia C-911 de 2007 de la Corte Constitucional, según la cual el análisis del impacto fiscal no puede convertirse en un obstáculo que limite la competencia normativa de las corporaciones públicas. Dicho análisis debe ser una herramienta para garantizar la sostenibilidad fiscal, pero no puede interpretarse como un mecanismo de veto ni de bloqueo a la función legislativa de los concejos.

En suma, esta iniciativa cumple con los requisitos de sostenibilidad y compatibilidad fiscal, está articulada con el marco normativo y programático del Distrito, y no representa una carga fiscal adicional.

7. CONCLUSIÓN

En conclusión, la creación de un programa que promueva la interculturalidad a través de festivales y eventos culturales tendría efectos profundamente positivos en la vida diaria de los pueblos indígenas asentados en Bogotá, mejorando su integración social, su bienestar emocional y psicológico, y contribuyendo a la preservación y valoración de su patrimonio cultural.

8. TÍTULO - ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS: **Título:** " Por medio del cual se promueve la interculturalidad a través de la realización del festival Etnia al parque en el Distrito Capital de Bogotá".

PROYECTO DE ACUERDO NO 701 DE 2025**PRIMER DEBATE**

““POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL ETNIA AL PARQUE EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ”.

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia establece que "el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana", y que corresponde a las entidades territoriales la promoción de la inclusión y el respeto por esta diversidad.
2. Que la Ley 397 de 1997, o Ley General de Cultura, tiene como uno de sus fines la preservación y promoción de las culturas en su diversidad y riqueza, reconociendo la importancia de su transmisión, y que la interculturalidad contribuye al desarrollo humano y social.
3. Que el Distrito Capital de Bogotá es un territorio pluricultural y multiétnico, en el que coexisten comunidades provenientes de diferentes regiones del país y del extranjero, por lo que es imperativo generar espacios donde todas las manifestaciones culturales puedan ser reconocidas y celebradas.
4. Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha resaltado la importancia de la interculturalidad como un motor para la paz, el diálogo y la inclusión, y que los festivales culturales son un instrumento eficaz para promover estos valores.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Créase el festival intercultural “Etnia al Parque” como un evento artístico, gastronómico y cultural para la promoción y participación de las diversas comunidades étnicas presentes en el Distrito y en el territorio nacional.

ARTÍCULO 2. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte diseñará, ejecutará y coordinará las acciones, actividades, convocatorias y demás disposiciones necesarias para la realización del festival, garantizando la participación activa de las comunidades étnicas que habitan en el Distrito y las comunidades fuera del distrito que manifiesten su interés.

ARTÍCULO 3. El Distrito garantizará las condiciones necesarias para la realización anual del festival intercultural “Etnia al Parque”.

ARTÍCULO 4. Las entidades públicas y privadas que colaboren en la organización y realización del festival deberán garantizar que los eventos sean incluyentes, accesibles y que promuevan el respeto mutuo entre las diversas culturas.

ARTÍCULO 5. La programación del festival intercultural “Etnia al Parque”, será coordinada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con la participación activa de las Alcaldías Locales y de las comunidades étnicas que habitan en el Distrito. Estas comunidades presentarán manifestaciones artísticas, gastronómicas, musicales y de otras expresiones que resalten su identidad cultural, sin que ninguna manifestación prevalezca o se imponga sobre las demás.

ARTÍCULO 6. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), Canal Capital y otros actores del sector cultural desarrollarán estrategias de comunicación para garantizar la promoción y divulgación del festival y de sus eventos en todo el territorio distrital, incluyendo medios digitales, radiales y televisivos.

ARTÍCULO 7. En el marco del festival intercultural “Etnia al Parque”, la Secretaría de Educación promoverá jornadas de sensibilización y formación en interculturalidad dirigidas a estudiantes de las instituciones educativas distritales, fomentando la comprensión y el respeto por la diversidad cultural.

ARTÍCULO 8. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

Cordial Saludo,

OSCAR BASTIDAS JACANAMIJOY

Vocero del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS

Autor

PROYECTO DE ACUERDO NO 702 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN ALIVIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES AFECTADOS POR RETRASOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"****1. OBJETO DEL PROYECTO**

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo principal establecer un marco de alivios tributarios dirigido a los propietarios, poseedores de bienes inmuebles y a los establecimientos comerciales que resulten afectados por los retrasos en la ejecución de las obras públicas en el Distrito Capital de Bogotá. La finalidad es mitigar las cargas económicas y las disrupciones generadas por dichos retrasos, brindando un soporte fiscal a quienes vean comprometido el uso, acceso, aprovechamiento económico de sus propiedades o la actividad comercial de sus negocios, mediante la aplicación de descuentos proporcionales al tiempo de incumplimiento en el cronograma de las obras.

A través de la implementación de descuentos en el Impuesto Predial Unificado para los inmuebles y en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para los establecimientos comerciales, este proyecto busca compensar los perjuicios derivados de la prolongación de las intervenciones urbanísticas. Con ello, se procura garantizar una mayor equidad y justicia para los contribuyentes afectados, incentivando al mismo tiempo la pronta finalización de los proyectos de infraestructura y fomentando una relación de colaboración entre la administración distrital y la ciudadanía.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Bogotá, como epicentro del desarrollo económico y social de Colombia, se encuentra en un proceso constante de transformación urbana, impulsado por la ejecución de numerosas obras públicas destinadas a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, este dinamismo se ve empañado por una problemática persistente y de gran envergadura: los retrasos crónicos en la ejecución de estos proyectos.

La magnitud de este problema se evidencia en datos concretos. Información oficial obtenida del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) revela que cerca del 69% de las obras públicas en ejecución presentan retrasos. Esta cifra alarmante indica que no se trata de incidentes aislados o excepciones, sino de un problema sistémico y generalizado que afecta a amplias zonas de la capital. La prevalencia de estas demoras, que se extienden por periodos prolongados, transforma lo que debería ser un beneficio público en una fuente de perjuicio económico y social para una parte significativa de la población.

La gravedad de la situación ha sido objeto de atención por parte de los entes de control. La Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, ha emitido alertas por incumplimientos y retrasos en las obras de valorización en Bogotá, señalando que algunas de estas obras han sido pagadas por los bogotanos desde hace más de una década sin ser finalizadas. Esta supervisión oficial confirma la seriedad de la problemática y la necesidad urgente de una intervención. La ejecución deficiente de proyectos de infraestructura en Colombia, y de manera particular en Bogotá, ha sido identificada como un factor que han impedido el crecimiento del país, generando sobrecostos debido a la inflación de precios de materiales y la necesidad de modificaciones no previstas en los cronogramas iniciales. La incapacidad de cumplir con los plazos no solo afecta la eficiencia del gasto público, sino que también impone cargas adicionales a la economía local.

Ante la magnitud de esta problemática, el presente proyecto se presenta como una respuesta directa y necesaria. La finalidad de este proyecto es clara al mitigar las cargas económicas y las interrupciones generadas por dichos retrasos, brindando un soporte fiscal a quienes vean comprometido el uso, acceso, aprovechamiento económico de sus propiedades o la actividad comercial de sus negocios. Este soporte se materializará mediante la aplicación de descuentos proporcionales al tiempo de incumplimiento en el cronograma de las obras. Específicamente, el proyecto propone compensar los perjuicios a través de descuentos en el Impuesto Predial Unificado para los inmuebles y en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para los establecimientos comerciales.

El propósito último de esta iniciativa trasciende la mera compensación económica. Busca garantizar una mayor equidad y justicia para los contribuyentes afectados, incentivando al mismo tiempo la pronta finalización de los proyectos de infraestructura y fomentando una relación de colaboración entre la administración distrital y la ciudadanía. Al vincular directamente el alivio fiscal a la duración del retraso, el proyecto no solo ofrece un respiro económico a los perjudicados, sino que también establece un mecanismo que, de manera indirecta, presiona por una mayor eficiencia en la gestión y ejecución de las obras públicas, fortaleciendo la confianza entre el gobierno local y sus administrados.

3. MARCO NORMATIVO

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA

- ARTÍCULO 1: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
- ARTÍCULO 338: En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos

Decreto 1333 de 1986. *Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.*

Ley 44 de 1990. *Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias.*

Decreto Ley 1421 de 1993. *Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.*

Ley 242 de 1995. *Por la cual se modifican algunas normas que consagran el crecimiento del índice de precios al consumidor del año anterior como factor de reajuste de valores, y se dictan otras.*

Ley 788 de 2002. *Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones*

Ley 1386 de 2010. *Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones.*

Ley 1819 de 2016. *Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.*

ORDEN DISTRITAL

Decreto Distrital 807 de 1993 *“Por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones”*

Decreto Distrital 352 de 2002. *“Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital”*

Decreto Distrital 777 de 2019. *“Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones”*

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según artículo 313 de la Constitución Política numeral 1.

ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos:

- I. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.
- II. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.
- III. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.
- IV. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.
- V. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
- VI. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.
- VII. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
- VIII. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine.
- IX. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
- X. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.

5. IMPACTO FISCAL

La iniciativa propuesta, si bien contempla beneficios tributarios, está diseñada para no generar un impacto fiscal negativo significativo en las finanzas del Distrito Capital. El descuento en los impuestos predial y de industria y comercio para los afectados por los retrasos en las obras de la ciudad se estima equivalente o incluso inferior a los descuentos por pronto pago que actualmente se otorgan a los contribuyentes. De esta forma, se busca que la medida se autofinancie, o que su costo sea mínimo, al redirigir una parte de los incentivos existentes hacia una población específica que se ve directamente perjudicada por las intervenciones públicas, garantizando así la sostenibilidad fiscal de la propuesta

6. CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, me permito radicar el presente proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN ALIVIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES AFECTADOS POR RETRASOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" para su respectiva discusión y aprobación.

Cordialmente,

DANIEL FELIPE BRICEÑO MONTES

Concejal de Bogotá

Partido Centro Democrático

7. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 702 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN ALIVIOS TRIBUTARIOS PARA PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES AFECTADOS POR RETRASOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"****EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene como objeto establecer beneficios tributarios a los propietarios y poseedores de bienes inmuebles, así como a los establecimientos comerciales, que se encuentren directamente afectados por los retrasos en la ejecución de las obras públicas en el Distrito Capital de Bogotá.

Artículo 2. Definición de Retraso y Afectación. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por:

- **Retraso en las obras:** El incumplimiento del cronograma de ejecución de las obras, certificado por la entidad competente mediante acto administrativo.
- **Inmueble afectado:** Aquel bien raíz que, debido a los retrasos en las obras, enfrente limitaciones en su uso y acceso.
- **Establecimiento comercial afectado:** Aquel negocio que, como consecuencia directa de los retrasos en las obras, demuestre una disminución significativa en su actividad económica.

Artículo 3. Alcance de los Beneficios. Los beneficios establecidos en el presente Acuerdo serán aplicables a:

- Todos los bienes inmuebles, sean residenciales o comerciales, ubicados dentro del polígono de influencia directa de las obras, y que registren ante la Secretaría Distrital de Hacienda afectación por retraso.
- Todos los establecimientos comerciales legalmente constituidos y en funcionamiento, ubicados dentro del polígono de influencia directa de las obras, y que demuestren afectación económica por los retrasos ante la Secretaría Distrital de Hacienda.

Artículo 4. Descuento por Retraso en Impuesto Predial Unificado. Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles afectados por los retrasos en las obras tendrán derecho a un descuento en el Impuesto Predial Unificado. Por cada año (1 año) de retraso acumulado en la finalización de las obras respecto al cronograma inicialmente establecido, se aplicará un descuento del diez por ciento (10%) sobre el valor total del impuesto predial correspondiente al período fiscal afectado. Este descuento será acumulativo por cada semestre adicional de retraso.

Artículo 5. Descuento por Retraso en Impuesto de Industria y Comercio (ICA). Los establecimientos comerciales afectados por los retrasos en las obras de la tendrán derecho a un descuento en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). Por cada año (1 año) de retraso acumulado en la finalización de las obras respecto al cronograma inicialmente establecido, se aplicará un descuento del cinco por ciento (5%) sobre el valor total del ICA correspondiente al período fiscal afectado. Este descuento será acumulativo por cada semestre adicional de retraso.

Artículo 6. Procedimiento para Acceder a los Beneficios. La Secretaría Distrital de Hacienda deberá reglamentar los requisitos específicos y el procedimiento detallado para acreditar la afectación de inmuebles y establecimientos comerciales, así como la cuantificación de los retrasos.

Artículo 7. Vigencia de los Descuentos. Los descuentos en el Impuesto Predial Unificado y el ICA serán aplicables durante el período en que persista el retraso en la ejecución de las obras, conforme lo determine la autoridad competente. Una vez las obras sean declaradas finalizadas o los retrasos sean subsanados, los descuentos dejarán de aplicarse.

Artículo 8. Irretroactividad y No Devolución. Los descuentos establecidos en el presente Acuerdo no serán aplicables a períodos fiscales anteriores a la entrada en vigencia del mismo. Los pagos de impuestos realizados antes de la expedición de la resolución que concede el beneficio no serán objeto de devolución o compensación.

Artículo 9. Coordinación Interinstitucional. La Secretaría Distrital de Hacienda, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y las demás entidades distritales involucradas en la ejecución y seguimiento de las obras, deberán coordinar acciones para garantizar la oportuna certificación de los retrasos y la efectiva aplicación de los alivios tributarios.

Artículo 10. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 703 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DISTRITAL DE VIOLENCIA POLICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO**

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto la creación del Observatorio de Violencia Policial, concebido como un repositorio de datos que sistematice, registre y publique de información sobre casos de violencia y abuso policial en Bogotá, incluyendo datos sociodemográficos relevantes como localización, sexo y edad de las víctimas, según la tipificación legal. Incluye la documentación específica de los abusos ocurridos durante el estallido social de 2019 y 2021, así como la creación de contenidos didácticos para orientar a la ciudadanía sobre el proceso de denuncia. Además, se propone un repositorio accesible con materiales informativos sobre derechos humanos y los contactos de organizaciones sociales que brindan apoyo en casos de abuso policial. Todo lo anterior a través de la coordinación entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría Distrital de Gobierno.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

La Constitución Política de Colombia, como carta magna, norma suprema y pilar fundamental de la sociedad, consagra a lo largo de su articulado, un conjunto de derechos, deberes y de principios fundamentales que orientan este Proyecto de Acuerdo. Entre ellos se destacan: el derecho a la dignidad humana, prevalencia del interés general, derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad, derecho a la vida, derecho de acceder a los documentos públicos, el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura, derecho a la dignidad humana. Estas disposiciones no sólo configuran un marco de protección para los ciudadanos, sino que imponen deberes concretos al Estado en materia de garantías, vigilancia, transparencia y control institucional.

En este orden de ideas, el Concejo de Bogotá D.C, como suprema autoridad del Distrito Capital, en virtud de la Constitución y la Ley, y como ente autónomo en materia administrativa y presupuestal, bajo el Acuerdo 741 de 2019, tiene la facultad de expedir Proyectos de Acuerdo orientados a promover políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de los habitantes del distrito. Por ello, la creación de un **Observatorio de violencia y abuso policial en Bogotá D.C**, nace de la urgente necesidad de reconocer, documentar y entender de manera profunda y sistemática la realidad de la violencia institucional que afecta a diversos sectores de la población, especialmente a jóvenes, comunidades vulnerables y manifestantes sociales. Este fenómeno, que trasciende y se inscribe en dinámicas estructurales, requiere una mirada integral, sustentada en evidencia, que permita diseñar respuestas eficaces, democráticas y centradas en pro de los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, el presente Proyecto de Acuerdo se sustenta en los artículos **1, 2, 12, 13, 20, 22, 29, 74, 90, 93, 209**, de la **Constitución Política de Colombia**, en tanto refuerzan el deber del Estado de proteger los derechos fundamentales, garantizar la dignidad humana, asegurar el debido proceso, permitir el acceso a la información, promover la paz y establecer mecanismos de responsabilidad por el daño antijurídico causado por las autoridades. De igual forma, se

enmarca dentro de los principios de legalidad, transparencia, participación ciudadana y eficacia de la función administrativa.

Es menester precisar que la **Ley 2196 de 2022, “Por medio de la cual se expide el Estatuto Disciplinario Policial”**, consagra de manera expresa que toda actuación realizada por el personal uniformado de la Policía Nacional, debe ceñirse con el debido respeto por la dignidad humana, el debido proceso y los derechos fundamentales. Reafirmando los principios esenciales que deben orientar el comportamiento funcional de los miembros de la institución policial y reconociendo como principio y norma rectora al reconocimiento de la dignidad humana.

Por su lado, la Corte Constitucional, en su sólida jurisprudencia, estableció en la sentencia c-600-19, que toda función pública debe regirse por los valores, principios y derechos establecidos en la Constitución, en consecuencia, la autoridad policial tiene el deber de justificar de manera adecuada cualquier orden que emita, asegurando que esta sea razonable y proporcional, con el propósito de evitar actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad. Y así mismo, en su parte emotiva expresa que la función de policía además de los límites constitucionales, del derecho internacional y de los derechos humanos se encuentra sometida al principio de legalidad, a la eficacia y necesidad del uso del poder, a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de la Policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas a ciertos sectores de la población.

Adicionalmente, la sentencia C- 397 del 24 de mayo de 2006, establece:

“El respeto de la dignidad humana, esto es, del valor intrínseco del ser humano, derivado de sus atributos específicos como son la voluntad y la razón, es uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho colombiano”.

La dignidad humana constituye el pilar fundamental del ordenamiento jurídico colombiano y, por ende, del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política de 1991. Su centralidad se manifiesta tanto en su carácter de principio, como derecho autónomo, cuya protección es ineludible por parte de todas las autoridades públicas.

A nivel internacional, la propuesta encuentra respaldo en la **Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948**, especialmente en los artículos 3, 5, 9 y 19, que protegen la vida, la seguridad personal, la libertad de opinión, el derecho a no ser sometido a torturas ni detenciones arbitrarias, el derecho a recibir y difundir información sin censura. Dichos estándares hacen parte del bloque de constitucionalidad conforme al artículo 93 de la Carta Política, fortaleciendo así el fundamento normativo de esta iniciativa.

- **El artículo 3**, “*Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.*”
- **El artículo 5**, “*Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.*”
- **El artículo 9**, “*Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.*”
- **El artículo 19**, “*Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.*”

Es decir, el **Observatorio de Violencia Policial** se configura como una herramienta técnica y jurídica para garantizar los derechos fundamentales, asegurar la transparencia institucional y fortalecer el control social democrático sobre el actuar de la fuerza pública en Bogotá D.C.

III. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

¿Qué es violencia policial?

La violencia policial, también conocida como brutalidad y/o abuso policial, es el término utilizado para describir la conducta en contra de la Ley de los agentes de policía, especialmente cuando hacen uso excesivo de la fuerza en contra de la población civil. Entre los delitos más comunes cometidos por los policías se incluyen: falsos arrestos, torturas, intimidación, racismo, ataques verbales y físicos, abuso sexual, homicidio ilegítimo y amenazas a la población civil.⁴⁰ El actuar de la fuerza pública en Colombia, está delimitado bajo unos lineamientos establecidos en la Ley 2196 de 2022 “Por medio de la cual se expide el estatuto disciplinario policial”, en los artículos 45, 46 y 47, los cuales establecen las faltas y conductas indebidas de los agentes de policía durante sus funciones, tales como:⁴¹

- Causar intencionalmente daño a la integridad de las personas o de los bienes, como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza, de los demás medios coercitivos o con otros elementos no reglamentarios.
- Privar ilegalmente de la libertad a una persona.
- Realizar sobre una persona conducta indebida, que implique tocamientos de naturaleza o contenido sexual.
- Acosar, perseguir u hostigar a las personas, con fines sexuales, de manera física, verbal o mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Impedir a cualquier persona la grabación, por cualquier medio tecnológico de información y comunicación, de los procedimientos de policía sin justificación legal, encontrándose en servicio o acceder o manipularlos para eliminar su contenido, entre otras.

Además, según lo establecido en la Ley 599 de 2000 en el “Artículo 416. Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto” del código penal, determina que: *El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.*⁴² Sin embargo, aunque en Colombia existen estas Leyes que buscan proteger los derechos de la ciudadanía y guiar la conducta de los policías, durante los últimos años la policía colombiana ha estado involucrada en múltiples casos de abuso policial, principalmente en el marco de las protestas.

Contexto internacional

La violencia policial es una problemática compleja que está arraigada en muchas ciudades del mundo, afectando no solamente la imagen y el funcionamiento de la institución policial, sino también generando un ambiente de inseguridad y desconfianza por parte de la población. En Latinoamérica la violencia policial es una realidad que complejiza las dinámicas sociales, en Brasil durante el 2020 fueron asesinadas 6.400 personas por agentes de policía, según indicó la

⁴⁰ Amnistía Internacional: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/reportajes/violencia-policial/>

⁴¹ Función pública:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=176046#:~:text=Es%20el%20conjunto%20de%20mecanismos,conforme%20con%20las%20normas%20vigentes.>

⁴² Secretaría Distrital de Gobierno:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html#:~:text=ART%C3%8DCULO%20416.,del%20empleo%20o%20cargo%20p%C3%BAblico.

ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) esta es la cifra más alta desde que existen registros.⁴³ Por otra parte, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia registraron en los últimos años un elevado número de casos de violencia policial.

En el 2019, Chile vivió uno de los peores momentos a raíz de la violencia estatal que llevó a que oficiales de carabineros cometieran violaciones de derechos humanos a la población civil. Según la investigación de Amnistía Internacional, 347 personas sufrieron lesiones oculares en su mayoría por impactos de balines y 5.558 víctimas de violencia institucional, de las cuales 1.938 eran personas lesionadas por armas de fuego y 674 por lesiones graves.⁴⁴

Colombia no es ajena a esta problemática, según el artículo “Recordando a las víctimas de violencia policial” de la Universidad de los Andes, durante las protestas de 2021 se registraron 5.340 casos de violencia policial en todo el país, 103 casos de lesiones oculares, 40 casos de violencia homicida y 35 casos de violencia sexual.⁴⁵ Evidenciando la similitud en el actuar policial durante las protestas y las formas de represión de los países de América Latina.

Contexto Nacional

Colombia es un país marcado por una historia de conflictos armados y desigualdades sociales profundas. En este contexto, la violencia policial se ha convertido en una expresión cotidiana del poder estatal, especialmente visible durante las protestas sociales. Más allá de un problema de conducta individual o de hechos aislados, la violencia policial en Colombia debe entenderse como un fenómeno estructural, intrínsecamente ligado al modelo de seguridad, al autoritarismo institucional y a la exclusión social.

La violencia policial en Colombia está estrechamente ligada a la herencia del conflicto armado interno. Durante los años 1946 y 1966, lo que se denominó como la época de “La Violencia”, la policía nacional fue empleada para reprimir a las comunidades rurales y urbanas y mantener el régimen conservador.⁴⁶ Durante la época de los 80s y los 90s, en pleno auge del narcotráfico y el fortalecimiento de los grupos guerrilleros, la Policía Nacional adscrita al Ministerio de Defensa operó bajo lógicas militares para combatir el conflicto interno, sin embargo, en muchos casos incurrieron en abusos, ejecuciones extrajudiciales y represión contra la población civil. Para finales de los años 90s y a comienzos de los 2000, según el informe de Human Rights Watch, “Colombia: The 'Sixth Division': Military-Paramilitary Ties and US Policy” (2001), miembros de la policía facilitaban operaciones paramilitares, participaban en masacres o no intervenían activamente para evitar violaciones de derechos humanos.⁴⁷ Los abusos policiales han estado ligados a las dinámicas sociales colombianas, evidenciando una tendencia histórica de represión, influenciada en muchos casos por intereses políticos y económicos que han instrumentalizado a la fuerza pública con fines particulares y no para garantizar la protección de la población civil.

⁴³ Human Rights Watch: [https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/brazil#:~:text=Seguridad%20p%C3%BAblica%20y%20conducta%20policial,-Tras%20dos%20a%C3%B1os&text=Agentes%20de%20polic%C3%ADa%20provocaron%20la,de%20Seguridad%20P%C3%BAblica%20\(FBSP\)](https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/brazil#:~:text=Seguridad%20p%C3%BAblica%20y%20conducta%20policial,-Tras%20dos%20a%C3%B1os&text=Agentes%20de%20polic%C3%ADa%20provocaron%20la,de%20Seguridad%20P%C3%BAblica%20(FBSP)).

⁴⁴ Amnistía Internacional: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr22/3133/2020/es/>

⁴⁵ Universidad de los Andes: <https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/derecho/recordando-las-victimas-de-violencia-policial>

⁴⁶ POLARIZACIÓN POLÍTICA Y VIOLENCIA DURANTE “LA VIOLENCIA”; 1946-1963. <https://economia.uniandes.edu.co/sites/default/files/imagenes/eventos/mario-chacon.pdf>

⁴⁷ <https://www.hrw.org/es/report/2001/10/04/la-sexta-division/relaciones-militares-paramilitares-y-la-politica-estadounidense>

La violencia policial se intensificó hacia la población colombiana durante las protestas de la última década, según los reportes de la ONG Temblores entre 2017 y 2019 hubo 39.613 casos de violencia física, y para el año 2020, hubo en promedio 8.2 casos de violencia policial por semana.⁴⁸ **Durante el 2021, se registraron 3,546 detenciones en contextos de protestas, sin embargo, según el Sistema de Información Misional -SPOA- de la Fiscalía General de la Nación para el año 2023, sólo 537 personas habían sido judicializadas por hechos relacionados con las protestas sociales de 2021. Lo que significa que aproximadamente el 82,6% de las personas fueron detenidas ilegalmente.**⁴⁹ Finalmente en el 2022, se registraron 341 casos de violencia policial los cuales dejaron 552 víctimas.⁵⁰ Para el año 2024, la plataforma Grita registro un total de 109 hechos de violencia policial en Colombia, de los cuales 10 casos corresponden a violencia homicida, 91 a violencia física y 3 a violencia sexual. Dejando como resultado al menos 144 víctimas, además de estos tres tipos de violencias la plataforma Grita registró 26 casos de violencia por discriminación, 32 casos de violencia administrativa y judicial, 36 casos de detención arbitraria, 48 casos de hostigamiento, 29 casos de procedimiento irregular y 5 casos de tortura.⁵¹

Otros casos de violencia policial

La brutalidad policial no solamente se ve presente en el marco de las protestas sociales, sino también en la cotidianidad de la población colombiana, especialmente con los más vulnerables. **Las cifras de la ONG Temblores, revelan que para 2024 el 54,12% del total de casos de violencia policial ocurrieron en contra de personas con alguna caracterización de vulnerabilidad y el 80% de los casos de violencia homicida fueron cometidos contra personas con características de vulnerabilidad.**⁵² Evidenciando claramente que la fuerza pública no sólo actúa con desproporción, sino que lo hace selectivamente. El abuso policial revela una profunda falla estructural en el modelo de seguridad del país, donde el uso de la fuerza reemplaza el servicio a la ciudadanía y la protección de los derechos humanos.

Algunas investigaciones han revelado que desde el 2019 Colombia ha experimentado un aumento significativo en la violencia policial principalmente en sanciones masivas, represión durante las protestas sociales y hacinamiento extremo en los centros de detención. **Según el informe “La violencia uniformada: Una radiografía del abuso policial en Colombia (2019-2023)” se impusieron más de 7,564,098 multas, mayoritariamente de tipo 2 y tipo 4, principalmente en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia, siendo la multa tipo 2 quien representa el 55% del total de las multas impuestas, además, se impusieron más de 5,723,696 medidas correctivas, lo que equivale a más del 10% de la población colombiana.**⁵³

⁴⁸ ONG TEMBLORES:

<https://www.temblores.org/reformapolicialya#:~:text=Posteriormente%2C%20en%20el%202021%2C%20%2D,policia%20que%20dejaron%20552%20v%C3%ADctimas.>

⁴⁹ Ibidem

⁵⁰ ONG TEMBLORES:

<https://www.temblores.org/reformapolicialya#:~:text=Posteriormente%2C%20en%20el%202021%2C%20%2D,policia%20que%20dejaron%20552%20v%C3%ADctimas.>

⁵¹ ONG TEMBLORES: <https://www.temblores.org/post/reporte-de-hechos-de-violencia-policial-en-colombia-durante-2024#:~:text=Cifras%20generales,y%203%20a%20violencia%20sexual.>

⁵² ONG TEMBLORES: <https://www.temblores.org/post/reporte-de-hechos-de-violencia-policial-en-colombia-durante-2024#:~:text=Caracterizaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad%20de%20las%20v%C3%ADctimas%20El,de%20personas%20con%20alguna%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad.>

⁵³ “La violencia uniformada: Una radiografía del abuso policial en Colombia (2019-2023)”: <https://co.boell.org/sites/default/files/2023-10/informe-violencia-policia.pdf>

La violencia policial ha tenido graves repercusiones en la sociedad colombiana, ha debilitado la confianza hacia la Policía Nacional (PONAL), ha debilitado el tejido social y ha profundizado el descontento social, según el informe “La violencia uniformada: Una radiografía del abuso policial en Colombia (2019-2023)” **Entre enero de 2019 y septiembre de 2023, se presentaron 37.050 quejas en 1.565 estaciones de policía en todo el país. Llevando la imagen de la policía nacional a una desfavorabilidad del 50% y colocando a la institución como una de las instituciones del Estado en la que la población menos confía.**⁵⁴ Para el año 2024, según la encuesta de la OCDE sobre los factores que impulsan la confianza en las instituciones públicas, solo el 39% de los colombianos manifiesta confiar en la Policía Nacional. Esto representa una disminución de 11 puntos porcentuales en el nivel de confianza en comparación con el año anterior, evidenciando un deterioro significativo en la percepción ciudadana hacia la fuerza pública.

Panorama en Bogotá

Bogotá en los últimos años ha sido escenario de una gran cantidad de manifestaciones sociales, en medio de este panorama la actuación de la policía metropolitana de Bogotá (MEBOG) y el anteriormente conocido como escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD), quien fue remplazado en el 2023 por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), ha recibido fuertes críticas debido a los procedimientos cometidos durante las protestas, los cuales han denunciado por la violación a los derechos humanos. Desde el año 2019, se han conocido múltiples casos de homicidios, torturas, detenciones arbitrarias e ilegales y violencia sexual por parte de miembros de la policía de Bogotá.⁵⁵ Durante las manifestaciones pacíficas del 23 de noviembre de 2019, los miembros del extinto ESMAD accionaron de manera desproporcionada ante los manifestantes una escopeta calibre 12, la cual contenía una bolsa de material textil que contiene múltiples perdigones de plomo denominada “**bean bag**” y que impactó en la cabeza del estudiante de bachillerato Dilan Cruz ocasionándole la muerte,⁵⁶ Esto provocó una profunda indignación ciudadana y puso en el centro del debate el accionar de la fuerza pública y si los mecanismos de denuncia contra el abuso policial son efectivos.

Para septiembre de 2020, Javier Ordoñez un ciudadano bogotano murió a manos de la policía por el uso desproporcionado de la fuerza, esto generó una serie de protestas en Bogotá en contra del abuso policial, sin embargo, las protestas desencadenaron uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos acontecido en la historia de la capital del país por parte de la fuerza pública. Según el informe publicado por la Alcaldía de Bogotá en cabeza de la alcaldesa Claudia López y respaldado por las Naciones Unidas, se confirmó que durante el 9 y el 11 de septiembre, 75 personas resultaron heridas por armas de fuego y 11 personas fallecieron en manos de la policía.⁵⁷

El paro nacional del 2021 fue un hito en la historia de Colombia, no sólo porque el estallido social mostró el inconformismo generalizado de la población bogotana, sino porque en el marco de las protestas que iniciaron el 28 de abril y que se extendieron durante el año, la violencia policial se elevó de manera exponencial en la capital, **según las denuncias de la Personería de Bogotá, en junio se presentaron 373 casos de traslado de personas que no fueron llevadas a los lugares autorizados para ello (Centros de Traslado por Protección), sino que fueron llevados a estaciones de Policía,** incumpliendo así la normatividad establecida y aumentando con ello el riesgo a vulneraciones a

⁵⁴ La violencia uniformada: Una radiografía del abuso policial en Colombia (2019-2023)”:

<https://co.boell.org/sites/default/files/2023-10/informe-violencia-policia.pdf>

⁵⁵ Informe sobre la gravedad de la violencia policial en Bogotá presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20210610/asocfile/20210610164139/informe_cidh.pdf

⁵⁶ Disponible en la web: <https://www.unilim.fr/trahs/5530>

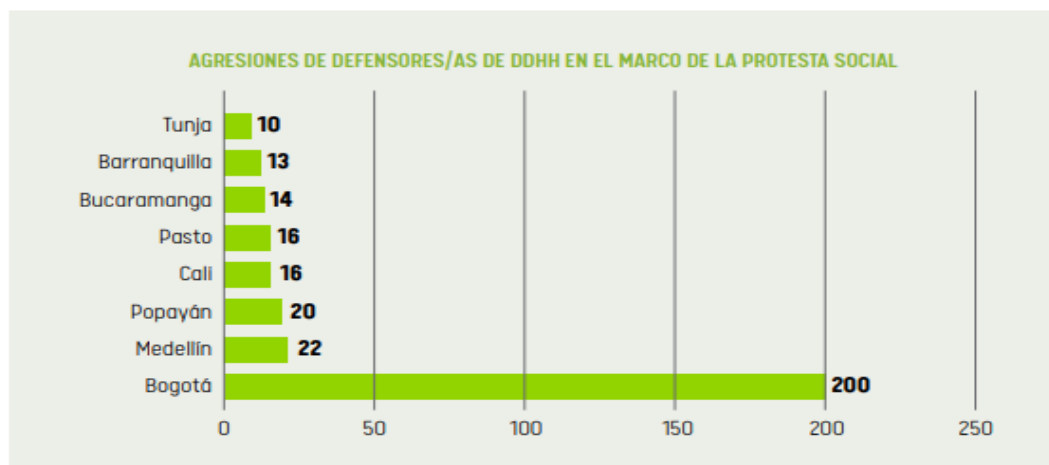
⁵⁷ France 24: <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20211214-protestas-colombia-informe-policias-asesinatos>

los derechos humanos, además, estos hechos de violencia policial no fueron los únicos cometidos por la fuerza pública. **Durante el mismo año se denunciaron al menos 103 casos de personas que perdieron uno de sus ojos** a causa del uso indiscriminado de proyectiles de goma contra la población bogotana, como es el caso de Sara Cárdenas quien, en compañía de su mamá, Sandra Pérez, fueron agredidas en la localidad de suba por los agentes de policía y el extinto escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD).

Según el relato de la señora Sandra, tres agentes se pararon frente a ellas y empezaron a insultarlas gritándole, **“Maldita perra, váyase para su casa y llévase a su perrita”**, momentos después accionaron sus armas, esa noche Sandra tuvo 11 impactos en casi todo el cuerpo: el ojo, el cuello, el seno, la costilla, el estómago, la vagina, la pelvis. Sara por su parte recibió un impacto de bala en el ojo izquierdo que hizo que en 2023 lo reemplazaran por una prótesis. Sin embargo, pese a las denuncias realizadas tuvieron que salir del país meses después de lo ocurrido por las amenazas constantes que recibían por parte de agentes de policía.⁵⁸

Por otro lado, la Fuerza Pública es señalada como responsable en el 9.6% de los casos totales de agresiones contra defensores de derechos humanos, siendo el 2021 el año en el que se registraron un total de 206 casos de este tipo.⁵⁹ Para el 2022, Bogotá sobresale como el epicentro de estas agresiones, con un total de 200 casos, lo que representa el 53% del total nacional.

agresiones contra defensores de Derechos Humanos durante las protestas (2022)



Fuente: La violencia uniformada: Una radiografía del abuso policial en Colombia (2019-2023)⁶⁰

Para 2024, la ciudad de Bogotá con el 27,3%, registra el mayor número de casos de violencia policial en comparación con otras regiones del país, además, la ONG Temblores al observar el número de casos por millón de habitantes se encontró que el departamento que registró más casos sigue siendo Bogotá con 7,1 casos.⁶¹

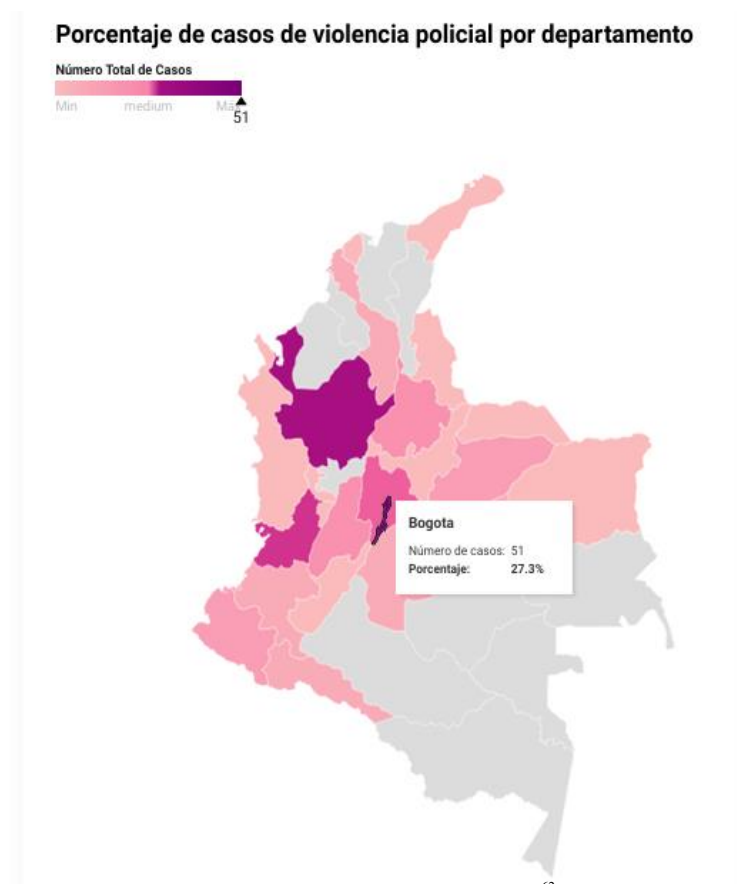
⁵⁸ El país: <https://elpais.com/america-colombia/2024-06-04/las-agresiones-del-esmad-despues-de-2021-las-amenazas-llevaron-al-exilio-a-la-familia-de-una-victima-de-violencia-ocular.html>

⁵⁹ La violencia uniformada: Una radiografía del abuso policial en Colombia (2019-2023): <https://co.bosell.org/sites/default/files/2023-10/informe-violencia-policial.pdf>

⁶⁰ Ibidem

⁶¹ ONG Temblores: <https://www.temblores.org/post/reporte-de-hechos-de-violencia-policial-en-colombia-durante-2024#:~:text=Bogot%C3%A1%20registra%20el%20mayor%20n%C3%BAmero,%2C%20con%207%2C1%20casos.>

Porcentaje de casos de violencia policial en Bogotá (2024)



Fuente: ONG TEMBLORES⁶²

Caracterización de violencia policial

El fenómeno de abuso policial en Bogotá, especialmente durante el periodo entre 2019 y 2024, permite concluir que el abuso policial en la capital colombiana no es un fenómeno aislado, sino una práctica sistemática que responde a un patrón institucional profundamente arraigado. Las múltiples denuncias y casos documentados muestran que el uso desproporcionado de la fuerza es una característica principal en la actuación policial, especialmente durante contextos de movilización social. Naciones Unidas ha señalado que, durante las protestas del Paro Nacional de 2021, se produjeron múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de policía.⁶³

La discriminación y el perfilamiento racial o socioeconómico también son elementos clave del abuso policial en Bogotá. Las acciones de control suelen centrarse en barrios populares y zonas periféricas de la ciudad, donde los jóvenes de sectores vulnerables son frecuentemente objeto de requisas, detenciones arbitrarias y otras formas de hostigamiento.

⁶² <https://www.temblores.org/post/reporte-de-hechos-de-violencia-policial-en-colombia-durante-2024>

⁶³ <https://www.hchr.org.co/onu-ddhh-en-colombia/>

Según el estudio realizado por ILEX Acción Jurídica, “ABUSO POLICIAL Y DISCRIMINACIÓN RACIAL HACIA AFRODESCENDIENTES: ESTUDIO DE CASO EN LAS LOCALIDADES DE USME Y KENNEDY DE BOGOTÁ, D.C”, revelo que las personas negras tienen 2.67% de probabilidades de interactuar con la policía que una persona de piel blanca o mestiza y 2,57% de probabilidades de ser detenidas, llevadas al área restringida, multadas o requisadas. además, son más propensas a ser víctimas de perfilamiento racial, imposición de medidas correctivas, violencia verbal y física, hostigamientos.⁶⁴

En el artículo “*Violencia policial y juventud. Una revisión teórica*”, la escritora Mariana Fernández analiza la violencia ejercida por las fuerzas policiales contra jóvenes pertenecientes a sectores populares en la Argentina contemporánea. Esta problemática, que evidencia dinámicas estructurales de exclusión y control social, presenta notables similitudes con la situación que se vive en Colombia. Fernández sostiene que “**la violencia policial hacia los jóvenes de sectores populares no es un hecho aislado ni excepcional, sino un fenómeno estructural**”, lo que permite entenderla como parte de una lógica sistémica y persistente en contextos de desigualdad social.

La impunidad institucional es otro rasgo característico de la violencia policial, a pesar de las denuncias presentadas por las víctimas, los familiares y entidades nacionales e internacionales, las respuestas institucionales han sido insuficientes o nulas. La ONG Temblores mediante el informe “El Estado de la impunidad” publicado en 2023, denuncia que en la Fiscalía existen prácticas arraigadas que favorecen a los miembros de la fuerza pública. Ya que de un total de 5.837 denuncias que existen en la Fiscalía General de la Nación, se han archivado 2.804 denuncias, casi la mitad de los casos denunciados, por otro lado, de los 7.383 casos de violencia policial, solo se han obtenido 93 sentencias condenatorias,⁶⁵ demostrando la existencia de un sistema de justicia que, lejos de sancionar de manera efectiva a los responsables, contribuye a la reproducción del abuso policial mediante la inacción.

Ejemplos Internacionales

Red Global Contra La Violencia Policial

La ONG Temblores también creó la Red Global Contra La Violencia Policial como un espacio donde organizaciones de 14 países luchan contra el abuso de la fuerza pública y la violación de derechos humanos por parte de las instituciones policiales. La Red tiene como objetivos recopilar información y denuncias sobre casos de violencia policial alrededor del mundo para crear acciones colectivas globales que tengan como objetivo la erradicación de la violencia policial, garantizar los derechos para las personas vulnerables, exigirle a los estados gobernar desde el respeto por los derechos humanos para salvaguardar la democracia y la integridad de cada una de las personas habitantes y abordar temas como la represión por parte de la fuerza pública en el espacio público y los abusos de poder.⁶⁶

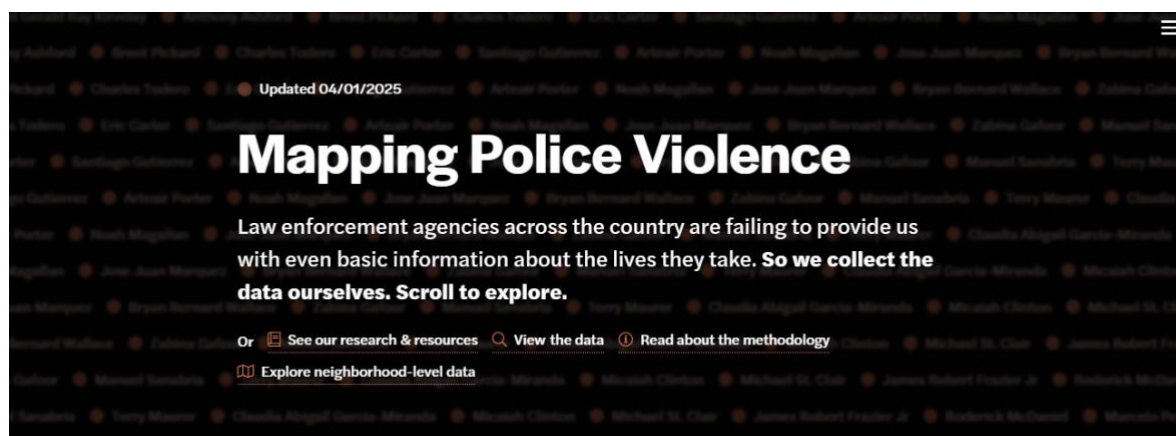
Estados Unidos

⁶⁴ “ABUSO POLICIAL Y DISCRIMINACIÓN RACIAL HACIA AFRODESCENDIENTES: ESTUDIO DE CASO EN LAS LOCALIDADES DE USME Y KENNEDY DE BOGOTÁ, D.C”: <https://ilexaccionjuridica.org/wp-content/uploads/2022/03/Abuso-Policial-Final-web.pdf>

⁶⁵ <https://www.swissinfo.ch/spa/denuncian-que-fiscal%C3%ADa-favorece-impunidad-en-cr%C3%ADmenes-de-polic%C3%ADa-en-colombia/48396594>

⁶⁶ ONG TEMBLORES: <https://www.temblores.org/red-global-contra-la-violencia-policial>

La Universidad de Harvard creó el Observatorio **Mapping Police Violence**, que se ha encargado de recopilar y actualizar los datos sobre las personas asesinadas a manos de la fuerza pública en Estados Unidos.⁶⁷ Mediante sus canales digitales difunde e informa los casos de violencia policial presentados en Estados Unidos a través de gráficos estadísticos, los cuales se van actualizando mensualmente y trimestralmente los casos de años anteriores para garantizar que la base de datos se mantenga actualizada.⁶⁸ Por medio del Observatorio se busca impulsar un cambio transformador y que se utilicen los datos para brindar mayor transparencia y rendición de cuentas a los departamentos de policía con el fin de erradicar la violencia policial en los Estados Unidos.⁶⁹



Fuente:

Mapping Police Violence⁷⁰

México

En México, la violencia policial es un fenómeno complejo que ha generado un ambiente de desconfianza hacia la policía federal (PF) por parte de la sociedad en general. La creación del **Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA)** surge a través del trabajo conjunto de ocho organizaciones a nivel nacional dedicadas a defender los derechos humanos, especialmente de la población joven, como respuesta de la sociedad civil a la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública.⁷¹

El observatorio se plantea como una plataforma que reúna información y visibilice los abusos de autoridad ejercidos por la fuerza pública e incidir para mitigar las detenciones arbitrarias por parte de las autoridades de seguridad, teniendo en cuenta que el mal actuar policial pone en riesgo los derechos como el de la seguridad, el uso del espacio público, el acceso a la justicia y a la igualdad.⁷² Renace, una de las organizaciones cofundadoras del observatorio nacional de detenciones arbitrarias, brinda dentro del observatorio herramientas y asesoramiento en defensa jurídica a la población en caso de sufrir detenciones arbitrarias.⁷³ Además, la creación de la App “Sindea” por parte del Observatorio permite que los

⁶⁷ Disponible en la web: <https://mappingpoliceviolence.org/about>

⁶⁸ <https://mappingpoliceviolence.us/>

⁶⁹ Harvard University: <https://repository.gheli.harvard.edu/repository/13377/>

⁷⁰ <https://mappingpoliceviolence.org/>

⁷¹ https://www.youtube.com/watch?v=SG_A6tBf5P4

⁷² Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias: <https://ondamexico.org/que-es-el-observatorio-nacional-sobre-detenciones-arbitrarias/>

⁷³ https://www.youtube.com/watch?v=SG_A6tBf5P4

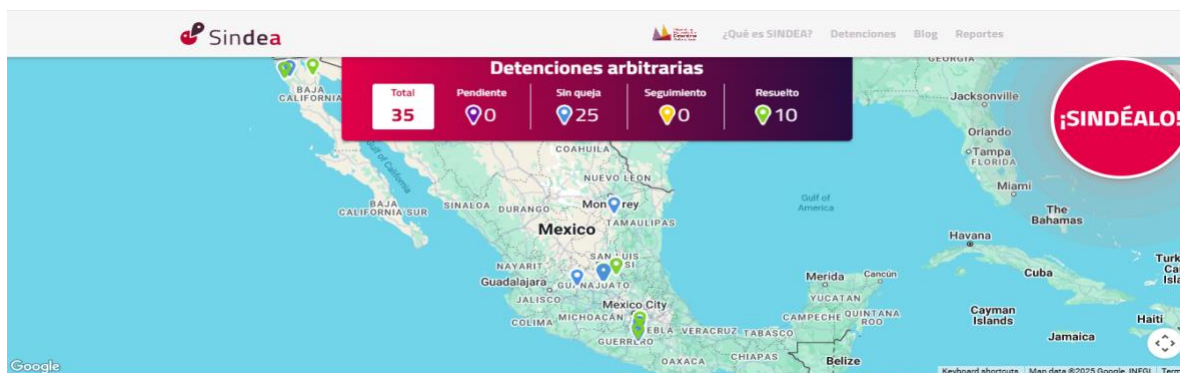
ciudadanos pueden reportar en tiempo real casos sobre detenciones arbitrarias o ilegales con el fin de que posteriormente se genere un acompañamiento y orientación por parte del Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias y así presentar una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.⁷⁴

¿Cómo funciona la App Sindea?

Para acceder a la aplicación Sindea puede hacerse directamente desde el sitio web del Observatorio Nacional de Detención Arbitraria o descargándola en las plataformas como Google Play y App Store. La plataforma proporciona datos sobre detenciones arbitrarias en tiempo real, así como recursos de información sobre qué son las detenciones arbitrarias. Por otra parte, mediante el botón ¡SINDEALO! Se puede acceder fácilmente al panel de denuncia donde la población mexicana puede reportar los casos de detención arbitraria.



Fuente: Observatorio Nacional de Detención Arbitraria⁷⁵



⁷⁴ App: <https://sindea.org.mx/>

⁷⁵ <https://ondamexico.org/datos/>

Fuente: Sindea⁷⁶

Estas herramientas son claves para la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho, ya que garantiza que la fuerza pública actúe dentro del marco legal, además, su labor no solo protege a las víctimas, sino que también fortalece la democracia, la transparencia y el sistema judicial del país.

Ejemplos nacionales

La **ONG Temblores** creó el Observatorio de violencia policial en Colombia como respuesta al incremento de los casos de violencia policial cometidos por miembros de la policía nacional, teniendo en cuenta que uno de sus enfoques es la erradicación de la violencia policial, así como la de promover y defender los derechos humanos. Por medio del observatorio de violencia policial, especialmente a través de la plataforma Grita se recepciona, verifica y registra casos de violencia policial, además, se busca que por medio de esta plataforma a la ciudadanía se le facilite denunciar los casos de violencias policiales.

La plataforma Grita le permite a la ciudadanía realizar dos tipos de denuncias.

1. La persona que sea víctima directa de algún tipo de violencia por parte de la fuerza pública podrá denunciar de forma rápida y eficaz mediante la casilla **VÍCTIMA** en la plataforma.
2. Las personas que sean testigos sobre casos de violencia por parte de la fuerza pública podrán realizar la denuncia mediante la casilla **TESTIGO** directamente desde la plataforma Grita



Fuente: ONG Temblores⁷⁷

El observatorio de violencia policial de la ONG Temblores, creó la **Clínica jurídica Policarpa** con el fin de prestar servicios legales gratuitos en casos sobre violencia policial a las poblaciones que no cuentan con los recursos económicos para costear una asesoría legal y acceder a la justicia.

⁷⁶ <https://sindea.org.mx/>

⁷⁷ <https://www.temblores.org/>



Fuente:

ONG Temblores⁷⁸

Dicha iniciativa toma una relevancia importante en el país teniendo en cuenta que, en el canal de denuncia virtual de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, llamado “ADENUNCIAR”, no cuenta con la opción para realizar denuncias sobre casos de abuso policial.⁷⁹

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La creación del Observatorio Distrital de Violencia Policial se encuentra estrechamente alineada con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial con el **ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas**, concretamente, en metas específicas como la **16.1**, que busca reducir significativamente todas las formas de violencia; la **16.3**, orientada a promover el Estado de derecho y garantizar el acceso igualitario a la justicia; y la **16.6**, que apunta al fortalecimiento de instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles.

Asimismo, la iniciativa se relaciona con el **ODS 5: Igualdad de Género**, particularmente con la **meta 5.2**, que plantea la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres para el año 2030, conforme a lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este contexto, la implementación del Proyecto de Acuerdo que da vida al observatorio se configura como una herramienta estratégica clave para prevenir y reducir la violencia policial en la ciudad.

Relación con Política Pública Distrital

La creación del Observatorio Distrital de Violencia Policial tiene relación con los lineamientos establecidos en el **CONPES 008 de 2019**, el cual establece la Política de Juventud en Bogotá 2019-2030, y donde se promueve la garantía de los derechos humanos de las y los jóvenes, así como el fortalecimiento de entornos seguros, por lo tanto, uno de los componentes claves del **CONPES** es el compromiso institucional en la formación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, bajo estos lineamientos, la Administración Distrital para el año 2024, capacitó más de 1.400 uniformados

⁷⁸ <https://www.temblores.org/>

⁷⁹ <https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/default.aspx>

en temas de derechos humanos, igualdad de género y trato digno.⁸⁰ Estas acciones no solo evidencian el cumplimiento de las metas propuestas en el **CONPES**, sino que también refuerzan la necesidad de contar con instrumentos como el Observatorio, que permitan hacer seguimiento, evaluar impactos y garantizar la coherencia entre la formación institucional y las prácticas en el territorio.

Trabajo comunitario

IV. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL ESTADO

3.1 MARCO JURÍDICO.

A. Constitución Política de Colombia de 1991.

Artículo 1. *“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”*

Este artículo resalta la autonomía de las entidades territoriales, facultando al Concejo de Bogotá, D.C. para expedir Proyectos de Acuerdo en favor del interés general. Y bajo, el derecho fundamental de la dignidad humana, como valor base del Estado Colombiano, como principio constitucional y derecho fundamental, el cual protege la autonomía individual.

Artículo 2. *“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y **garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución**; facilitar la participación de todos en las decisiones que los **afectan** y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y **asegurar la convivencia pacífica** y la vigencia de un orden justo.”*

En este sentido, el Estado tiene el deber de velar por el respeto y la garantía de los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política. Esto conlleva, además, el compromiso de asegurar la convivencia pacífica, lo cual implica promover la efectividad real de dichos principios y derechos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es decir, la creación de un Observatorio Policial se justifica como un mecanismo para fortalecer el control social y la convivencia pacífica.

Artículo 12. *“**Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**”*

El Estado tiene el deber de prevenir y sancionar cualquier abuso de autoridad. La creación de un Observatorio de Violencia Policial, puesto que, permite vigilar y garantizar el respeto a este derecho fundamental, y su implementación fortalecerá los mecanismos de protección de los derechos humanos.

Artículo 13. *“Todas las personas nacen libres e **iguales ante la ley**, recibirán la **misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación** por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”*

⁸⁰ <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/seguridad/derechos-humanos-en-bogota-mas-de-1400-policias-capacitados-2024>

*El Estado promoverá las condiciones para que la **igualdad sea real y efectiva** y **adoptará medidas** en favor de grupos discriminados o marginados.*

*El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y **sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan**”.*

Garantizar la igualdad real y efectiva es una obligación del Estado, lo que implica evitar toda forma de discriminación y brindar protección especial a las personas en situación de vulnerabilidad. En tal sentido, este principio resulta fundamental para la construcción de una sociedad más justa e incluyente, orientada a la materialización del principio de igualdad ante la ley.

Artículo 20. *“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.*

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”

El derecho a informar y recibir información veraz e imparcial, es esencial para el ejercicio de la ciudadanía activa y el control social. En este marco, la creación de un Observatorio de Violencia Policial, permite garantizar el acceso a información clara y objetiva sobre el actuar institucional. Así, se promueve la transparencia y se fortalece la participación democrática.

Artículo 22. *“ La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.”*

La paz vista como un derecho que tiene todo ciudadano y el deber del Estado por cumplirlo y velar con distintos mecanismos por ello.

Artículo 29. *“ El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.*

*Nadie podrá ser juzgado sino **conforme a leyes preexistentes** al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.*

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.”

Visto el debido proceso como un derecho fundamental, de aplicación inmediata y que constituye una garantía de legalidad procesal que protege; la libertad y la seguridad jurídica. Es decir, quien se sienta amenazado o vulnerado por algún acto u omisión de la autoridad o de los sujetos de la relación procesal, podrá invocar y hacer efectivo los derechos que implícitamente hacen parte del debido proceso.

Artículo 74. *“Todas las personas tienen derecho a **acceder a los documentos públicos** salvo los casos que establezca la ley ...”*

El derecho a la información no solo abarca el derecho a informar, sino también a estar informado, haciendo posible y alcanzable el ejercicio del derecho a la información, establece la necesidad de informar a todo el distrito de las diferentes vulneraciones de los derechos por parte de la Policía Nacional a los ciudadanos.

Artículo 90. *“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.*

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este.”

La obligación de reparar los daños antijurídicos que provengan de cualquier autoridad pública y se configura con la existencia de un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

Artículo 93. *“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.*

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (...)”

El artículo 93 constitucional hace referencia al bloque de constitucionalidad, logrando de esta manera garantizar los derechos humanos

Artículo 209. *“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.*

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

Consagra los principios orientadores de la administración pública, tales como los principios de igualdad, eficacia, celeridad, imparcialidad y moralidad, es decir esta función administrativa debe estar orientada bajo los mencionados principios. Y así, nace la necesidad de la creación de un Observatorio de Violencia Policial.

Artículo 218. *“La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.*

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.”

B. Ámbito Legal.

I. Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana"

Esta ley tiene un carácter preventivo, buscando establecer las condiciones para la convivencia dentro del territorio nacional, puesto que vela por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas tanto naturales, como jurídicas, haciendo énfasis en el ejercicio de poder y la actividad de la Policía Nacional de Colombia, donde establece los siguientes objetivos específicos:

“1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trascienden a lo público.

2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.

3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y solución pacífica de desacuerdos entre particulares.

4. Definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de Policía.

5. Establecer la competencia de las autoridades de Policía en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía territorial.

6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.”

Esta ley es de gran importancia puesto que en sus objetivos precisa la importancia de la solución pacífica de las controversias y desacuerdos de los conflictos. Y así, lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos, que es lo que quiere realmente lograr este proyecto de acuerdo por medio del Observatorio de Violencia Policial. Aunado, los principios de la presente ley van encaminados a la protección de la vida y de los derechos humanos.

II. LEY 1257 DE 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”

La presente ley tiene por objetivo la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. por medio de normas de sensibilización, prevención, posteriormente sanción de la violencia y discriminación. Es decir, es creada para la protección integral de la mujer. Sentando la base y precedente así, de evitar todo tipo de violencia en contra de la mujer, bajo la necesidad de un Observatorio de Violencia Policial para la no repetición.

III. Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.”

Esta ley tiene como propósito garantizar medidas de reparación integral y simbólica, resaltando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Si bien su eje principal se centra en las víctimas del conflicto armado interno, la norma sienta principios orientadores aplicables a toda persona que sea reconocida como víctima de violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, establece de manera expresa un conjunto de derechos fundamentales que resultan pertinentes para la formulación del presente Proyecto de Acuerdo, en tanto este busca visibilizar, proteger y garantizar los derechos de las víctimas de violencia policial en el Distrito Capital.

Adicionalmente, la Ley 1448 de 2011 proporciona un conjunto de derechos que resultan fundamentales como **referentes orientadores** para este Proyecto de Acuerdo, en tanto expresan los estándares mínimos que deben guiar la actuación estatal frente a las personas reconocidas como víctimas de cualquier forma de violencia, incluyendo la ejercida por agentes de la fuerza pública. Entre estos derechos se destacan:

1. *Derecho a la verdad, justicia y reparación.*
2. *Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.*
3. *Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.*
4. *Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.*
5. *Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral.*
6. *Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque diferencial.*

IV. Ley 2196 de 2022 “Por medio de la cual se expide el estatuto disciplinario policial”

Esta ley regula el comportamiento del personal uniformado de la Policía Nacional y la misma se aplicará para efectos de que se transgredan derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad y dan lugar a la activación de la acción disciplinaria contenida en esta ley. Reconoce la dignidad humana como principio y norma rectora, puesto que, las actuaciones disciplinarias se harán con el respeto debido a la dignidad humana, al debido proceso y los derechos fundamentales.

V. Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”

La presente ley tiene como objeto el derecho de acceso a la información pública, la información debe estar al alcance del público, es decir facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte. Es decir, establece el acceso a la información pública como un derecho fundamental. Entiéndase, por información pública, aquella que la Entidad genera, obtiene, adquiere o controla durante el desarrollo de las funciones.

C. Acuerdos Distritales

I. Acuerdo 871 de 2023.

Por medio de este acuerdo se crean medidas para el fortalecimiento de la red de observatorios distritales, se adoptan lineamientos para su funcionamiento y consolidarla como una instancia de articulación para la producción, sistematización, intercambio y consulta del conocimiento relevante para el proceso de toma de decisiones de la política pública en el Distrito Capital.

II. Acuerdo 676 DE 2017.

El Acuerdo 676 de 2017 del Concejo de Bogotá establece lineamientos para prevenir la violencia basada en género y el feminicidio en la ciudad. Este acuerdo es relevante para la creación de un Observatorio de Violencia Policial, ya que sienta un precedente en la formulación de políticas públicas orientadas a la prevención de violencias específicas y a la protección de los derechos humanos.

El mencionado acuerdo sienta bases para abordar la violencia de género, donde se incluyen estrategias de prevención, educación y atención de víctimas. El presente acuerdo es visto como modelo para el Observatorio de Violencia Policial, proporcionando una estructura para el diseño de estrategias que aborden la violencia de género ejercida por la Policía Nacional.

D. Jurisprudencia.

- I. **Sentencia C-600-19:** En la presente sentencia del magistrado ponente Alberto Rojas Ríos, establece en su magna argumentación que el concepto “Policía” es de naturaleza constitucional, puesto que hace referencia a un conjunto de potestades y funciones estatales dirigidas a la preservación del orden público y convivencia pacífica entre las personas. Y de esta manera, la Corte determinó que toda función pública está sometida a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, por lo que, la autoridad de policía está en la obligación de motivar adecuadamente el acto mediante el cual se expide la orden de policía, con el fin que la misma sea razonable y proporcional, y así evitar el ejercicio arbitrario de la autoridad. Y que esta facultad policial conlleva unos límites como lo es la Constitución Política de Colombia y el derecho internacional de los derechos humanos, todo en razón de que las medidas de Policía no podrán traducirse en **discriminaciones injustificadas** a ciertos sectores de la población.
- II. **Sentencia C- 396-06:** En la presente sentencia, el magistrado ponente Jaime Araujo Renteria, a lo largo de la sentencia, establece que la dignidad humana, es un principio constitucional, y un elemento definitorio del Estado Social de Derecho.

E. Disposiciones Internacionales.

I. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se la reconoce como documento hito en la historia de los derechos humanos, esta declaración establece por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.

Aunado a lo anterior, los artículos 3, 5, 9 y 19, reconocen los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la libertad de opinión, los cuales refuerzan la importancia de la creación de un Observatorio de Violencia Policial.

- **El artículo 3,** *“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”*
- **El artículo 5,** *“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”*
- **El artículo 9,** *“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.”*
- **El artículo 19,** *“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”*

II. Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos

El estado parte se compromete a respetar ya garantizar a todos los individuos que se encuentren dentro de su territorio, a su vez ratifica el deber que tiene el estado de garantizar de que ningún ciudadano será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y finalmente, su artículo 9 establece;

“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.

En atención a lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993 “*Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá*”, especialmente lo señalado en los artículos 12 y 13, el Concejo de Bogotá es competente para tramitar este Proyecto de Acuerdo, al consagrar respectivamente:

“1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”

“Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas (...)”

I. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819 de 2003, aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, en la medida en que el presupuesto fue proyectado dentro del marco del Plan de Desarrollo Distrital.

Cordialmente,

JULIÁN FELIPE TRIANA VARGAS

Concejal de Bogotá D.C.

Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 703 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA POLICIAL EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.,**

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 313 y 322 de la Constitución Política, artículos 12, numerales 1, 9 y 11 y por el Artículo 55 del Decreto Ley 1421 de 1993

Considerando**I. ARTICULADO**

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las lineamientos para la creación e implementación de un Observatorio de violencia y abuso policial en el Distrito Capital, con el fin de registrar, monitorear, reportar e informar sobre los hechos de violencia y abuso policial que afectan a la ciudadanía en Bogotá.

Artículo 2. Definiciones.

- a. Violencia policial:** también conocida como brutalidad y/o abuso policial, se refiere a la conducta en contra de la Ley de los agentes de policía, especialmente cuando hacen uso excesivo de la fuerza en contra de la población civil. Entre las conductas más comunes cometidos por los policías se incluyen: falsos arrestos, torturas, intimidación, racismo, ataques verbales y físicos, abuso sexual, homicidio ilegítimo y amenazas a la población civil.

Artículo 2. Creación del Observatorio de violencia y abuso policial. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, creará el Observatorio de violencia y abuso policial en el Distrito Capital como repositorio de datos que permita registrar, monitorear, reportar e informar sobre los hechos de violencia y abuso policial que afectan a la ciudadanía en Bogotá.

Artículo 3. Entidades responsables. La creación e implementación del Observatorio estará a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría Distrital de Gobierno, las cuales deberán trabajar de manera articulada para el cumplimiento de los fines del Observatorio.

Artículo 4. Lineamientos para la creación e implementación del Observatorio de violencia y abuso policial. La Administración Distrital, en cabeza de la la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría Distrital de Gobierno y en coordinación con las demás entidades competentes, creará e implementará el Observatorio de violencia y abuso policial, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

- a. Sistematización de información sobre los casos de violencia y abuso policial en el Distrito Capital.** Registro y publicación del número de casos de violencia y abuso policial que suceden en la ciudad desde la fecha y hacia el futuro, de acuerdo con la tipificación estipulada en la Ley. La información deberá tener en cuenta la localización del hecho, el sexo y el rango etario del denunciante y/o víctima y demás características sociodemográficas relevantes.
- b. Publicación de información relativa al estallido social.** Recopilación y publicación de información disponible respecto a los casos de violencia y abuso policial en el marco del estallido social de 2019 y 2021 en Bogotá.

- c. Información relativa al proceso de denuncia.** Información que permita orientar a la ciudadanía sobre el paso a paso para realizar una denuncia relacionada con violencia y abuso policial. El material deberá ser didáctico y de lenguaje sencillo.
- d. Repositorio informativo sobre derechos humanos.** Creación de un repositorio de material de lectura y/o audiovisual de fácil acceso que contenga información relevante sobre la defensa de derechos humanos ante casos de violencia y abuso policial. El material deberá ser didáctico y de lenguaje sencillo.
- e. Información sobre organizaciones sociales.** Repositorio de información que contenga nombre y contacto de organizaciones relacionadas con la asistencia a la ciudadanía frente al abuso policial.

Parágrafo 1. La información producida por el Observatorio deberá estar disponible al público, salvo aquella que tenga reserva legal, garantizando el principio de transparencia.

Parágrafo 2. La implementación de dichos lineamientos deberá vincularse con la Ruta de atención a Víctimas de presunto abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Artículo 5. Participación ciudadana. La creación e implementación del Observatorio deberá garantizar la participación efectiva de la ciudadanía, organizaciones sociales, víctimas de violencia policial, Academia, expertos en derechos humanos, instancias de participación del Distrito y demás actores que tengan interés en la materia.

Artículo 6. Enfoque diferencial. La formulación e implementación de las disposiciones del presente Acuerdo deberán garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razones de raza, etnia, cultura, situación socioeconómica, identidad de género y orientación sexual, ubicación geográfica, discapacidad, religión, ideología y edad.

Artículo 7. Articulación interinstitucional. El Observatorio trabajará en coordinación con la Personería Distrital, la Veeduría Distrital, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Metropolitana de Bogotá, y demás entidades con competencia en derechos humanos y control del uso de la fuerza.

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

JULIÁN FELIPE TRIANA VARGAS

Concejal de Bogotá D.C.

Partido Alianza Verde